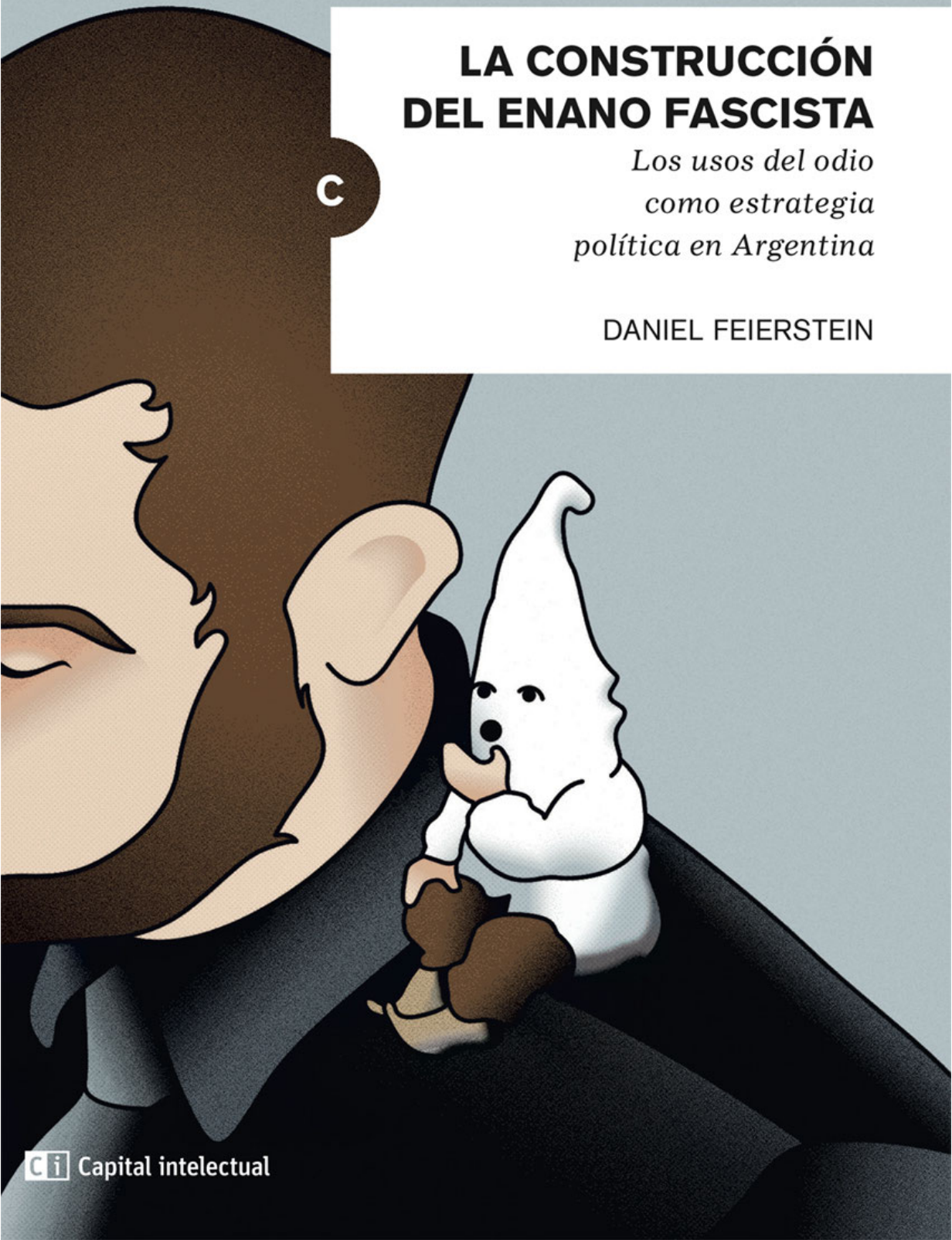
ganz1912

LA CONSTRUCCIÓN DEL ENANO FASCISTA

Los usos del odio como estrategia política en Argentina

DANIEL FEIERSTEIN



Capital intelectual

La construcción del enano fascista

ganz1912

La construcción del enano fascista

Los usos del odio como estrategia política en Argentina

Daniel Feierstein

ganz1912

Índice de contenido

Portadilla

Legales

Introducción

Capítulo 1. Sobre las definiciones de fascismo

Capítulo 2. ¿Iniciativas fascistas en la Argentina contemporánea?

Capítulo 3. La capilaridad del fascismo contemporáneo y el rol de la antipolítica

Capítulo 4. La transformación de los modos de identidad contemporánea y sus efectos en las relaciones sociales

Capítulo 5. Enfrentándose al huevo de la serpiente

Agradecimientos

Feierstein, Daniel La construcción del enano fascista : los usos del odio como estrategia política en Arg

© de la presente edición, Capital Intelectual S.A., 2019

Director: José Natanson

Coordinadora de la colección de libros de Capital Intelectual: Creusa Muñoz

Diseño de tapa: M

Diagramación: Adriana Manfredi

Corrección: Gustavo Toba

Comercialización y producción: Esteban Zabaljauregui

© Capital Intelectual, 2019

1ª edición. Impreso en Argentina.

Paraguay 1535 (C1061ABC), Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: (54-11) 4872-1300.

www.editorialcapin.com.ar

Digitalización: Proyecto451

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Inscripción ley 11.723 en trámite

ISBN edición digital (ePub): 978-987-614-597-8

ganz1912

ganz1912

Introducción

“Los argentinos tienen un enano fascista adentro”, reza el mito que se inauguró en los últimos años de la dictadura militar y se repitió sin cesar de allí en más. La frase se suele adjudicar a la periodista italiana Oriana Fallaci, aunque no resulta fácil encontrar la fuente documental que dé cuenta de la misma. Quizás no fue exactamente así, ya que las versiones accesibles en la web de aquella entrevista con Bernardo Neustadt que se suele mencionar como origen del término no incluyen esta expresión ni ninguna similar. Como suele ocurrir con los mitos, poco importa quién fue el autor original, sino el impacto que cobra como parte de una narración. En este caso, un relato que surgió en los años finales de la dictadura y fue retomado con fuerza durante el período de gobierno de Raúl Alfonsín. Los argentinos teníamos un “enano fascista adentro” y el nuevo consenso “democrático” de los años ’80 venía a conjurarlo. El Nunca Más también quería referir, entre muchos otros sentidos, a ese “enano fascista” al que los argentinos no dejaríamos volver a emerger y al que domesticaríamos con la democracia.

Este libro no busca referenciarse en ese mito sino, por el contrario, ponerlo en cuestión. No somos los argentinos, como podría creer una periodista italiana eurocéntrica, los raros ejemplares que contamos con un “enano fascista adentro” ni fue la dictadura militar el momento de su emergencia, por mucho que haya sido genocida.

¿Y entonces por qué mantener al “enano fascista” en el título de este libro? La propuesta es aprovechar el mito para revisar el sentido que ha cobrado el término “fascismo” a lo largo del tiempo, qué vinculaciones puede tener con la realidad argentina del pasado reciente y, sobre todo, con los desafíos contemporáneos.

Recurrir a la imagen mítica del “enano fascista” puede resultar útil para comprender que el objetivo fundamental del fascismo, en tanto práctica social, es habilitar y producir comportamientos que pueden efectivamente ser parte de nosotros (como argentinos, pero también de cualquier otro ser humano), así como portamos también la posibilidad de ser solidarios o de luchar por la justicia. Las distintas alternativas de nuestra relación con los otros se encuentran siempre presentes en todo ejemplar de la especie, y las luchas por la hegemonía son modos de lograr que determinadas conductas tiendan a primar sobre otras, habilitar y consolidar las mejores o peores posibilidades que tenemos en tanto seres humanos o grupos sociales en nuestros modos de vincularnos con la comunidad en la que vivimos.

El concepto de “enano fascista” será reformulado aquí como la potencialidad de ser hablados y actuados por el odio, de habilitar formas de violencia específicas que logran redirigir nuestras frustraciones hacia determinadas fracciones sociales —inmigrantes de países limítrofes o de países africanos, jóvenes de los barrios populares, miembros de agrupaciones políticas contestatarias, sindicalistas, piqueteros, árabes, judíos, gitanos— que son construidos como los “responsables” de lo que nos pasa, generando su persecución, hostigamiento, maltrato, discriminación, todo ello ejercido de forma directa o a través de las fuerzas de seguridad, y/o descargando sobre ellos el odio que proviene, por lo general, de las consecuencias que produce en nuestras vidas un sistema opresor cuyos verdaderos responsables (el poder económico concentrado, grupos transnacionales, el sistema bancario y sus “fondos de inversión”, el extractivismo minero, petrolero o sojero) resultan cada vez más invisibles e inasibles.

Pero para no quedarnos en el mito o la banalización, habrá que revisar los usos del concepto de fascismo, sus variables experiencias históricas y también su posible pertinencia o riqueza para entender la realidad argentina y regional contemporánea.

A ello se suma la convicción y necesidad de comprender que el “enano fascista” se construye, no anida dentro nuestro siempre igual. Ello requiere cuestionar su naturalización, observar que nuestras prácticas son producto de procesos sociohistóricos que tienden a habilitar, facilitar o bloquear distintos modos de relación social. El “enano fascista” es una construcción, pero ello no le quita fuerza ni realidad. Que sea una construcción no implica que no pueda instalarse con fuerza como práctica hegemónica, procesar y determinar los modos por los que definimos nuestra identidad y la identidad de aquellos que nos rodean. Frente a la emergencia de dicho riesgo es que se publica este libro.

Una periodista italiana antifascista en la Argentina del fin de la dictadura

Oriana Fallaci nació en la Italia fascista, en 1929, y fue no solo hija de un partisano sino que, como adolescente, se sumó a la resistencia contra la ocupación alemana de Italia, hacia el final de la guerra. Periodista polémica e incisiva, fue corresponsal de guerra en Vietnam y entrevistó a la mayor parte de las figuras políticas más relevantes de las décadas del ’70 y del ’80. A medida que pasaron los años, su liberalismo de cuño europeísta la fue ubicando, paradójicamente, más y más cerca de una nueva derecha eurocéntrica y antiinmigrante que se consolidó con el fin de la Guerra Fría, hasta terminar sus últimos años desarrollando una llamativa y virulenta islamofobia con llamativos puntos de contacto con aquel fascismo al que enfrentara durante tanto tiempo, pero que ahora comenzaba a surgir en una nueva modalidad, más cool y descontracturada y, si se quiere, menos nacionalista.

Sin embargo, y más allá de la decepción de sus años finales, para los argentinos que crecimos en el terror desplegado por la última dictadura, la visita de Oriana Fallaci en aquellos tempranos años ’80

constituyó un claro incentivo para legitimar y consolidar la naciente militancia política de una generación que hacía sus primeros pasos en el contexto del terror impuesto en los campos de concentración por los que había circulado la generación de nuestros padres, e incluso la de nuestros hermanos mayores.

Que una mujer pudiera decirle en la cara a Galtieri “dictador” y “torturador” en una entrevista pública en junio de 1982, que pudiera cruzar a los periodistas argentinos un año después diciéndoles: “Ustedes tuvieron aquí un genocidio, algo tan atroz no es posible sin una prensa cómplice”, que tratara de colaboracionista al mismísimo Bernardo Neustadt al aire, en su programa Tiempo Nuevo, por Canal 13, nos hacía sentir que la militancia —aún clandestina en aquellos años, pero en un contexto de nuevos aires y con la mayoría de los campos de concentración ya desmantelados o en proceso de que ello ocurriera— podía forzar la retirada de los militares.

Cuenta el mito que fue justamente en una de aquellas visitas de Fallaci al país, en aquel cruce con Bernardo Neustadt en 1983, que creó la ingeniosa frase que se haría emblema en la Argentina de los años ’80. El primero candidato y luego electo presidente Raúl Alfonsín la transformó en un caballito de batalla de su verba discursiva para enfrentar lo que denunciaba primero como el corazón de los acuerdos de la derecha en un “pacto sindical-militar” y luego como una tendencia más general de todos sus detractores, a los que veía atravesados por este autoritarismo. El mal argentino de los golpes militares reiterados, el bombardeo de la Plaza de Mayo, las luchas políticas de los años ’60 y ’70, y la propia dictadura genocida se explicaban porque “los argentinos tenemos un enano fascista adentro”. Alfonsín se sentía llamado a exorcizar a nuestro enano de la mano de la democracia, con la que “se come, se cura y se educa”. Y exorcizar al enano fascista era uno de los modos en los que el naciente alfonsinismo pensaba la “educación” de un pueblo al que se lo caracterizaba como “envuelto en la violencia”, un modo prototípico y problemático de construir una narración sobre los orígenes y consecuencias del genocidio vivido en la década del ’70 que ha vuelto a tomar fuerza en la última década, de la mano de

numerosos periodistas, historiadores o cientistas sociales que parecen haber retrocedido en el tiempo hacia aquella coyuntura de los años ochenta.

Se desplegará en este trabajo que la última dictadura argentina fue genocida pero no fue fascista, en tanto no logró movilizar a amplios sectores de la población para sumarlos al despliegue directo de la violencia; se planteará que aquella dictadura fue más bien efectiva en el objetivo de paralizarnos, de sumergir a la mayoría de los argentinos en su cotidianeidad, encerrarlos en el interior de sus casas o de sus oficinas, desconfiando de parientes, vecinos o compañeros de trabajo, y cerrando sus ojos y oídos para evitar enterarse de la magnitud de la destrucción. Este trabajo no comparte el mantra de que la argentina fue una sociedad “violenta”, en el sentido igualador de la violencia que las lógicas de los “dos demonios” han intentado construir como narración exculpatoria del genocidio.

Sin embargo, hay algo de aquella frase poco feliz que desnuda una verdad no solo válida para los argentinos o para los años de la dictadura: que la crueldad, el sadismo, el odio, no constituyen solo conductas observables en otros, sino que se encuentran, como potencialidad, como latencia, en cada ser humano y en cada relación social. Que es una posibilidad innegable en cada uno de nosotros.

La dictadura militar, con su horror y sus campos de concentración, se propuso paralizar a la población y activar no tanto el odio y la violencia sino más bien la desconfianza y el individualismo, buscó habilitar el “sálvese quien pueda” y el “a mí no me ha pasado nada”, que tan bien describiera uno de los mejores politólogos de los años ’80, Guillermo O´Donnell, lamentablemente bastante olvidado por los cultores de aquellos años en el presente. La dictadura no nos transformó en fascistas sino en aquellos monitos que denunciara tempranamente la revista Humor, tapando sus ojos y oídos para no ver lo que ocurría.

Las estrategias de la derecha argentina, en esta última década, comienzan a proponernos algo paradójicamente peor que lo que buscó instalar aquella dictadura: estas nuevas derechas se han propuesto incentivar nuestros odios, transformar nuestras frustraciones ya no en parálisis sino en agresión frente al familiar, frente al par, frente al vecino. Ahora sí se nos propone desatar la violencia contenida contra el inmigrante, el desocupado, el piquetero, el negro, el vendedor ambulante, el ratero, el manifestante urbano, la abortera, el árabe, el gitano o el judío. Insultarlos, molerlos a palos, atacarlos en banda, lincharlos, atropellarlos, acuchillarlos. Exactamente de eso se trata el fascismo en tanto práctica social, no de una violencia política direccionada y contenida como fue la de los años setenta. No fue cierta la "violencia social" colectivizada que postulan los defensores de los "dos demonios" para la época del genocidio pero, paradójicamente, sí quieren llevarnos hoy a una violencia social colectivizada, como parte de una estrategia de opresión. Algo que nuestra generación no ha conocido en la Argentina, ni siquiera durante la última dictadura militar.

Oriana Fallaci denunció la parálisis y la complicidad de numerosos sectores de la sociedad argentina con la dictadura. Y muy en especial la de la prensa, que no solo callaba sino que ofrecía sus páginas para las operaciones de los servicios de Inteligencia.

Pero hoy muchos de esos periodistas —o sus herederos, porque en la mayoría de los casos los periodistas de hoy eran niños o adolescentes durante la dictadura, o incluso nacieron después de su finalización— no solo prestan otra vez sus medios y su voz para las operaciones de los servicios de Inteligencia sino que, muchos de ellos, ahora llaman a la población a indignarse, a ejercer una violencia en banda, cobarde, la de los muchos moliendo a patadas a una persona en el suelo, la de quienes se envalentonan quemando a quienes se ven obligados a dormir en la calle, la de quienes atacan a golpes a alguien porque es negro, porque parece boliviano o paraguayo o porque usa una kipá, intentando al mismo tiempo convencernos de que una vida vale mucho menos que un celular o

una bicicleta, que el “cumplimiento de la ley” (aunque sea la ley de circular sin inconvenientes de casa al trabajo) justifica la más dura represión, el encarcelamiento e incluso el asesinato de aquellos que osen ocupar el espacio público con la protesta.

Ya no nos quieren encerrados en nuestras casas y haciendo oídos sordos al terror, como aquellos monitos que ilustraba Humor. Quieren que seamos nosotros quienes salgamos a insultar, a golpear, a agredir, a escupir. Incluso a matar. Nos incitan a ello desde los medios de comunicación e incluso desde algunos cargos públicos. Nos reiteran una y otra vez que “los argentinos hemos sido muy dóciles”. Pero parece que insubordinarnos y dejar de ser dóciles no sería enfrentarnos al poder concentrado, a la injusticia sino, como buenos cobardes, desquitarnos con aquellos que sufren más que nosotros, con los que reclaman dignidad cortando una calle o una ruta, organizando una huelga o reclamando por sus derechos.

Ahora sí buscan construir, despertar y habilitar al “enano fascista” para obligarnos a encontrar un enemigo sobre el cual descargar la violencia contenida como consecuencia de un nuevo orden que nos expulsa de la posibilidad de ganarnos el sustento con nuestro trabajo, de acceder a un sistema de salud, de contar con una educación pública de calidad o con una vivienda propia. Parece que no merecemos nada de esto y que la culpa es del que tiene menos que nosotros, del “planero”, de las mujeres embarazadas de los barrios populares (“que tienen hijos para cobrar un plan”), de los miserables que con la misérrima ayuda que reciben del Estado se estarían robando nuestro bienestar.

Al tiempo que con la lucha popular lográbamos derrotar la impunidad de los genocidas, allí a comienzos del siglo XXI se iba gestando el huevo de la serpiente fascista en los subsuelos de la sociedad argentina, de la mano de la versión recargada de los “dos demonios”, del discurso sobre la inseguridad, de la estigmatización del piquetero, del huelguista o del maestro, y de la mano también de un nuevo periodismo soez y descalificatorio y una nueva política que han hecho del insulto, la burla, la chicana, la denigración y las

operaciones de Inteligencia o los “carpetazos” sus herramientas más efectivas.

Este libro busca desplegar algunas de estas preguntas, aportando una reflexión sobre cómo es posible pensar el fascismo en tanto práctica social, cuáles de dichos elementos comienzan a darse cita en el contexto argentino, qué similitudes y diferencias pueden encontrarse con las formas más clásicas y canónicas de las experiencias fascistas (los casos español, italiano y alemán en la Europa de la primera mitad del siglo XX) y, sobre todo, el sentido que puede tener pensar la necesidad de conformación de un frente antifascista, como modo de articular los muy distintos y variados espacios de militancia que, teniendo fuertes diferencias en sus caracterizaciones y posicionamientos políticos, podrían confluir en la lucha por impedir este nuevo posible giro de las derechas argentinas.

La preocupación que inspira este libro es la percepción de que hay quienes comienzan a pensar seriamente en desplegar la posibilidad de una salida fascista contra las consecuencias de una profunda crisis económica, sociopolítica e incluso generacional que pone en jaque las funciones masculinas y femeninas, paternas y maternas, y que solo una detección temprana, la comprensión de sus lógicas (viejas y nuevas) y la creación de un frente antifascista sólido y plural para contenerla podrá conjurar dicho peligro.

Capítulo 1

Sobre las definiciones de fascismo

Preguntarse por el riesgo de una avanzada fascista en la Argentina requiere, antes que nada, clarificar de qué se habla cuando se menciona el término “fascismo” y qué sentido tendría utilizarlo hoy.

Los trabajos sobre el fascismo son innumerables y las perspectivas son de lo más diversas. También los modos actuales de utilización del término. Vale entonces iniciar este libro ingresando en la complejidad de los distintos usos del concepto para tomar una postura clara y explicitar en qué sentido se hablará aquí de fascismo, en qué sentido no, y cuál podría ser la ventaja de recurrir a dicho término para analizar la compleja realidad política contemporánea en nuestra región y, especialmente, en nuestro país.

Para comenzar a despejar el panorama, es bueno distinguir inicialmente tres usos muy empobrecedores del término que conviene evitar.

El primero es un modo falto de especificidad y simplificador, que califica como “fascista” cualquier rasgo autoritario o cualquier régimen con el que se disiente. Es así que, por ejemplo, Elisa Carrió califica a Cristina Fernández de Kirchner de “fascista de izquierda” (1), apelando a un término (fascismo de izquierda) ya de por sí cuestionable, aunque sin embargo utilizado por algunos autores, como Jürgen Habermas, Seymour Lipset o Irving Louis Horowitz. Aunque el propio término “fascismo de izquierda” es, a mi modo de ver, muy problemático, y no suele ser compartido, estos autores lo utilizan para experiencias políticas en modo alguno comparables a las lógicas del kirchnerismo, con lo cual la descalificación de su uso por parte de figuras políticas como Carrió sería doble. En el mismo tono, en su reciente libro El fascismo argentino (2), Ignacio Montes de Oca ubica en “el peronismo” (así, a secas) la matriz “autoritaria” del “fascismo argentino”, una concepción con mayor pregnancia histórica que las afirmaciones de Carrió y con acompañamientos varios en el plano político e intelectual, pero no con mayores méritos en cuanto al sentido teórico del término “fascismo” y su remisión a conductas de sujetos o a analogías sin mucho fundamento y de impacto más bien mediático, en lugar de intentar dar cuenta de

prácticas sociales. Ya un autor clásico europeo como Ernst Mandel había planteado una referencia al caso argentino en sus propios libros, al considerar como “grave error” la concepción del peronismo como fascismo, fundamentalmente porque el fascismo se propuso históricamente destruir la organización sindical de los trabajadores y recortar sus derechos, en tanto que el peronismo logró exactamente lo contrario, algo que resulta absurdo que deba señalarnos un autor alemán a los argentinos cuando resulta tan evidente. (3)

Asimismo, también desde la izquierda política o incluso desde el peronismo se ha utilizado muchas veces el término fascismo como insulto, como adjetivación descalificadora o como remisión a la represión o al autoritarismo. Es así que se incluye en la calificación de “fascistas” los golpes militares de 1955, 1966 o 1976, o a todo movimiento político autoritario, a los “gorilas”, a cualquier conato represivo ante una manifestación de masas, al accionar policial regular contra el crimen o incluso a regímenes conservadores, liberales o neoliberales.

Una de las mejores críticas a esta banalización —por derecha o por izquierda— del concepto de fascismo puede encontrarse en un trabajo clásico de la izquierda marxista a propósito del surgimiento de dicha experiencia política en la Italia de los años ’20: la crítica de Palmiro Togliatti (contemporáneo de Gramsci y cercano a él) a esta generalización del uso del término en la izquierda. Decía Togliatti:

“Ante todo quiero examinar el error de generalización que se comete ordinariamente al hacer uso del término ‘fascismo’. Se ha convertido ya en costumbre el designar con esta palabra toda forma de reacción. Cuando es detenido un compañero, cuando es brutalmente disuelta por la policía una manifestación obrera (...) en toda ocasión, en suma, en que son atacadas o violadas las llamadas libertades democráticas consagradas por las constituciones burguesas, se oye gritar: ‘¡Esto es el fascismo! ¡Estamos en pleno fascismo!’ Es preciso dejar las cosas bien claras: no se trata de una simple cuestión de terminología. Si se considera justo el aplicar la

etiqueta de fascismo a toda forma de reacción, conforme. Mas no comprendo qué ventajas ello puede reportarnos, salvo, quizás, en lo que hace referencia a la agitación. Pero la realidad es otra cosa. El fascismo es una forma particular, específica de la reacción; y es necesario comprender perfectamente en qué consiste esa su particularidad.” (4)

La segunda utilización problemática que vale la pena descartar es aquella que hace equivaler el concepto de fascismo con el ambiguo y confuso término de “totalitarismo”. Fascismo sería entonces una modalidad de ejercicio de este totalitarismo, que podría encontrarse tanto en regímenes de derecha como de izquierda y que cubriría desde las experiencias italiana o alemana hasta las de la Unión Soviética bajo Stalin, e incluso la de China con Mao (algunos hasta lo expanden hacia cualquier régimen de partido único, incluyendo el caso cubano y, ahora que se encuentra en el eje de la atención mediática, también la Venezuela de Maduro, aunque no tenga partido único). Pese al interés que poseen algunos de los análisis de Arendt en su clásica obra Los orígenes del totalitarismo (5), el término, en manos de autores como Carl Friedrich, Dwight Macdonald, Arthur Koestler o Zbigniew Brzezinski, entre otros, se transformó en lo que Slavoj Žižek ha llamado, simpáticamente, un “antioxidante ideológico”. (6) El concepto de totalitarismo, y el uso de “fascismo” como su equivalente, cobra su fuerza real (y, por tanto, su trampa conceptual) cuando se entronca en la lógica de la Guerra Fría como modalidad de igualación de nazismo y stalinismo, de autoritarismo de derecha y de izquierda y, por tanto, de rescate y glorificación de la democracia liberal “antitotalitaria” que se opondría a “ambos extremos” de la violencia. (7) Igualación banalizadora que cobra sus diversos sentidos en las “teorías de los dos demonios”. (8)

Es interesante observar cómo la homologación de nazismo y stalinismo resulta funcional tanto a esta perspectiva liberal (basada en el concepto de “totalitarismo”) como al revisionismo nacionalista de Ernst Nolte. Nolte plantea el nazismo como una “respuesta” al

bolchevismo, que habría implementado una “violencia simétrica”, explicada en espejo por la violencia bolchevique, prefigurando las lógicas de “dos demonios” que tanta pregnancia han tenido unos años después para analizar el caso argentino. (9)

Lo significativo es que este revisionismo no se presenta como tal sino que se ha construido a sí mismo como voz hegemónica con respecto a la evaluación de la experiencia nazi-fascista, y ello ha permitido una formidable operación negacionista de los orígenes y fundamentos del fascismo en su igualación con las experiencias revolucionarias bajo la fórmula de “totalitarismo”.

El concepto de totalitarismo es el mejor ejemplo de cómo la elaboración de los procesos sociales se salda en su “realización simbólica”, en aquello que los discursos hegemónicos logran que la experiencia pueda significar, para ser apresada de una u otra forma. (10) La tesis del totalitarismo fue un tabique más sólido que los ladrillos del muro de Berlín para impedir que la caída del nazismo permitiera un reflujo de la autodeterminación de los pueblos, homologando al tirano con las formas políticas que permitieron derrotarlo.

Por último, existe otra fuerte corriente dentro del campo académico que, como contrapartida de la ampliación extrema de las dos miradas previas, busca restringir la utilización del término “fascismo” para la experiencia italiana de la primera mitad del siglo XX, considerando que cuenta con una especificidad incomparable a cualquier otro proceso histórico. (11) Cada vez más extendidas en el campo de la historia e incluso avanzando en el conjunto de las ciencias sociales, este tipo de miradas se niegan a cualquier posibilidad de comparación y restringen el conocimiento de los hechos a una mera descripción densa de cada caso histórico, sin poder comprender procesos de mayor nivel de generalidad y elementos comunes presentes en casos diferentes. Estas lógicas “literalistas” terminan derivando en análisis estériles que constituyen un fuerte obstáculo para las posibles utilizaciones del pasado en las disputas políticas del presente, eje fundamental del sentido del

propio proceso de conocimiento, que no puede ser apenas una abstracción interesada en especificidades únicas y excluyentes que podrían encontrarse en cada caso. Esto es: que cada caso resulte único en muchas variables no elimina en modo alguno la legitimidad y utilidad del trabajo comparativo para la creación de conceptos que den cuenta de similitudes estructurales entre estos casos históricos específicos. El concepto de fascismo es un ejemplo privilegiado de la utilidad política de este conjunto de reflexiones, siempre que se comprenda lo que implica un procedimiento de abstracción, que en modo alguno significa postular la equivalencia absoluta de aquellas experiencias que se abstraen en el concepto común.

* * *

Es así que, más allá de encontrarse en polos enfrentados, las tres posturas descriptas previamente resultan empobrecedoras en un sentido teórico y político. Si todo régimen autoritario es fascista, si el fascismo iguala la consolidación de los sectores dominantes o su cuestionamiento (como en el caso del concepto de totalitarismo o de la díada “fascismo de derecha-fascismo de izquierda”), o si el caso italiano es tan único que no puede ser comparado con ninguna otra experiencia histórica, el análisis conceptual queda obturado. El desafío entonces radica en definir qué características estructurales darían cuenta de definiciones más útiles de fascismo para distinguir distintos proyectos, analizar sus consecuencias y evaluar, a partir de allí, en qué sentido existe un riesgo fascista en la Argentina contemporánea y en qué sentido dicho riesgo no es tal o no se deja comprender por las experiencias europeas que hemos conocido. Pregunta crucial para el presente y para todo movimiento que se proponga intervenir en la coyuntura política contemporánea.

Tres definiciones estructurales del fascismo

En un sentido más útil y comparativo, y en tanto abstracción que da cuenta de características estructurales de procesos históricos distintos, el término fascismo ha tenido tres tipos de definición:

1) en tanto ideología: la que se caracteriza por el monopolio de la representación por parte de un partido único de masas, la utilización de proyectos mesiánicos, el culto personalista del jefe, la verticalización autoritaria de la sociedad, la exaltación de la comunidad nacional y la estigmatización de quienes no pertenecerían a ella o resultarían en un peligro para su conservación, el desprecio del individualismo liberal articulado con un profundo y violento anticomunismo, la postulación de orígenes míticos de la identidad nacional y su vinculación con objetivos de expansión imperialista, la construcción de un aparato de propaganda centralizado y basado en la restricción o eliminación de los medios opositores, entre otros elementos;

2) en tanto régimen de gobierno: de carácter corporativo y vinculado al cuestionamiento de la democracia representativa liberal desde un modelo de conciliación y articulación de clases a través de las "fuerzas vivas" de la sociedad: empresarios, sindicalistas afines al régimen o creados desde el aparato estatal, estructuras militares o religiosas. Régimen tendiente, a su vez, a un dirigismo estatal de la economía; y

3) en tanto conjunto de prácticas sociales: que dan cuenta de un tipo específico de utilización de la demonización de los grupos minoritarios, de la exacerbación y proyección de los odios de los sectores medios, proletarizados o excluidos y la movilización política activa de los mismos, en tanto estrategia de los sectores concentrados del capital para destruir la organización popular —y muy en particular su expresión sindical— en contextos en los que la democracia liberal no

logra resolver las contradicciones o encuentra problemas en la construcción de su hegemonía política.

A su vez, también es importante tomar en cuenta las condiciones de surgimiento de las experiencias fascistas europeas en la primera mitad del siglo XX, a saber: el rol de las crisis interimperialistas y la disputa por el control de los territorios coloniales en África y Asia, el surgimiento de burguesías nacionales en Alemania y en Italia con intenciones de disputar la hegemonía global anglofrancesa, las transformaciones generadas por la Revolución Soviética en toda Europa y la reacción de los sectores dominantes frente al cuestionamiento de los sectores populares en cada uno de los Estados europeos, el reagrupamiento de las derechas alrededor de una alternativa que permitiera reconfigurar el mapa político a partir de la derrota de las asonadas revolucionarias en Alemania, Hungría y España, entre otros numerosos elementos.

Vale la pena detenerse brevemente en cada una de las tres lógicas estructurales (el fascismo como ideología, como régimen de gobierno y como conjunto de prácticas sociales) para describir sus elementos fundamentales y evaluar su vigencia a la luz del contexto político contemporáneo argentino. Esto es, no solo para comprender en qué sentido puede ser pertinente el concepto de fascismo sino también para aclarar en qué sentidos no lo sería. Ello también tiene una profunda utilidad teórico-política.

El fascismo como ideología

Concebir el fascismo en tanto construcción ideológica puede tener su sentido, ya que permite observar prácticas históricas con características diferentes en aquellos puntos que tienen en común, por ejemplo, el fascismo italiano, el nazismo alemán o el falangismo español, o incluso las distintas experiencias de nacionalismos

periféricos en Europa del Este, América Latina o Asia. Muchos de los trabajos teóricos sobre el fascismo tienden a priorizar este tipo de mirada estructural, la cual tiene utilidad, sobre todo en el campo de la teoría y la filosofía políticas. El riesgo, en algunos casos, es que se piense la ideología como reificada de las propias prácticas sociales en las que se inscribe y, por tanto, se termine concibiendo el fascismo más como “un modo de pensar” que como un constructo que articula modos de hacer y modos de representarse la realidad. Pero, de todas maneras, no deja de ser relevante analizar el fascismo en función del marco ideológico que estructura, en particular cuando se lo entiende como parte de las propias lógicas de la praxis.

Si tomamos la definición de fascismo presentada en el Diccionario de Política de Norberto Bobbio (12), por ejemplo, ocho de las trece características necesarias para considerar un régimen como fascista se vinculan con elementos de corte más o menos ideológico, a saber: monopolio de la representación política por parte de un partido único y de masas organizado jerárquicamente, ideología fundada en el culto del jefe, exaltación de la colectividad nacional, desprecio de los valores del individualismo liberal, colaboración entre clases, anticomunismo, objetivos de expansión imperialista y un aparato de propaganda fundado en el control de la información y de los medios de comunicación de masas.

En la mirada que prioriza este componente “ideológico”, el fascismo se caracteriza como un modo por el que los sectores dominantes buscan hegemonizar una visión del mundo en la cual se dan cita una concepción conspirativa, un nacionalismo de corte expansionista que construye como enemigos a las naciones o estados limítrofes y que busca establecer una cohesión interclasista desde la remisión a valores míticos o tradicionales. Ello se suele vincular con algunos elementos que, incluso, podrían remitir a un régimen de gobierno, como la conformación de un partido de masas, el rol de la dominación carismática y la identificación con un líder fuerte, la prohibición de los partidos de oposición y, sin dudas, la crítica a la modernidad (o incluso a la posmodernidad) desde la

defensa de los valores de familia, tradición o patria. Uno de los riesgos de una mirada que se base demasiado en la perspectiva ideológica es el de perder de vista la articulación pragmática de estos núcleos ideológicos con las necesidades del capital, articulaciones que se buscará desarrollar con más detalle en el próximo capítulo.

Más allá de la caída de los fascismos en la segunda posguerra, siempre existieron, desde aquel momento, movimientos que podrían ser caracterizados ideológicamente como fascistas en distintos puntos del globo, aunque su fuerza real tendió a ser más bien limitada, ya que no se volvió a dar una articulación con las necesidades de los grupos dominantes. Así ocurrió también en el caso argentino, en el que, sin negar la existencia de agrupaciones identificadas ideológicamente con el fascismo tanto en el campo del antiperonismo como en el campo del peronismo, estas nunca lograron la conducción del proceso político en democracia ni en ninguna de las numerosas dictaduras militares. Los sectores fascistas fueron siempre minoritarios incluso dentro de las propias fuerzas armadas argentinas y, vinculados con cierto nacionalismo difuso y por lo general xenófobo, antiinmigrante y antisemita, tendieron a ser conducidos, derrotados o hegemonizados por las corrientes más liberales. En el campo de los partidos políticos, nunca llegaron a contar con una estructura propia y constituyeron más bien pequeños núcleos dentro de los partidos existentes sin capacidad de incidencia política significativa o sectas marginadas del escenario político, como los grupos conducidos desde hace años por Alejandro Biondini.

Si bien en estos últimos años han aparecido nuevas figuras que reivindican algunos de los lineamientos ideológicos del fascismo —de las cuales quizás la más notoria podría ser la del diputado salteño Alfredo Horacio Olmedo o la de Juan José Gómez Centurión, así como en algún momento lo fueron las agrupaciones neonazis que, a diferencia de Olmedo, nunca accedieron a representación parlamentaria—, no pareciera ser en este plano propiamente ideológico en donde radicaría el mayor riesgo de

fascismo en la Argentina de hoy, en tanto que muchos de los motivos ideológicos clásicos del fascismo —partido único de masas, nacionalismo expansionista, culto personalista del jefe— no parecen tener vigencia ni capacidad de interpelación en las grandes mayorías de la sociedad argentina.

Sí puede observarse —muy en especial dentro de la alianza Cambiemos y, sobre todo, a partir de los cambios realizados para las elecciones de 2019 en la nueva configuración Juntos por el Cambio, aunque no solamente allí sino también en sectores del peronismo, en el nuevo partido Nos y en algunos partidos provinciales— un fuerte crecimiento, estos últimos años, de un novedoso anticomunismo macartista, reconfigurado como ofensiva ante las luchas feministas o por la igualdad de género, contra los colectivos LGBT, contra inmigrantes o pueblos originarios y de la mano de un ataque a las conquistas de la modernidad, pero ya no necesariamente centrado en la crítica al individualismo liberal. Quizás uno de los casos más actuales y chocantes fue la acusación del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, buscando descalificar a Axel Kicillof —candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires— acusándolo de "comunista". Esta novedad se vincula a que este neo o protofascismo ideológico del siglo XXI convive con muchas de las conquistas ideológicas del neoliberalismo, en tanto estrategia centrada en la reivindicación del consumo, la meritocracia o la preocupación individualista por el propio bienestar. En este nivel sería entonces de utilidad poder comprender los elementos estructurales presentes en ambas experiencias, así como sus importantes diferencias, aun pensando exclusivamente en los motivos argumentales que configuran cada marco de representación de la realidad.

El fascismo como régimen de gobierno

Comprender el fascismo como régimen de gobierno implica centrarse en el cuestionamiento a la organización republicana y representativa a partir de una propuesta de corte corporativo. Fue una de las características fundamentales de las experiencias europeas de la primera mitad del siglo XX pero claramente la menos actual, la menos pertinente para ser analogada a los desafíos del presente.

Entendido en este sentido, podría decirse que el riesgo de fascismo, tanto en la región como en Argentina, es casi nulo. Latinoamérica ha oscilado entre regímenes democráticos más o menos respetuosos de la institucionalidad (incluyendo aquellos que han implementado guerras de contrainsurgencia sin eliminar el funcionamiento republicano, como México o Colombia) y dictaduras militares con fuerte vinculación con los intereses norteamericanos (en todo el Cono Sur y en América Central, con características bastante distintas en cada una de estas dos subregiones, con una presencia mucho mayor del patrimonialismo en América Central). Sin embargo, si bien estas dictaduras podrían asemejarse a los bonapartismos o a las dictaduras autoritarias analizadas por autores como Gramsci o Poulantzas, son precisamente los elementos fascistas los que se encontraron ausentes en la enorme mayoría de las experiencias de la región. Pese a algún que otro conato en los años ’60 o ’70, el fascismo en tanto régimen de gobierno no tuvo nunca chances reales de avanzar, producto entre otras cosas de la falta de autonomía de las burguesías nacionales y de la fuerte dependencia de las fuerzas armadas con respecto a los proyectos e iniciativas continentales, coordinadas por los EE. UU.

Tampoco en el presente aparecen ni las condiciones ni las propuestas para reemplazar la institucionalidad parlamentaria por un gobierno corporativo que articule el empresariado, los sindicatos, las fuerzas armadas y la Iglesia católica en un conglomerado político de dicho tenor. La degradación de los sistemas democráticos en la región —más que notoria— no se debe a que sean minados por propuestas de corte corporativo sino más bien a la construcción sistemática de la apatía política, a la espectacularización y

banalización mediática de las disputas electorales, al rol asignado a las denuncias por corrupción, a la incontrolada utilización del big data y la manipulación de la subjetividad de los votantes y, como producto de ello, al intento de construir la sinonimia entre los conceptos de corrupción y de política, y a la dependencia del marketing en las campañas electorales, todo lo cual será analizado con mayor profundidad en el capítulo 3. Por lo tanto, se trata de un vaciamiento que tiende a disminuir la identificación del campo de la política como una construcción colectiva o como una herramienta para la transformación. Si bien esa apatía y ajenización pueden llegar a coincidir con numerosas prácticas sociales fascistas, no es en la propuesta corporativa en donde pareciera tomar forma dicho cuestionamiento, siendo que la salida corporativa parece efectivamente haber sido clausurada como una experiencia histórica del siglo XX.

Si bien válida y relevante como construcción de una caracterización estructural del fascismo, aquella que lo observa como régimen de gobierno tiene poco que aportar a la discusión del presente en nuestro país y en nuestra región, en tanto no parece que dicha forma de fascismo (el régimen corporativo) tenga viso alguno de prosperar como propuesta política viable.

El fascismo en tanto práctica social

Esta tercera mirada resulta hoy la más productiva, la de mayor potencial para analizar críticamente el presente y, de algún modo, sintetiza elementos de las dos miradas previas, pero reconfiguradas en su capacidad adaptativa. (13) Pero, al mismo tiempo, resulta necesario observar las similitudes y diferencias de los contextos históricos, en tanto que procesos que ocurren de modo bastante análogo pueden, sin embargo, asumir lógicas distintas articuladas

en complejos muy diferentes de alianzas sociales y necesidades históricas.

Esto es, que prácticas sociales estructuralmente similares pueden resultar herramientas potentes para resolver problemas de distinto orden en las necesidades de los sectores dominantes en momentos históricos significativamente diferentes. Ello requiere que el proceso de analogía que permite poner ambas experiencias en diálogo sea capaz de comprender aquello que las prácticas tienen en común, al tiempo que pueda distinguir los objetivos a los que sirven cuando las necesidades históricas y el contexto no son los mismos. Allí radica el aporte que pueden realizar las ciencias sociales: identificar similitudes en contextos diferentes para contribuir a pensar —este ha sido siempre el sentido último del conocimiento— las lógicas de la acción política y los desafíos en el presente.

Entendido en tanto práctica social, el fascismo implica la posibilidad de movilización activa de grandes colectivos y su participación —también activa— en la estigmatización, hostigamiento y persecución de grupos de la población (identificados a partir de su origen nacional, su diversidad étnica, lingüística, cultural, socioeconómica, política, religiosa, de género o identidad sexual, etc.).

Este conjunto de prácticas sociales se suelen articular en el contexto de frustraciones socioeconómicas que se derivan de las recurrentes crisis del capitalismo y de una brutal redistribución regresiva del ingreso, mucho más pronunciadas en las zonas periféricas, y en especial allí donde había existido cierta integración social a través de la creación de sectores medios significativos. El fascismo busca saldar estas frustraciones y descontentos en modalidades de proyección hacia estos grupos (migrantes, beneficiarios de planes sociales, miembros de distintas minorías culturales o de identidad sexual, pueblos originarios), sea que ya estuvieran negativizados previamente o que se encuentren en proceso de serlo. Precisamente porque resulta más sencillo y fácil agredir a determinadas minorías —por lo general con escasa capacidad de confrontar con estas políticas de hostigamiento— que a los

verdaderos responsables de la situación, quienes cuentan con el apoyo de la maquinaria militar estatal y también de crecientes ejércitos de mercenarios estructurados como agencias de “seguridad privada”.

Estos modos de estigmatización y hostigamiento suelen ir de la mano, también, con un cuestionamiento a las formas más igualitarias de democracia desde un comunitarismo excluyente y la denuncia de la corrupción de las instituciones como expresión de la decadencia del espíritu nacional. La “tierra y la sangre” tienden a reemplazar en los imaginarios colectivos a los “universos de derechos” conquistados durante el siglo XX. Al concebir las identidades desde esta remisión a sentimientos organizados en torno al origen, la tierra y la nacionalidad, las diferencias económicas producto de la dominación de clase se reconfiguran en diferencias esenciales derivadas de la cultura, del lugar de nacimiento, de la religión o de este conjunto de elementos entreverados. (14)

Una de las cuestiones centrales en esta tercera concepción estructural del fascismo —como práctica social— no pasa tanto por los objetivos declamados explícitamente (esto es, por el carácter de la ideología que moviliza a la población) sino por el sentido de la implementación de estas lógicas sociales y, muy especialmente, por el carácter de las prácticas en juego, vinculadas a modos específicos de utilización de la violencia, y a formas particulares de movilización social y de búsqueda de involucramiento de grandes contingentes de población en las acciones represivas, algo en lo que difiere claramente de las dictaduras autoritarias vividas en nuestro país en 1955, 1966 o 1976, que buscaban más bien la parálisis de la sociedad y desincentivaban cualquier modo de participación colectiva.

La Alemania nazi o la Italia de Mussolini serían así claras expresiones del fascismo entendido en tanto práctica social, a la vez que las dictaduras latinoamericanas bajo la Doctrina de Seguridad Nacional no podrían ser caracterizadas de dicho modo. Ello

producto de que el poder de estas últimas se basó en la parálisis social y en la organización de fuerzas de choque de carácter estatal, a lo sumo con apoyo aristocrático o con una limitada incorporación de sectores excluidos como mano de obra de las fuerzas institucionales. Por el contrario, una característica fundamental del fascismo entendido en tanto práctica social se vincula con la búsqueda de un involucramiento activo de los sectores populares, y muy en especial de sectores medios en proceso de pauperización. Este involucramiento activo se estructura en la implementación de prácticas de hostigamiento, persecución, ataque o aislamiento de grandes grupos de población, sean estas más o menos espontáneas (por lo general no lo son) o instigadas por los distintos aparatos de poder, por los partidos afines o por el aparato de propaganda desplegado en el contexto de este desarrollo fascista.

Argentina no experimentó durante sus dos siglos de existencia el fascismo como una práctica social hegemónica, más allá de haber atravesado dos procesos genocidas (uno constituyente, a fines del siglo XIX y dirigido a los pueblos originarios, afrodescendientes y caudillismos excluidos del pacto fundacional; otro reorganizador, a fines del XX, que atravesó toda la estructura nacional) y de haber contado con grupos ideológicos identificados con el fascismo, pero que nunca lograron anclaje real en las fuerzas populares. La pregunta, entonces, es si algo podría ser distinto en este siglo XXI.

Diferencias entre la parálisis social de dictaduras autoritarias y la movilización social del fascismo

Esta cuestión resulta de importancia fundamental para distinguir, en el caso argentino, experiencias políticas previas de lo que podría constituir una verdadera novedad en este siglo XXI. La movilización masiva con un sentido reaccionario no ha sido parte de la historia política argentina, con excepciones muy menores que nunca

llegaron a arraigar, como las manifestaciones y acciones clericales antiperonistas de 1954 y 1955. Los movimientos políticos que lograron movilizar a sectores medios o a grandes conjuntos de trabajadores (el radicalismo primero, el peronismo después) constituyeron en su momento iniciativas progresistas que buscaron ampliar el horizonte de derechos, bien que en ambos casos con modalidades más reformistas que revolucionarias. Aun cuando implementaron acciones represivas (ante las rebeliones obreras en la Ciudad de Buenos Aires o en la Patagonia bajo el radicalismo, con la represión a los sindicatos no dispuestos a alinearse con el régimen bajo el primer peronismo, con el surgimiento de agrupaciones nacionalistas peronistas en los años ’60 e incluso con los escuadrones de la muerte creados en el Ministerio de Bienestar Social por López Rega a partir de 1974), lo hicieron desde la estructura del aparato estatal y no se proponían involucrar la movilización de grandes contingentes ni autorizar la dispersión o autonomización del ejercicio del terror.

Es por ello que, entendido en el sentido de práctica social (aunque también vale para su comprensión como ideología), ni los movimientos populares argentinos ni las dictaduras instauradas para combatirlos pueden ser homologadas a las experiencias fascistas europeas. Cabría quizás la excepción, en relación con la comprensión del fascismo como régimen de gobierno, de una tibia deriva corporativa expresada en el inicio del gobierno de Juan Carlos Onganía —a partir del golpe de Estado de 1966— en el que se buscó ubicar a los militares como garantes de un acuerdo entre los grupos empresariales y un importante sector sindical que se proponía construir cierta autonomía de Perón, identificado con la conducción de Augusto Timoteo Vandor. Pero estas lógicas no prosperaron y la dictadura se inclinó nuevamente por una visión liberal, terminó bastante aislada, la movilización opositora fue creciendo —a la vez que algunas de las organizaciones del campo popular se inclinaron por la posibilidad de asumir la lucha armada contra el régimen estatal, en contextos donde las salidas democráticas aparecían definitivamente clausuradas— y, finalmente, Lanusse debió negociar con el propio Perón una salida electoral y el

fin de la proscripción del peronismo, en lo que se dio en llamar el Gran Acuerdo Nacional, que terminó conduciendo a las elecciones nacionales de 1973.

Las iniciativas reaccionarias en la Argentina del siglo XX, por lo tanto, pese a haber implementado un genocidio, un sistema de campos de concentración y no haber ahorrado sangre del campo popular, no se caracterizaron por la posibilidad ni la intención de movilizar en su apoyo a grandes contingentes sociales sino que confiaron su ejercicio de la dominación a la paralización generada por el terror o a distintos modos de negociación o cooptación de los movimientos populares.

El macrismo, en este sentido, constituye una novedad: se trata de la primera vez en todo un siglo en la que la expresión política directa de los sectores dominantes puede acceder al gobierno a través de una compulsa electoral no fraudulenta y sin la mediación de un movimiento de masas que no fuera propio (como había ocurrido en el caso del menemismo, que sí contaba con la fuerza del peronismo, pese a haber implementado la política exactamente opuesta a la que históricamente había defendido dicha fuerza política). El ejercicio del gobierno por parte del macrismo durante ya casi cuatro años, con una rápida y brutal distribución regresiva de los ingresos sin la malla de contención de un movimiento popular como la que tuvo el menemismo, y sin la paralización generada por un terror dictatorial, transforma las prácticas sociales fascistas en una de las escasas posibilidades para la regeneración de esta derecha en decadencia, para la búsqueda de un nuevo horizonte de apoyo en un contexto de fuerte malestar social.

Apenas a modo de ejemplo de una posible deriva y desarrollo de la situación, cabe resaltar el protagonismo asumido durante 2018 por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, y por las temáticas de su cartera (tenencia de armas por parte de ciudadanos comunes, la estructuración de un discurso xenófobo contra los inmigrantes de países limítrofes y la remisión a los mismos como explicación de la inseguridad, la legitimación de una represión letal en casos como los

de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel y las campañas contra la familia Maldonado, entre otros) o la elección del peronista Miguel Ángel Pichetto como candidato a la vicepresidencia para las elecciones de 2019, expresando un corrimiento de cierta derecha moderna y liberal hacia posiciones más xenófobas y discriminatorias.

El ministro de economía, Nicolás Dujovne, expresó la complejidad de la situación económica presente con absoluta contundencia, sea por ingenuidad o por cinismo al declarar que “nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno” (15), reconociendo precisamente la novedad del ajuste macrista en relación con las experiencias históricas previas (llevadas a cabo bajo dictaduras militares o en condiciones que implicaron el final precipitado y abrupto del gobierno que las encarara, desde el “Rodrigazo” de 1975, la hiperinflación de 1989 o la corrida bancaria y el “corralito” del fin de la Convertibilidad en 2001).

La construcción del enemigo inmigrante limítrofe en tanto “invasor” o “ladrón de derechos” (salud, educación, seguridad), la disputa con la “ideología de género”, la estigmatización del adversario político (la Kukaracha kirchnerista, el anarco-trosco-kirchnerismo, el “comunismo” del candidato peronista a la gobernación bonaerense Axel Kicillof o su origen judío), todos motivos clásicos de procesos genocidas, desde la Alemania nazi hasta la Ruanda de los años ’90 o, ahora también, el “eje del mal”, que incluye las supuestas conspiraciones (Venezuela-Cuba-Irán), los grupos indígenas e incluso campesinos (muy en especial en el caso mapuche en el sur y las especulaciones acerca de la existencia de una organización como la RAM, pero también con fuerza e importante presencia en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco o Formosa), y todo aquello que constituye posibilidades de movilización de los sectores sufrientes, propuestas para proyectar sus frustraciones en otros grupos de población, como estrategia para desviar la atención de las consecuencias del brutal aumento de la desigualdad.

¿Prácticas sociales fascistas en el presente argentino?

Entendido entonces en este tercer sentido de práctica social, la pregunta es si por primera vez podríamos estar experimentando el riesgo de que algunas de estas prácticas encuentren apoyo y consenso en la sociedad argentina contemporánea. No es fácil aún dar una respuesta, pero lo que se observa en estos últimos tiempos es, cuanto menos, preocupante.

Entre las declaraciones punitivistas o xenófobas de los últimos dos o tres años podemos encontrar un arco político demasiado amplio, que en modo alguno se reduce apenas a sus expresiones más extremas, como las del diputado salteño Alfredo Olmedo o el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, que parecen querer adelantarse a su tiempo y forzar permanentemente los límites de lo construido como “políticamente correcto”, con una atención mediática, un interés y una retransmisión que jamás habían recibido figuras como Alejandro Biondini.

Dirigentes de peso político mucho mayor han comenzado a participar de esta recomposición del mapa político de lo pensable y lo decible, que va corriendo muy notoriamente el límite de lo enunciable. Si bien se llevará a cabo un relevamiento más sistemático en el capítulo 3, vale la pena enumerar, entre las voces más importantes, a la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el ex secretario de seguridad del gobierno anterior, Sergio Berni; el ex presidente del Senado de la Nación y actual senador nacional por el peronismo federal, Miguel Ángel Pichetto (finalmente elegido como candidato a la vicepresidencia por el macrismo); el ex ministro de Educación y actual senador nacional por la Alianza Cambiemos, Esteban Bullrich. Figuras relevantes del gobierno y, en algunos casos, también de los partidos de oposición están

dispuestas a utilizar expresiones xenófobas, discriminatorias o punitivistas y alentar reacciones sociales que puedan dirigir el odio social y las frustraciones económicas hacia los inmigrantes de países limítrofes, los miembros de organizaciones de izquierda, de organismos de derechos humanos, los sindicalistas, los desocupados, los receptores de planes sociales o los pueblos originarios, entre otros grupos estigmatizados.

Y, como a partir del nazismo los fascismos posteriores no prescindieron nunca del arma del antisemitismo, también en este caso los ataques se dirigen contra los judíos, como se desprende de las manifestaciones en Tucumán contra el secretario de Derechos Humanos y contra la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), en donde con explícita gráfica antisemita se acusa al "judío Avruj" de "rechazar el derecho de opinión de los cristianos", incluyéndolo en una larga lista junto a Wilhelm Reich, Erich Fromm, Walter Benjamin, Judith Butler, George Soros u Horacio Verbitsky, lo cual habrá sorprendido sobremanera al propio Avruj, quien hasta aquel momento había coqueteado con algunos de estos grupos invitándolos en algunos casos a reunirse en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Afirmaciones de tenor similar pueden encontrarse también en las declaraciones de periodistas como Gustavo Cúneo o ex funcionarios de gobierno como Guillermo Moreno, en donde los ataques tanto al gobierno como a la oposición de izquierda pasan por su "extranjería", su judaísmo o el "no asistir a misa". Y, por supuesto, en los ataques cibernéticos de los trolls macristas o nacionalistas, donde sorprende el crecimiento y radicalización de la imaginería antisemita.

* * *

Para identificar un conjunto de prácticas sociales fascistas no alcanza, sin embargo, con la persistencia o profusión de declaraciones, sino que se requiere que el carácter simbólico de las expresiones asuma materialidad a partir de agresiones concretas, instigaciones a la delación, hostigamiento de grupos organizados o violencia paraestatal. Cabe incluir en una primera lista que será desarrollada en profundidad en el próximo capítulo:

1) Las campañas de delación, entre las que se destaca la apertura de una línea telefónica (un 0800) para denunciar a docentes que se propusieran plantear en sus clases la preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado en el sur del país, en el año 2017. Esta campaña mediática de delación se estructuró con la consigna "con mis hijos NO", cuestionando una supuesta "politización" de la educación, tendencia que se importó de las campañas contra la educación sexual en el Perú;

2) la intervención patoteril de "organizaciones" de padres o vecinos en establecimientos educativos de distintos puntos del país para impedir la implementación de clases de Educación Sexual Integral a partir de lo que se plantea como "oposición activa a las políticas de género";

3) el crecimiento de ataques de distinta envergadura a los movimientos sociales (tanto de fuerzas estatales como paraestatales, patotas civiles o mercenarios a sueldo de los terratenientes), incluyendo las comunidades originarias o campesinas en Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta, Chaco o Formosa, la organización Tupac Amaru en Jujuy, comedores populares, docentes, sindicalistas, miembros de organizaciones con presencia en barrios populares como la Garganta Poderosa o la CTEP, vandalización de monumentos conmemorativos a las víctimas del genocidio argentino, entre muchos otros;

4) limitaciones al ejercicio del periodismo, a partir de ataques físicos a periodistas durante manifestaciones de protesta o

persecución judicial a medios no afines al gobierno nacional;

5) la instigación al ejercicio de "microviolencias" en la vida cotidiana, tanto a través de los medios concentrados como de declaraciones de funcionarios oficiales o representantes de la oposición avalando el gatillo fácil, la justicia por mano propia, los linchamientos públicos, los escraches a adversarios políticos, entre otras formas de ejercicio de una violencia cada vez más descontrolada que comienza a permear el espacio público;

6) diversas modalidades de hostigamiento y persecución a la oposición política, sindicalistas combativos, periodistas o incluso científicos que se enfrentan a políticas de gobierno o que confrontan con la creciente aceptación de la profusión de estas microviolencias; y

7) el acrecentamiento del antisemitismo, como proyección clásica de las lógicas fascistas hacia un enemigo "externo", expresado no solo en numerosas declaraciones sino en ataques a sinagogas, cementerios o incluso a personas judías en la vía pública, en casos ocurridos en centros urbanos relevantes como el AMBA o Rosario.

Estas prácticas serán analizadas con mayor desarrollo en el próximo capítulo como "avanzadas" de prácticas sociales fascistas, como una "liberación de los microdespotismos" (16) que buscan involucrar al conjunto de la población en el ejercicio de la persecución a los más vulnerables, en tanto intento de "descompresión" del malestar generado por las brutales transferencias de ingresos producidas durante el gobierno de Cambiemos, muy en especial a partir del sideral aumento de las tarifas de servicios públicos y el impacto de dichas subas y de una inflación cada vez más descontrolada en el poder adquisitivo de la mayoría de la población.

¿Por qué apelar al concepto de fascismo hoy?

El fascismo surgió como una respuesta del capital concentrado ante la amenaza revolucionaria europea y cayó en descrédito a partir de la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración ideológica del mundo en el contexto de la Guerra Fría.

Las transformaciones de los equilibrios de poder internacionales, la aparición de nuevas confrontaciones coloniales por la apropiación de recursos o zonas geopolíticas en África, en el Golfo de Bengala (17), en el Medio Oriente, en las ex repúblicas soviéticas, la transformación de las lógicas migratorias, la tercerización de la violencia vía el narcotráfico y/o el fundamentalismo, el surgimiento de nuevos comunitarismos, han comenzado a generar condiciones muy distintas. La aparición de lo que Enzo Traverso ha llamado “las nuevas derechas” (18) requiere poner en cuestión las viejas certezas.

Atilio Borón, quien se ha destacado entre otras cuestiones por distinguir las dictaduras argentinas —incluso la última, con su faz genocida— de las experiencias fascistas, por motivos equivalentes a los aquí desarrollados, intenta alertar sobre el riesgo de observar estas iniciativas como “fascistas”, proponiendo prescindir de dicho término. (19) Enfrentado con aquellas visiones que comprenden el fascismo desgajado de sus condiciones históricas y como una “tendencia de personalidad” (Borón discute aquí claramente con los trabajos de Theodor Adorno sobre la “personalidad autoritaria” (20)), busca comprender las condiciones históricas de posibilidad de los regímenes fascistas para descartar que exista algo equivalente en el surgimiento de movimientos como el de Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en los Estados Unidos. Distingue para ello cuatro condiciones de emergencia del fascismo en su expresión emblemática en el siglo XX: 1) estrategia de resolución burguesa de una crisis de hegemonía, 2) intervencionismo estatal, 3)

organización y movilización de masas, en especial de las capas medias, y 4) rabioso nacionalismo.

Compartiendo las preocupaciones y los ejes del análisis de Borón, cuesta sin embargo acordar en este caso con sus conclusiones, a la vista de la realidad política regional. La reemergencia fascista contemporánea podría constituir un modo —por muy distinto que fuere de las experiencias del siglo XX, que de hecho lo es— de reconfigurar una hegemonía que se vuelve compleja para el liberalismo contemporáneo en lo que hace a la posibilidad de sostener apoyos políticos masivos dentro de un régimen representativo y sin apelar al fraude. Reorganización que podría buscar —a diferencia de las dictaduras implementadas bajo la Doctrina de Seguridad Nacional— una movilización de masas, precisamente centrada en las capas medias y como confrontación con la movilización popular que resulta de la destrucción deliberada y sostenida de las condiciones de vida de las grandes mayorías de la población.

Es cierto que esta nueva reconfiguración y resolución de una crisis de hegemonía vendría de la mano de un neoliberalismo feroz y no de un intervencionismo estatal, y en ello radicaría una importante diferencia con las experiencias del siglo XX, pero queda la duda de si dicha diferencia resulta suficiente para eliminar la posibilidad de caracterizar estos regímenes como fascistas o neofascistas, precisamente porque aquello que tienen en común con las experiencias del siglo XX pareciera resultar mucho más importante que sus diferencias, muy en especial en torno a reflexionar sobre los modos necesarios para confrontarlos políticamente. También porque ese “estatismo” del fascismo alemán o italiano no se encontraba en modo alguno escindido de las necesidades y proyectos de los capitales concentrados transnacionales, incluso de los capitales británicos o estadounidenses, que fueron parte central del financiamiento y apoyo de los regímenes fascistas, en casos como la General Motors, Ford, IBM o el conjunto de las empresas petroleras o los grupos financieros.

En este sentido, el supuesto nacionalismo “rabioso” o incluso “antiimperialista” de las experiencias italiana o alemana convivía tan bien con las necesidades del capital trasnacional de principios y mediados del siglo XX como puede hacerlo el nuevo nacionalismo xenófobo argentino o brasileño con las necesidades del capital concentrado trasnacional en este siglo XXI. Esto es, el carácter meramente instrumental del nacionalismo no sería una novedad de las experiencias actuales sino más bien un punto en común entre las experiencias europeas del siglo pasado y sus contrapartes contemporáneas: un nacionalismo exacerbado en lo retórico y en lo ideológico que no necesariamente se condice con las políticas concretas implementadas por las fuerzas que conducen dicho proceso, para quienes el bienestar de su población no fue prioritario en ninguna de las experiencias históricas y siempre quedó sumergido bajo las necesidades y desafíos del gran capital.

El fascismo ha tenido a lo largo de la historia distintas condiciones de emergencia que serán analizadas en el próximo capítulo, precisamente para comprender las similitudes y diferencias entre el contexto del surgimiento de los fascismos europeos y las realidades actuales de nuestra región. Sin embargo, es innegable que algunas de las condiciones de emergencia del fascismo original se dan cita nuevamente en el contexto actual, aunque también lo hicieron en otras circunstancias históricas sin que el fascismo pudiera levantar cabeza: la crisis económica, la inestabilidad de la moneda, el aumento de los niveles objetivos y subjetivos de inseguridad en la vida cotidiana y la afectación de todo ello en amplios sectores medios y medio-bajos, en condiciones de pauperización, proletarización, pérdida de poder adquisitivo, de derechos y de status.

Pero hoy existe un elemento más que no se encontraba presente en situaciones previas de la historia argentina en las que el fascismo no logró emerger: un notorio empobrecimiento del modo en que el progresismo (entendido en sentido amplio) intenta pensar (o más bien no pensar) algunos de los ejes que estructuran la respuesta fascista contemporánea. Creo que valdrá la pena detenerse en tres

de estos ejes, como fundamentales para comprender las preocupantes diferencias del contexto actual:

1) la corrupción (y su deriva antipolítica);

2) el aumento y transformación de las formas de la criminalidad y sus efectos en la cotidianeidad de los sectores populares y medios;

3) el rol del narcotráfico en el quiebre de lazos sociales y la especificidad de sus consecuencias en la vida cotidiana de los barrios populares y en la transformación de las fuerzas de seguridad, la vinculación con los intereses geopolíticos y la reconfiguración, a partir de ello, de los modos de circulación del capital y de los intereses de las clases dominantes.

¿Fascismo, neofascismo o “nuevas derechas”?

En qué sentido el fascismo tiene actualidad como categoría de análisis y en qué sentido no la tiene

El gran desafío de esta propuesta, entonces, es reflexionar acerca de cuál sería la utilidad teórica y política de remitir las transformaciones políticas del presente a la noción de fascismo y si, para el caso, catalogarlo como “neofascismo” podría servir para distinguir sus novedades. O si, como sugieren Borón o Traverso, sería más aconsejable prescindir del término fascismo para no homologar las realidades presentes con experiencias demasiado diferentes y meramente denominarlas como “nuevas derechas”.

Para comenzar a despejar elementos, vale aclarar que, si se piensa el fascismo como un régimen corporativo de gobierno, ninguna experiencia actual en la región parece conducir a dicho resultado y, por tanto, no sería apropiada la homologación y más bien convendría dejar el término para dar cuenta de una experiencia del pasado.

Si se busca concebir el fascismo en tanto ideología, encontramos que algunos de sus motivos argumentales están claramente presentes en los movimientos políticos latinoamericanos contemporáneos (exaltación de la colectividad nacional frente a los grupos inmigrantes o minoritarios, propuesta de colaboración entre clases, reemergencia del anticomunismo y el macartismo traducidos también como “antipopulismo”, utilización de un aparato de propaganda fundado en el control de la información y de los medios de comunicación de masas), mientras que otros aparecen como más lejanos o totalmente ausentes (monopolio de la representación política por parte de un partido único y de masas organizado jerárquicamente, ideología fundada en el culto del jefe, objetivos de expansión imperialista, desprecio del individualismo liberal). En este segundo nivel, entonces, podríamos encontrarnos con una nueva forma de fascismo (a la cual quizás sería pertinente bautizar como “neofascismo”), que aprovecha muchas de las construcciones ideológicas del fascismo rearticulándolas en función de las necesidades contemporáneas y prescindiendo de algunos de sus componentes clásicos (muy en especial de la construcción de un partido único y de la concepción expansionista, ligada a fuertes burguesías nacionales que no constituyen hoy un actor significativo por su aún mayor dependencia y subordinación a los capitales concentrados transnacionales y a la hegemonía norteamericana en la región).

Pero, como hemos adelantado, lo que resulta más potente y productivo es observar el fascismo en su tercera concepción: en tanto práctica social. Lo que cabe preguntarse aquí es si las condiciones de emergencia y necesidad de una resolución fascista se encuentran planteadas en la realidad global, regional y nacional

contemporáneas, y si las prácticas que se comienzan a observar tienen suficientes puntos en común con la experiencia fascista como para que pueda resultar útil y pertinente la remisión a dicho término.

Y, tan o más importante que ello, si las formas de confrontación con estas iniciativas pueden alimentarse de las luchas antifascistas del siglo XX. El sentido de los conceptos, de la utilización del pasado, solo cobra su fuerza en tanto herramientas para la acción. La calificación de fascismo o neofascismo para las lógicas políticas contemporáneas no puede ser concebida como insulto descalificatorio ni como mero ejercicio abstracto de literalidad académica.

Caracterizar como fascistas las realidades contemporáneas solo puede tener sentido si es que las experiencias fascistas previas —y la lucha política para contrarrestarlas— puede tener algo para enseñarnos en el presente. En la convicción de que dicha respuesta es positiva es que se ofrecen las reflexiones del presente libro.

-

1- La Nación, 9 de enero de 2019, “Voy a trabajar por la reelección de Macri, no hay posibilidad de que pierda”, https://www.lanacion.com.ar/2209501-carrio

2- Ignacio Montes de Oca, El fascismo argentino: La matriz autoritaria del peronismo. Buenos Aires: Sudamericana, 2018.

3- Ernst Mandel, El fascismo, Madrid: Akal, 1987.

4- Palmiro Togliatti, La vía italiana al socialismo, México: Roca, 1972. La referencia fue observada por primera vez en el agudo trabajo de Atilio Borón, “El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina” en Atilio Borón, Estado, capitalismo y democracia en América Latina, Buenos Aires: CLACSO, 2003.

5- Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid: Taurus, 1988. La primera versión de esta obra es de 1951 y fue la que instaló a Arendt en el ámbito académico. Arendt desarrolla allí numerosas cuestiones, entre ellas la vinculación entre colonialismo, imperialismo y totalitarismo, así como el origen colonialista del racismo y su vinculación con las necesidades de la burguesía en el momento en el que esta se consolidaba. Sin embargo, no fueron dichos elementos los más divulgados a partir del inicio de la Guerra Fría. Por otra parte, la difusión y respeto dedicados a su obra sobre el totalitarismo contrasta con la reacción producida por su trabajo sobre Adolf Eichmann (Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Barcelona: Lumen, 1999), casi diez años posterior, que le valiera infinidad de críticas y cuestionamientos, aunque décadas después pasara a ser su trabajo más citado y reconocido.

6- Slavoj Žižek, ¿Quién dijo totalitarismo? Cinco intervenciones sobre el (mal)uso de una noción, Valencia: Pre-Textos, 2002.

7- Véase Enzo Traverso, El totalitarismo. Historia de un debate, Buenos Aires: EUDEBA, 2001. Para una brevísima y excelente crítica del concepto de totalitarismo en el caso soviético, vale la pena leer el artículo de Claudio Ingerflom, “¿Ha habido un ‘totalitarismo’ soviético?”, publicado en La Ciudad Futura, 22, abril-mayo 1990.

8- Véase su reutilización en estos últimos años en Argentina en Daniel Feierstein, Los dos demonios (recargados), Buenos Aires: Marea, 2018.

9- Véase, entre otras, su obra clásica La guerra civil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo, México: Fondo de Cultura Económica, 1994. Para una crítica de Nolte, puede consultarse tanto la rica y profunda visión de Arno Mayer en Why Did the Heavens not Darken? The “Final Solution” in History, Nueva York: Pantheon Books, 1989, como el propio debate alemán entre los historiadores, por ejemplo en la versión de Charles Maier en The Unmasterable Past. History, Holocaust and German National Identity, Cambridge (MA): Harvard University Press, 1997.

10- Para un análisis a fondo de estos temas véase el concepto de «realización simbólica» en Daniel Feierstein, El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina, Buenos Aires: FCE, 2007 y en Memorias y Representaciones. Sobre la elaboración del genocidio, Buenos Aires: FCE, 2012.

11- Como referente central de esta corriente pueden leerse los trabajos de Renzo de Felice, Fascismo, Florencia: Le Lettere, 2012, pero son cada vez más los historiadores que insisten en esta visión literal de los fenómenos históricos, que cuestionan cualquier trabajo comparativo que busque construir similitudes estructurales (y por tanto la utilización de un mismo constructo teórico) para experiencias históricas diversas.

12 Norberto Bobbio, Nicola Mateucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de Política, Buenos Aires: Siglo XXI, 1991.

13 Ha sido, por otra parte, la visión más aceptada en el campo teórico marxista, en obras como las de Trotsky, Gramsci, Togliatti, Poulantzas o Mandel, entre otros. Por el contrario, la ciencia política ha tendido más a priorizar la mirada del fascismo como un marco ideológico o, de modo más común y hegemónico en la disciplina, un sistema de gobierno que busca minimizar o confrontar con las modalidades republicanas y representativas de ejercicio del poder político a partir de un organicismo de las "fuerzas vivas" (empresariado, sindicatos afines, fuerzas armadas y Estado), lo cual orienta la reflexión hacia una dirección totalmente distinta y menos congruente para analizar las realidades del siglo XXI, ya que constituye uno de los elementos menos actualizables de las propuestas fascistas del siglo XX.

14 Esta estructura fue identificada muy tempranamente por Emmanuel Levinas —quien la remitía a muchos de los valores filosóficos desarrollados por su antiguo maestro Martin Heidegger, en particular su búsqueda de la "autenticidad"— en su temprana obra Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo (Buenos Aires: FCE, 2002), publicada originalmente en 1934, con el nazismo apenas asomando. Un posible ejemplo de la resignificación de estos elementos se puede encontrar en la "crisis del campo" vivida en Argentina a partir del año 2008, donde reemergieron las concepciones de un país basado en la producción agrícola y cuyo "corazón" nacional se encontraba en la vinculación con la tierra, lo cual llevó a numerosos sectores urbanos a identificarse con un reclamo que, además de provenir de los sectores más privilegiados, colisionaba directamente contra sus intereses económicos inmediatos, en este caso impactando en el aumento de la alimentación, como ser el precio de la harina, la carne, la leche, entre otros productos esenciales. Resulta significativo observar las

imágenes presentes en este conflicto, muy ligadas al rol de la tierra, la bandera e incluso figuras católicas como las vírgenes o santos. Vale la pena también, en otro sentido pero vinculado con la misma cuestión filosófica de fondo, revisar algunas derivas de cierto indigenismo nacionalista que, en respuesta a los planteos neoliberales, termina construyendo visiones —si bien contrahegemónicas— también articulables con esta esencialización de la identidad a través de "la sangre" o "la tierra" en tanto "pueblos originarios" o "primeros habitantes" y los derechos que se derivarían de esta relación primigenia con la tierra y/o la sangre.

15 Frase pronunciada por el ministro Nicolás Dujovne en ocasión de su intervención el 14 de noviembre de 2018 en los festejos por el 50° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Valores. La cobertura de sus declaraciones puede consultarse en Infobae del mismo día, 14 de noviembre de 2018, "Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno", disponible en https://www.infobae.com/economia/2018/11/14/nicolas-dujovne-nunca-se-hizo-un-ajuste-de-esta-magnitud-sin-que-caiga-el-gobierno/

16 En uno de los trabajos más brillantes sobre la última dictadura argentina, Guillermo O´Donnell ha construido el concepto de "liberación de los microdespotismos" para dar cuenta del modo por el cual la dictadura habilitó el ejercicio de la arbitrariedad en distintos ámbitos sociales como la familia, el trabajo, la escuela o el hospital. Todo aquel con algo de poder se sintió autorizado a ejercerlo de modo tiránico. Si bien no necesariamente fascista, cuando esta característica se produce junto con la movilización activa y colectiva de estos "déspotas", el señalamiento de O´Donnell puede ser totalmente articulable con las necesidades fascistas. Véase Guillermo O´Donnell, Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Buenos Aires: Paidós, 1997.

17 Ver Samuel Berthet, “Los corredores de la discordia”, en Le Monde Diplomatique, edición 233, noviembre 2018.

18 Enzo Traverso, Las nuevas caras de la derecha, Buenos Aires: Siglo XXI, 2018.

19 Atilio Borón, “Bolsonaro y el fascismo”, Página/12, 2 de enero de 2019, disponible en https://www.pagina12.com.ar/165570-bolsonaro-y-el-fascismo

20 Véase Theodor Adorno, La personalidad autoritaria, Buenos Aires: Proyección, 1965.

Capítulo 2

¿Iniciativas fascistas en la Argentina contemporánea?

Las condiciones de emergencia

Una vez despejado en qué sentidos puede utilizarse el concepto de fascismo, resulta pertinente analizar cuáles han sido las condiciones de emergencia de las experiencias fascistas en el siglo XX y evaluar en qué medida dichas condiciones se encuentran presentes hoy. O, en caso de una respuesta negativa, si las condiciones actuales tienen puntos en común que permitan imaginar un proyecto fascista como una posibilidad concreta y viable en la Argentina de los próximos años.

Si bien los análisis sobre las condiciones de emergencia del fascismo tienen tantas facetas como las distintas definiciones del término, se podría sintetizar el eje estructural de la mayoría de ellas en la visión del fascismo como una posibilidad novedosa de resolver una crisis de hegemonía, producto de las recurrentes crisis económica y política dentro de un bloque dominante y de la amenaza que representaban las revoluciones socialistas, en el contexto de la experiencia triunfante de la Unión Soviética en 1917, de las asonadas derrotadas en Alemania y Hungría, y del surgimiento de movimientos revolucionarios en toda Europa e incluso más allá, como el caso de las insurrecciones de corte más campesino y/o nacionalista, de las cuales el caso mexicano de 1910 constituye el más visible. (21) Sin embargo, en este sentido, es importante aclarar que el fascismo surge —ello queda claro luego de arduas discusiones de las distintas corrientes teóricas— a partir de la derrota de los sectores populares, esto es: como una “realización de la victoria” de los sectores dominantes. (22)

No se trata de una respuesta en el momento de auge de las luchas revolucionarias sino de una profundización de las condiciones de opresión una vez que los proyectos contrahegemónicos han sido derrotados (es claramente la situación en los tres casos

emblemáticos del siglo XX —Alemania, Italia y España—, pero aplicable a otras experiencias como la de Hungría). El liberalismo republicano y parlamentario que aparecía como la forma política hegemónica a partir de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se encuentra con dos conjuntos simultáneos de problemas para enfrentar:

1) cómo resolver las disputas internas entre las distintas fracciones del bloque dominante, tanto en relación con las crisis producto de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia como con los conflictos entre sectores del capital (agrario versus industrial, industrial versus financiero, medios versus concentrados, burguesías localizadas versus grupos transnacionalizados) y sus posibles modos de resolución en contextos de retroceso de los movimientos populares, por lo cual se vincula con

2) cómo realizar la victoria parcial frente a la organización de los nacientes sectores obreros y su articulación con sectores campesinos, tanto en la posibilidad de su acceso democrático al poder como en la eventualidad de una asonada revolucionaria. Ello, por lo general, vendrá de la mano de un ataque feroz a las estructuras de organización de los sectores populares —sindicatos, partidos políticos revolucionarios, organizaciones de base, etc.—, que es uno de los ejes fundamentales para comprender la estructura subyacente de la estrategia fascista.

Por lo tanto, en lo que coinciden muchos de los analistas de las experiencias fascistas europeas del siglo XX es que, más allá del involucramiento activo y la participación política de los sectores medios en ambas experiencias históricas, el proyecto político fascista fue sostenido por el capital concentrado, con fuertes articulaciones continentales y extracontinentales. Sus objetivos fundamentales se proponían destruir la organización de la clase obrera y de los movimientos revolucionarios, quebrar toda posible articulación entre proletariado, campesinado y sectores medios (a

partir de la movilización reaccionaria de estos dos últimos grupos) y, simultáneamente, zanjar las disputas internas entre distintas fracciones dentro del bloque dominante, favoreciendo a los capitales concentrados, financieros y transnacionalizados, en detrimento de los sectores agrarios aún supervivientes o industriales de capital medio. Esto es, que las condiciones de emergencia del fascismo se vinculan con un modo de "realización de la victoria" por parte de los sectores concentrados del capital, de una "ofensiva" que busca capitalizar las consecuencias de dicha victoria —el aplastamiento de las comunas revolucionarias en Alemania, Italia y Hungría a comienzos de los años '20; la derrota del proyecto republicano en España, a finales de los años '30— para reformular las relaciones sociales y alterar el equilibrio de poder tanto entre las clases sociales como hacia el interior de los sectores dominantes.

Con la derrota de los movimientos revolucionarios en América Latina en las décadas del '70 y '80, el fin de la Guerra Fría y la implosión de la Unión Soviética, la amenaza de una transformación revolucionaria del orden social y económico perdió consistencia, pero llama particularmente la atención el contexto, en tanto posibilidad de "realización de la victoria" en relación con la derrota regional de la experiencia de los regímenes llamados "populistas" (23) en América Latina durante la primera década del siglo XXI que, con todas sus diferencias respecto de las experiencias socialistas del siglo previo, e incluso con todas los matices que pueden establecerse entre los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay o Uruguay, fueron caracterizadas por los sectores dominantes a escala transnacional como "nuevas amenazas" a la permanente construcción de hegemonía de los capitales globalizados.

Sin cuestionar el núcleo de la organización capitalista de la producción, estas experiencias políticas "populistas" han permitido, con más o menos fuerza según cada caso histórico, abrir la discusión sobre la creciente privatización de los recursos naturales, los modos de distribución del ingreso en cada una de sus sociedades, el rol del Estado como regulador y árbitro en la

distribución de la renta, la recuperación de la capacidad estatal del cobro de impuestos a los sectores concentrados, el fortalecimiento de grupos de poder más dependientes del mercado interno (suena exagerado llamarlos burguesías nacionales, pero son tanto burocracias generadas en el propio Estado y fuertemente asociadas a la obra pública como capitales nacionales articulados a las mismas) vinculados al uso de los fondos estatales, al desarrollo de industria liviana a partir del fortalecimiento del mercado interno o a la explotación de los recursos naturales (petróleo, gas, minería), lo que implica ciertos límites —apenas ciertos límites— a la expoliación abierta por parte de los grupos más transnacionalizados.

Ello no implica postular una equivalencia entre el desafío revolucionario de la primera mitad del siglo XX y el desafío "populista" de la primera década del siglo XXI —experiencias sin duda totalmente diferentes—, sino que la alternativa fascista puede resultar efectiva, con todas sus diferencias de implementación, como realización de otro tipo de victoria frente a fuerzas que, en un sentido geopolítico como en el planteo de instituciones como la UNASUR o un banco regional sudamericano, o el desafío a la hegemonía norteamericana en la región a partir de incipientes alianzas con Rusia, China o grupos como el BRICS, implicaban tibias aunque insidiosas formas de cuestionamiento a la hegemonía de los capitales transnacionalizados en América Latina, muy especialmente del tipo de dominación ejercida por los Estados Unidos en el subcontinente.

Observar el fascismo como una estrategia de "realización de la victoria" puede permitirnos comprender los puntos en común entre su sentido y viabilidad en el siglo XXI de América Latina, así como su novedad y también sus diferencias, tanto efectivas como potenciales, con las experiencias europeas de la primera mitad del siglo XX. A su vez, esta perspectiva nos recuerda que el fascismo no implica necesariamente un quiebre que se da de un día para el otro sino que, como todo proceso histórico, se va construyendo y va avanzando durante años en modos de organización que aún no son fascistas pero que van instalando la legitimidad de ciertos modos de

relación social que, gradualmente, hacen viable dicha salida. Resulta central pensar de este modo el presente en la coyuntura regional y argentina actual.

El apoyo de los grupos económicos concentrados al fascismo

Las intuiciones de carácter más bien hollywoodense que plantean el fascismo como una tercera vía a la confrontación entre el capitalismo concentrado y transnacionalizado y la “amenaza bolchevique” pueden ser descartadas al observar no solo el fuerte apoyo de los sectores dominantes alemanes e italianos al nazismo y al fascismo sino, lo cual resulta aun más significativo, el entreveramiento y participación de las más importantes empresas transnacionales y estadounidenses con el propio nazismo, no solo antes de la Segunda Guerra Mundial sino, en muchos casos, durante el transcurso de la misma.

Andrés Barreda ha sintetizado muchas de estas articulaciones en una obra que todavía se encuentra en preparación, pero de la cual nos ha adelantado algunas de sus conclusiones principales. (24)

El rol de las empresas alemanas en el surgimiento y consolidación del nazismo es bastante conocido, comenzando por la estrecha colaboración con I.G. Farbenindustrie (25) (reconvertida después de la guerra en las dinámicas empresas químicas y farmacéuticas Bayer, BASF y Hoechs), que no solo aprovecharía, como muchas otras empresas, la mano de obra esclava de los campos de concentración nazis sino que se encargaría de aportar el gas necesario para el exterminio sistemático de poblaciones. Vale sumar a ello la vinculación del nazismo con muchas de las empresas de la época como Krupp, Rotsberg und Diëhn, AEG y Siemens en la rama del acero, Tyssen en el acero y la hulla, Daimler Benz y Bayerische Motoren-Werke (BMW) en la rama automotriz, Hamburg Amerika

Linie en el transporte, las líneas aéreas de transporte Condor y Lati, DuMont Schauberg Group en la industria editorial. Reichsbank, Deutschbank, Commerz und Privat Bank, Dresdener Bank, Deutsche Kredit Gesellschafts, Allianz, los magnates de Colonia y otros barones en el área de las finanzas.

Algunas de estas empresas —las más emblemáticas— fueron juzgadas en los Juicios de Núremberg, donde directivos de I.G. Farben, Krupp o Flick fueron condenados por el uso de mano de obra esclava, entre otros delitos. Sin embargo, la gran mayoría de estas compañías no tuvieron grandes costos por el rol jugado durante aquellos años y continuaron siendo centrales en la estructuración del capitalismo alemán de posguerra.

Menos conocido, y más relevante para el análisis de las condiciones de emergencia de los fascismos europeos, es el análisis que realiza Barreda de la participación de empresas internacionales con sede en EE. UU. o en países de Europa occidental. Entre las compañías estadounidenses más importantes, Barreda incluye: el sector petrolero (Standard Oil y Texaco), la gran industria automotriz (Ford (26), General Motors (27) y Opel), la ingeniería de construcción (Bechtel), las innovadoras empresas de comunicaciones telefónicas (ITT) (28), la más poderosa empresa de cómputos (IBM) (29), la industria eléctrica (General Electric), la emblemática Coca-Cola, la fotográfica (Kodak), así como los capitales financieros (el Chase Manhattan Bank y el Citibank). Barreda incluye en su análisis empresas transnacionales de otros orígenes, como el caso de la petrolera angloholandesa Shell o la fábrica de motores ingleses Rolls Royce, entre muchas otras.

Lo más importante de investigaciones como las de Barreda, Sutton o Black es que desarman la visión que piensa los fascismos como expresión de burguesías nacionales —en este caso, alemanas o italianas— intentando construir un proyecto nacional en oposición a los intereses del capital concentrado transnacional de la época. Los profundos lazos de articulación entre los capitales alemanes e italianos con aquellos con sede en EE. UU., Gran Bretaña u

Holanda y la apuesta, como sugiere Barreda, de que el avance militar alemán permitiría conquistar las reservas petroleras rusas de Bakú autoriza matizar los modos de pensar las articulaciones entre los sectores empresariales alemanes e italianos y los británicos o estadounidenses. Es recién ante la derrota en Stalingrado y el definitivo cierre al acceso a estas fuentes de energía que se reconfigurarán las alianzas y se abrirá el frente occidental con el desembarco en Normandía y la derrota definitiva del nazismo. Pese a ello, tanto las grandes empresas alemanas como muchos de los dirigentes políticos y científicos del nazismo serán reincorporados en la estructura de poder en empresas en EE. UU. y en el proyecto de ocupación y reconstrucción de Alemania bajo las lógicas de la Guerra Fría.

Entender el fascismo del siglo XX como una estrategia de realización de la victoria de los sectores del capital concentrado permite observar con mayor claridad sus puntos de contacto con los riesgos fascistas en el siglo XXI, que —pese a las importantes diferencias de contexto— puede constituir también una modalidad de realización de la victoria, en este caso a partir de la derrota no solo de las posibilidades revolucionarias sino de los modos de organización de los sectores populares que, a través de regímenes reformistas, habían logrado limitar significativamente las tasas de explotación o la distribución regresiva del ingreso en distintos puntos del globo.

Algunas prácticas que podrían categorizarse como iniciativas fascistas en la Argentina de hoy

La lógica de realización de la victoria con respecto a los regímenes categorizados como “populistas” en América Latina tiene experiencias muy distintas, que ubican su momento de mayor desarrollo en Brasil con el golpe institucional a Dilma Rousseff, la

profundización del funcionamiento de los “escuadrones de la muerte” y el asesinato de líderes políticos y sindicales durante el gobierno ejercido por Michel Temer, la proscripción de Lula ante la posibilidad de un retorno político del Partido de los Trabajadores (PT) y el triunfo electoral posterior de Jair Bolsonaro, con un programa con numerosos puntos de contacto con el ideario fascista y con apoyos fundamentales en la Fuerzas Armadas brasileñas y en los movimientos evangelistas pentecostales. Sin embargo, al no resultar posible aún un análisis en profundidad de los puntos en común y las diferencias de las experiencias en cada país latinoamericano, vale centrarse en algunas características del caso argentino, que es el que se puede analizar con mayores elementos desde el propio territorio en el que se escriben estas líneas.

A partir de las reflexiones previas sobre los puntos en común y diferencias entre las condiciones de emergencia de los fascismos del siglo XX y el estado en que se encuentra la región en esta segunda década del siglo XXI, con la caída o puesta en cuestión de la mayor parte de las experiencias “populistas”, cabe entonces analizar un conjunto de prácticas sociales con distintos vínculos con prolegómenos de lo que podríamos caracterizar como iniciativas fascistas, como puntas de lanza que permitan pensar en la viabilidad del avance de este conjunto de procesos en los años por venir. Este conjunto de prácticas no necesariamente implican una organización concentrada ni una intencionalidad manifiesta sino la lenta germinación de determinados procesos que parecieran confluir en una estructura que va asumiendo los contornos de un proyecto fascista.

1) Campañas de delación

La delación es una de las formas más efectivas de quiebre de lazos sociales de cooperación y solidaridad en una sociedad. Es por ello

que todo genocidio moderno se ha caracterizado por tener, como una de sus técnicas fundamentales, la instigación a la delación como un modo de transformar a cada ciudadano en el enemigo de los demás. El fascismo también tiene la delación como una de sus prácticas fundamentales. Una de las diferencias entre los genocidios fascistas y los que no lo han sido se basa en que, en el caso del fascismo, esas lógicas de delación no buscan solo la recurrencia a la autoridad para generar un castigo aterrorizador y ejemplificador sino también el involucramiento del conjunto de la población en la persecución y castigo a los “delatados”. Esta participación implica un importante salto cualitativo en las modalidades de destrucción de lazos sociales de cooperación que permiten las campañas de delación. No es equivalente delegar el ataque al otro estigmatizado en las fuerzas de seguridad que asumir dicho ataque en la propia acción, involucrándose en las formas de hostigamiento.

Una de las novedades más graves en los últimos años en Argentina ha sido la aparición de iniciativas que instigan a la delación, algo que no se veía desde el fin de la última dictadura militar. Pero en esta nueva ocurrencia, las iniciativas tienen una modalidad fascista que no había estado presente en su versión dictatorial en los años setenta.

Si bien algunas campañas han apuntado a la población inmigrante y otras —como en el caso de Bahía Blanca— a los supuestos “aliados de los narcotraficantes”, el caso más grave y emblemático, por lo que implica en cuanto al quiebre de lazos sociales, ha sido la persecución a los docentes iniciada en 2016, aunque con antecedentes previos de estigmatización, en el contexto de las luchas gremiales. No es casual la elección del enemigo —tanto por el gobierno nacional macrista como, muy en especial, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires conducido por María Eugenia Vidal—, ya que precisamente es la función del maestro o profesor una de las que ha logrado históricamente mayor capacidad de vincular solidariamente distintos sectores sociales. La escuela pública ha sido en muchos casos el ámbito de confluencia de pluralidades políticas y sociales o el espacio de socialización que

resuelve carencias del núcleo familiar a través de un diálogo cooperativo que trasciende el ámbito de los medios masivos de comunicación como espacios de información y socialización. En territorios cómo México, hace tiempo que son los maestros normales los que sufren gran parte de las agresiones de los grupos paraestatales y la criminalidad organizada, ya que son identificados como el foco de las posibilidades de articulación política regional y plural, así como del diálogo entre sectores medios y campo popular, históricamente explosivo. El caso de Ayotzinapa es apenas un ejemplo de los centenares de ataques y masacres a maestros normales en el México del siglo XXI.

Resulta entonces significativo que, a partir de 2016, fueran precisamente los docentes aquellos sujetos elegidos para descargar sobre ellos la estigmatización mediática y política, a la vez que se organizó contra ellos una fuerte campaña de delación. El ataque contra los docentes —y muy en particular contra sus organizaciones gremiales— ya había tenido antecedentes durante el menemismo y durante el kirchnerismo. Resulta imposible olvidar el discurso de apertura de sesiones del Parlamento del 2012, en el que Cristina Fernández de Kirchner los fustigara como parte de la disputa por la paritaria salarial, acusándolos de trabajar solo media jornada, de tener tres meses de vacaciones (ambas afirmaciones manifiestamente falsas) y de tener una estabilidad en el empleo con la que no se contaba en otras ramas, sin mencionar que en aquel momento —como desde hace décadas— el salario docente era uno de los más bajos de toda la escala nacional.

Sin embargo, la asunción del macrismo implicó un salto cualitativo, con las campañas personalizadas de agresión contra Roberto Baradel (secretario general de SUTEBA, el gremio más masivo de los docentes de la provincia de Buenos Aires), que incluyeron difamaciones, operaciones de inteligencia y un brutal ataque contra su persona y su familia, la represión a una manifestación docente en la Plaza de Mayo a comienzos de 2017, las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal y la apertura por parte del gobierno de una línea telefónica gratuita (un 0800) para denunciar a

docentes de todo el país que se propusieran plantear en sus clases la preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado en el sur del país, producida en agosto de 2017. (30)

Durante los meses en los que Maldonado estuvo desaparecido, la campaña contra los docentes contó con una importante participación de padres, vecinos e incluso también algunos profesores y maestros en la implementación de las delaciones y en el reclamo y aplicación de sanciones a quienes hubieran mencionado el tema en el aula, tanto en la educación pública como en las escuelas de gestión privada. La campaña fue creciendo, incorporando otras modalidades de lo que se considerara "politización" en el aula, buscando de este modo impedir o limitar a los docentes de todos los niveles el ejercicio de la preocupación solidaria por situaciones de opresión o violaciones de derechos humanos vividas en el país, considerando dicha función fundamental de la enseñanza como una espuria "utilización política" del aula.

Una de las campañas mediáticas de delación con mayor pregnancia —y con fuerte presencia en las redes sociales— se estructuró desde esta denuncia de la "politización", bajo la consigna "con mis hijos NO", implementada a partir de 2017. Llama a su vez la atención que, al tiempo que el gobierno nacional y de distintas jurisdicciones (ciudad y provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza, entre las más significativas, todas gobernadas por la alianza Cambiemos) convocaba a participar en la campaña, las mismas escuelas eran utilizadas por dichos gobiernos para campañas políticas en spots donde los niños debían participar en actos con el presidente o los gobernadores, que se les imponían verticalmente desde las autoridades escolares de mayor jerarquía. Sin embargo, no era a ello a lo que apuntaba la campaña "con mis hijos NO" sino, por el contrario, a estigmatizar y hostigar a los docentes que intentaban llevar al aula la profunda preocupación por situaciones de violencia vividas en el país o en el propio barrio. Situaciones que van cobrando cada vez mayor gravedad y continúan al día de hoy, resultando especialmente difícil para los maestros poder continuar en su tarea de sensibilización por temor a ser interpelados y

sancionados como parte de estas campañas. Si bien las sanciones aún no fueron significativas —ADEMYS ha relevado una en San Isidro y tres en la provincia de Chubut, lo cual es una muy pobre respuesta en relación con la cantidad de medios invertidos por parte del gobierno—, tanto los directivos escolares como el conjunto de los planteles docentes se han visto obligados a reevaluar cada actividad de aprendizaje ante el posible riesgo de denuncias y sanciones.

A estos ataques de carácter político se suma una profunda ofensiva económica, que ha llevado a la destrucción del medio turno docente —lógica vinculada a la necesidad de preparar las clases, corregir los exámenes, pero también evaluar los roles asociados de la escuela en tanto espacio de contención y articulación social— en el cálculo de una canasta mínima que ya solo toma en cuenta la “doble jornada”, lo cual implica que las ocho horas de trabajo se realicen “frente a curso”, sometiendo al docente a una jornada extra de preparación y corrección por fuera de su horario de trabajo, a invadir el aula con dichas tareas y, sobre todo, a imposibilitar cualquier función socializadora de la actividad docente, siendo que los mismos quedan arrasados por las horas necesarias para garantizar una retribución todavía insuficiente para hacer frente a las necesidades básicas.

Estas campañas resultaron iniciativas relativamente exitosas para enfrentar a padres y vecinos con los docentes, a docentes entre sí o incluso a los propios estudiantes contra los docentes, instando a la “comunidad” a “invadir” el espacio áulico hostigando a las autoridades escolares y profesionales de la educación, obstaculizando el ejercicio de las tareas docentes, buscando intervenir en el diseño curricular, en los temas de enseñanza, en las modalidades de la misma, interpelando desde las familias a los propios niños y adolescentes para que “denunciaran” el “uso político” en el aula y confrontando a todos contra todos, en especial ante los intentos de resistir las políticas de ajuste y la implementación de medidas de fuerza por parte de los gremios docentes.

Pero, fundamentalmente, la consecuencia de estas lógicas de delación —en muchos casos facilitando también la denuncia anónima, forma cobarde de hacer emerger resentimientos, envidias, odios diversos— busca el quiebre y destrucción de la figura del docente en tanto articulador social, la cual resultó central en distintas experiencias históricas, muy en especial en los sectores populares.

2) Oposición activa a las "políticas de género"

Estas campañas de delación contra los docentes y otros sectores (inmigrantes, opositores políticos, vecinos de barrios más carenciados que el propio, entre otros), se han acompañado de reacciones de distintos colectivos sociales para enfrentar —también en el aula, en los centros de salud, en hospitales o en otras instituciones públicas— lo que se ha dado en llamar, de modo intencionalmente confuso y estigmatizador, las "políticas de género".

Estructurándose como reacción ante los debates parlamentarios por la posibilidad de sancionar una ley que garantizara la interrupción legal del embarazo — proyecto de ley presentado en 2018 y que finalmente terminó rechazado por una pequeña diferencia de votos en la Cámara de Senadores—, se inició una contraofensiva de distintos colectivos sociales (movimientos católicos o evangelistas, grupos tradicionalistas) para poner en cuestión no solo la legalización del aborto sino las campañas de educación sexual desarrolladas en escuelas o centros de salud y que cuentan con leyes sancionadas en los últimos veinte años, con fuerte aprobación parlamentaria. Incluso en algunas provincias del norte del país — Jujuy o Tucumán como las más emblemáticas, una gobernada por la alianza Cambiemos y la otra por el peronismo— se ha puesto en cuestión la propia legislación existente sobre el aborto, impidiendo a niñas poder ejercer su derecho, tanto a través de la irrupción de

“patotas civiles” como de decisiones médicas o de funcionarios políticos en distintos establecimientos sanitarios. Grupos de “padres” o “vecinos” se hacen presentes en escuelas de distintos puntos del país para impedir la implementación de clases de educación sexual integral, grupos de “militantes de las dos vidas” irrumpen en centros de salud para impedir la realización de abortos permitidos por la estructura legal vigente (en casos de violación, por ejemplo). Uno de los casos más graves ocurrió a comienzos de 2019 en la localidad de San Pedro, provincia de Jujuy, con la anuencia de su gobernador, Gerardo Morales. El otro, al mes siguiente, en la provincia de Tucumán, también con la anuencia de su gobernador, Juan Manzur.

Esta movilización de sectores reaccionarios se diferencia de la paralización clásica de las dictaduras argentinas, asumiendo caracteres fascistas en tanto búsqueda de movilización activa que se orienta al ataque a las instituciones que permitían la articulación de los sectores populares: sindicatos, escuelas, centros de salud, hospitales, organizaciones vecinales.

Las asociaciones religiosas han tenido un rol central en estos procesos de movilización (tanto grupos conservadores católicos como, muy en especial, grupos nucleados alrededor de las iglesias evangélicas pentecostales). Pero la movilización excede la cuestión religiosa y en muchos casos es motorizada por los propios aparatos de gobierno, muy en especial en provincias conservadoras como las del noroeste, Cuyo, o el centro del país (Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, entre otras).

3) Ataques de distinta envergadura a los movimientos populares

Si el eje del proyecto fascista es la destrucción de las posibilidades de organización popular, como un modo de realización de la victoria

de los sectores dominantes, merece especial atención el crecimiento de los ataques (tanto de fuerzas estatales como paraestatales o mercenarios a sueldo de los terratenientes) a distintos grupos organizados, entre los que cabe mencionar: las comunidades originarias o campesinas en Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta, Chaco o Formosa, los ataques y persecución penal sostenida a la organización Tupac Amaru en Jujuy, los ataques de "misteriosas fuerzas patoteriles" (con clásica reminiscencia paraestatal) a docentes en huelga en escuelas del oeste y el sur del conurbano bonaerense, la vandalización de monumentos conmemorativos de las víctimas del genocidio argentino, el ataque a sedes de organismos de DD. HH., los ataques a comedores populares en el conurbano bonaerense, las amenazas y ataques a organizaciones sociales como La Garganta Poderosa o la CTEP —que han incluido el asesinato de algunos de sus miembros— y el aumento feroz en los modos de criminalización de la protesta social.

Solo en una enumeración parcial y limitada que ya contaba con varios antecedentes en los últimos años del gobierno kirchnerista (fundamentalmente la represión de conflictos sindicales con cortes de calles o toma de establecimientos, o la criminalización de la protesta social) vale la pena puntualizar en los casi cuatro años de gobierno macrista: la tortura y simulacro de fusilamiento a militantes de la organización La Poderosa en el barrio Zavaleta (septiembre de 2016), el ingreso a los tiros y con gas pimienta de la policía de Lanús en un comedor del MTE en Villa Caraza (abril de 2017), la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado (agosto de 2017), el ataque a tiros a Julia Rosales, dirigente de la CCC en Villa Martelli (agosto de 2017), el asesinato de Rafael Nahuel en el Lago Mascardi, Bariloche, por fuerzas de la prefectura (noviembre de 2017), el asesinato por parte de la policía chaqueña de Ismael Ramírez (de 13 años) en el marco de la represión a un intento de saqueo de supermercados (septiembre de 2018), el secuestro y tortura de una docente en la localidad de Moreno (septiembre de 2018), el ataque a tiros a Héctor Reyes Corvalán, en el marco de un intento de desalojo en la provincia de Santiago del Estero (octubre de 2018), el asesinato por parte de la Policía Bonaerense de

Rodolfo Orellana (miembro de la CTEP) en el marco de la represión a un intento de toma de tierras fiscales en Puente 12, La Matanza (noviembre de 2018), el asesinato de Marcos Soria (también militante de la CTEP) por parte de la policía cordobesa, cuando intentaba escapar de una brutal golpiza en Barrio Angelelli II, Córdoba (noviembre de 2018).

Si bien estos hechos no han llegado a los niveles de gravedad de lo ocurrido en el vecino Brasil a partir de la destitución de Dilma Rousseff (que ha incluido varias decenas de víctimas asesinados por fuerzas policiales o parapoliciales) o en América Central y México, donde el ataque lleva décadas y se ha cobrado centenares o miles de víctimas, resulta importante poder comenzar a contabilizarlos y a comparar su recurrencia en relación con períodos políticos previos, así como sus efectos disgregadores en la posibilidad de organización de los sectores populares.

4) Limitación del ejercicio del periodismo

También una novedad de los últimos años se ha vinculado con los reiterados ataques a periodistas durante manifestaciones de protesta en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país. Los ataques son producto, en muchos casos, de las propias fuerzas de seguridad, que no solo “marcan” previamente a sus víctimas sino que las agreden (incluso, en varias situaciones, los han baleado a quemarropa con munición de goma) sin respeto alguno por sus credenciales. Uno de los casos más actuales ha sido la represión al “verdurazo” realizado en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de febrero de 2019, aunque la práctica ya tiene numerosos antecedentes desde comienzos de la segunda década del siglo XXI. A ello se agregan, en estos últimos años, agresiones a periodistas realizadas por patotas “civiles” durante las manifestaciones, aunque en muchos casos estos “civiles” se encuentran sospechosamente

articulados con la operatoria de las fuerzas de seguridad o vinculados con organismos de gobierno.

Estas agresiones se han articulado con una fuerte ofensiva legal contra los medios de prensa opositores, buscando su vaciamiento económico o la profundización de los problemas de gestión que pudieran aparecer. Entre estas situaciones destaca el caso del canal de noticias C5N, donde una resolución judicial impidió la posibilidad de la apertura de una cuenta bancaria que permitiera derivar los ingresos publicitarios al pago de salarios de los periodistas como prioridad de gestión y como acreedores preferenciales.

Este conjunto de limitaciones se realiza en un momento caracterizado por una inédita concentración mediática en dos o tres grupos empresarios —que también tienen la posibilidad de ser propietarios u operadores de los insumos técnicos de circulación de la comunicación como la propia producción de papel o los servicios de banda ancha o telefonía celular—, todo lo cual genera como resultado la virtual ausencia de determinadas temáticas en los medios de comunicación de masas y ya no meramente la preeminencia de determinadas miradas editoriales.

5) Instigación a las microviolencias

Uno de los elementos fundamentales de todo proyecto fascista se vincula con la instigación y legitimación del ejercicio de la violencia por parte de importantes grupos de población, característica que diferencia al fascismo de otras experiencias autoritarias, en especial las dictaduras desmovilizadoras. En este sentido, puede identificarse un crecimiento de la instigación, tanto mediática como incluso por parte de numerosos funcionarios oficiales, entre los que cabe destacar al presidente de la Nación o a la ministra de Seguridad, en relación con el ejercicio de la justicia por mano propia,

el uso de armas por parte de la población, los linchamientos populares o el gatillo fácil policial.

La ministra de Seguridad ha sido la más insistente en estas políticas. En declaraciones que desataron una verdadera polémica por la escasa aceptación de la portación de armas en un país como Argentina, y a propósito de una intervención policial en la que se asesinó a un delincuente por la espalda, consultada sobre si a partir de este caso los ciudadanos podrían querer estar armados o hacer justicia por mano propia, la ministra declaró: “Eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que ande armado; y el que no quiere estar armado, que no ande armado. Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada”. (31)

En el caso del juicio a Daniel Oyarzún, quien persiguió con su auto y atropelló a un delincuente, declaró, en el mismo sentido: “Ayer el juicio por jurados tuvo un criterio de sentido común. Había un trabajador que fue robado y que fue víctima, y un delincuente que fue victimario. El trabajador intentó defenderse y las 12 personas de ese juicio pensaron que cuando hay alguien que agrede, un victimario y una víctima, hay que estar del lado de la víctima. Eso es lo que creemos como gobierno y como Ministerio de Seguridad. El victimario tiene derechos pero la víctima es la que sufre la agresión, la que sufre el delito. En este caso creemos que los 12 jueces del juicio por jurados actuaron con sentido común, como hubiéramos actuado nosotros. Como hubiera habido que actuar en muchos casos donde se termina condenando al policía o a la víctima en vez de condenar al victimario. Algunas cosas en este país están cambiando”. (32)

En un contexto caracterizado desde hacía ya unos años por el crecimiento de los linchamientos públicos y la crispación social, estas declaraciones no han hecho más que legitimar e instigar a las personas a resolver de modo cada vez más violento e individualista las situaciones cotidianas, demoliendo la posibilidad del respeto a la ley como alternativa al ejercicio directo de la violencia.

Estas iniciativas se articulan con un aprovechamiento y transformación de una práctica surgida al calor de la lucha contra la impunidad de los responsables de un genocidio: el escrache, en tanto manifestación colectiva del repudio social a la presencia de torturadores en la vida cotidiana. Esta práctica que, en su origen, implicaba una articulación solidaria de vecinos y grupos sociales para confrontar la impunidad de quienes habían vulnerado del modo más tremendo posible los lazos sociales de cooperación de una comunidad, se ha reconfigurado como una legitimación del linchamiento público ya no solo de delincuentes sino de cualquier opositor político estigmatizado por los medios concentrados de comunicación, de cualquier acusado por comportamientos machistas o de cualquier práctica demonizada por el aparato mediático.

Es así que la mera pertenencia a una organización política, el ejercicio de un cargo público (ejecutivo, legislativo, judicial) o la presunción de haber cometido algún delito —por lo general de carácter económico o vinculado a la corrupción, pero no solo ello— comienzan a resultar suficientes para legitimar ataques en la vía pública, que dificultan la disputa política y convierten el espacio compartido en un territorio de batalla, en el que la primera y única respuesta ante el desacuerdo pasa a convertirse en la agresión física violenta, la exclusión definitiva de la comunidad y el repudio automático.

Este modo de desatar el conjunto de las microviolencias constituye un eje central de las prácticas fascistas, en tanto elimina la posibilidad de una confrontación razonada o del uso de la palabra para reemplazarla por una violencia que solo comprende el lazo social en términos de “amigo-enemigo”, lo cual explica aquello que fue caracterizado en esta segunda década del siglo XXI como “la grieta”, quiebre del lazo social incluso al interior de las propias familias, de los grupos de amigos o de cualquier organización popular.

6) Modalidades de hostigamiento y persecución a la oposición política

En esta lógica de profundización y agudización del odio político —y a partir de la constatación de su efectividad electoral en la renovación parlamentaria de 2017— se generalizaron campañas mediáticas de hostigamiento de sindicalistas, científicos o políticos opositores. Existen numerosas sospechas y denuncias sobre el funcionamiento de un “centro de trolls” dirigido desde la Jefatura de Gabinete. Una de las más significativas fue el estudio de Amnistía Internacional en 2017, en cuyo informe se destacó la existencia de cuentas de redes sociales dependientes del Poder Ejecutivo y destinadas a atacar y hostigar a personalidades defensoras de DD. HH. o periodistas. Se incluían aquí cuentas anónimas (cien de ellas con la misma secuencia alfanumérica), bots y otras cuentas con usuarios reales que se conjugan en ataques sistemáticos a distintas personalidades que llevaban a cabo críticas a las acciones de gobierno. El informe de Amnistía Internacional incluyó el análisis de 354.000 tuits en el período entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre de 2017. La mitad de los tuits relevados con ataques pertenecían a cuentas vinculadas al gobierno nacional. Un informe similar fue presentado por un grupo de investigación de la Universidad de Oxford, en marzo de 2018. (33)

Estas iniciativas de persecución mediática y de utilización de las redes sociales se han acompañado de persecuciones judiciales, muy en especial a dirigentes vinculados con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en lo que se ha dado en calificar como lawfare (guerra jurídica). (34) La complejidad de este proceso radica en que se articulan hechos de corrupción institucional —como las causas vinculadas a los sobornos en la contratación de la obra pública o en la gestión de los servicios de transporte— con otras acciones que se basan en situaciones ficticias, inexistentes o que no son ilegales, como el caso de la ofensiva judicial contra miembros destacados de los gobiernos kirchneristas por la firma de un memorándum de

entendimiento con Irán a propósito de la causa AMIA, cuestionable políticamente pero no pertinente como denuncia en un sentido penal, ya que no incluye la comisión de delito alguno, cuestión que sí podría haberse revisado con respecto a funcionarios de distintos gobiernos en relación con el encubrimiento de responsabilidades locales en el atentado a la mutual judía.

Esta confusión entre procesos judiciales muy distintos vuelve difícil su denuncia y genera una gran confusión en la opinión pública que —sorprendida gratamente por la posibilidad de que los delincuentes de guante blanco, los poderosos o los "políticos" puedan por una vez experimentar el peso de la justicia— tiene problemas para identificar los diferentes casos y el carácter persecutorio de los mismos, en tanto que todos se presentan mediáticamente bajo el mismo filtro, tanto por parte de los medios concentrados o de las declaraciones de gobierno (que lo entienden como parte de la lucha contra la corrupción) como por parte de la oposición perseguida, que homologa todas las causas como persecuciones. Incluso la propia militancia popular ha tenido dificultades para distinguir las diversas situaciones, calificando en muchos casos por igual a todos los detenidos como "presos políticos" —sea cual sea el tipo de prueba que exista sobre ellos o las imputaciones que se les realicen— y denunciando de modo republicano las violaciones al debido proceso sin distinguir las diferencias fundamentales entre los casos de persecución manifiesta de adversarios políticos por hechos que no constituyen delito de aquellos vinculados a redes de corrupción y que cuentan con pruebas bastante contundentes.

De este modo, de un lado se prioriza, paradójicamente, a sectores acomodados que sufren por primera vez las violaciones procesales a las que los sectores populares están acostumbrados hace décadas, y ese discurso se aleja y contrapone con las percepciones y sentimientos de las clases oprimidas, que no pueden construir empatía con los perseguidos ni comprender el carácter político y persecutorio de este uso del derecho.

Desde algunos partidos de izquierda críticos del kirchnerismo, por el contrario, se ignoran y minimizan las persecuciones judiciales por motivos políticos y las reiteradas violaciones a las garantías penales bajo la idea de que es favorable que, por una vez, los funcionarios corruptos deban enfrentar las consecuencias de sus acciones o las injusticias de un sistema penal que siempre los tuvo en el lado opuesto del estrado. Una excepción valiosa ha sido la denuncia permanente por parte de las agrupaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de la persecución sufrida por Milagros Sala y la agrupación Tupac Amaru en numerosas movilizaciones, a propósito de la criminalización de la protesta.

Distinguir los casos de persecución política de las legítimas causas por corrupción y encontrar un discurso coherente y sólido para enfrentar esta lógica de lawfare es fundamental para poder confrontar en la construcción del sentido común y ubicar esta iniciativa específica regional del uso de la justicia y del sistema penal como herramienta de domesticación y destrucción de la oposición política.

La ofensiva mediático-judicial —si bien fuertemente centrada en los funcionarios de los gobiernos kirchneristas— no se ha agotado solo en ellos, sino que irradia también hacia dirigentes de partidos de izquierda (Myriam Bregman, entre muchos otros, fue objeto de campañas de fuerte intimidación por parte de las usinas de trolls, particularmente antisemitas), jueces y fiscales dispuestos a investigar distintos hechos de corrupción del gobierno macrista —uno de los más actuales ha sido el del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, también acusado de “kirchnerista” y amenazado con presentaciones ante el Consejo de la Magistratura para inhibir su posibilidad de avanzar en las denuncias de las vinculaciones entre servicios de Inteligencia y la estructura de jueces y fiscales federales, y sectores de los grupos concentrados del periodismo—, o también se ha expresado contra periodistas y académicos que se propusieron abrir espacios para los temas políticos ausentes de los grandes medios concentrados.

7) Antisemitismo: un rasgo nunca ausente

Si bien no fue parte de todas las experiencias fascistas originales —ni el fascismo italiano ni el franquismo español lo tuvieron entre sus características más importantes—, la eficacia de la estigmatización de los judíos como elemento central del ideario nazi constituyó el odio antisemita en un rasgo omnipresente en gran parte de los fascismos o neofascismos posteriores a la experiencia alemana. Sea por la pregnancia de los conceptos nazis, por la eficacia de las visiones conspirativas, por su articulación con procesos históricos que permearon dos milenios de cristianismo o por su confluencia con algunas de las injustas políticas del Estado de Israel en relación con el pueblo palestino, los fascismos de la segunda mitad del siglo XX, así como sus reapariciones en el siglo XXI, nunca pudieron prescindir del componente antisemita. Y en esta emergencia latinoamericana, ese elemento se encuentra nuevamente presente.

Ya fueron señalados en el capítulo previo algunos incidentes antisemitas de los últimos años. La persecución contra los judíos en la Argentina no fue permanente a lo largo de su historia, pero tuvo momentos especialmente duros, desde los pogroms en las colonias judías en el litoral a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los hechos del Centenario de la Revolución de Mayo en 1910, la Semana Trágica de 1919, los decretos y acciones policiales en la revolución de 1943, los ataques de movimientos como Tacuara, Alianza Libertadora y otros grupos nacionalistas en la década del ’60, la sobrerrepresentación en diez veces de los desaparecidos judíos en la última dictadura en relación con su peso sobre la población o los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en la década del ’90, entre otros hechos. Por lo general, estos ataques se vincularon a grupos instalados en el poder estatal —en particular, las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, y el poder judicial— o a grupos aristocráticos, como en el caso de la Liga Patriótica, a

comienzos del siglo XX. Sin embargo, la permeabilidad de la población argentina ante las iniciativas antisemitas fue bastante baja durante todo el siglo XX, aun cuando los trabajos de investigación siempre detectaron un núcleo duro de prejuicios antisemitas en grandes grupos de población, que sin embargo se expresaban como opiniones o mitos que no llegaban a ser suficientes para legitimar acciones materiales contra estos grupos. A partir del fin de la última dictadura, incluso estos prejuicios fueron perdiendo fuerza, cuanto menos en la expresión explícita de la población. (35)

Esto es, que el antisemitismo nunca perdió su fuerza en tanto estrategia de estigmatización y negativización de una parte de la población argentina, pero los ataques u hostigamientos a judíos estuvieron por lo general en manos de grupos estatales u organizaciones paraestatales de conformación aristocrática, no llegando a permear a las grandes mayorías.

Sin embargo, existen en los últimos años algunas iniciativas preocupantes, que hacen pensar que el odio a los judíos —junto con la estigmatización de otros colectivos como los migrantes limítrofes bolivianos, paraguayos o peruanos, las comunidades chinas y coreanas, las poblaciones afrodescendientes, los pueblos originarios o la comunidad musulmana— podría comenzar a calar con más fuerza en grupos de población más amplios, siendo utilizado como proyección de las frustraciones resultantes de los programas económicos de ajuste. La profusión de movimientos neonazis en Mar del Plata y su vinculación con el intendente de dicha ciudad, la difusión periodística de teorías conspirativas en relación con el “poder financiero judío” y la revalorización de un “origen cristiano” de la identidad argentina en la disputa por las “políticas de género”, los ataques a personas judías en las calles de Buenos Aires o Rosario durante 2019 tan solo por llevar una kipá, permiten observar cierta reemergencia del imaginario antisemita en la sociedad argentina y comienzan a aparecer en declaraciones de funcionarios políticos o periodistas que no necesariamente se identifican con los grupos marginales neonazis.

El informe de antisemitismo realizado desde comienzos del siglo XXI por el Centro de Estudios Sociales de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) va detectando un fuerte aumento de los incidentes antisemitas, muy en especial a partir del año 2015 y con fuerte presencia en las redes sociales, donde llama la atención la virulencia y el crecimiento exponencial de las amenazas o declaraciones de fuerte corte antisemita. A partir de 2015, las denuncias aumentan más de un 50% y, con distintos picos (una baja menor en 2016), siguen creciendo significativamente en 2017 y 2018. (36)

Es cierto que en nada colabora el posicionamiento de las instituciones centrales de la propia comunidad judía argentina —AMIA y DAIA como las principales—, que han elegido ubicarse políticamente más como embajadas de un Estado extranjero —el Estado de Israel— que como fieles representantes de los intereses, desafíos y problemas de los judíos argentinos. Se sospecha —y en algunos casos ha llegado a los estrados judiciales— de su participación en oscuras operaciones de servicios de Inteligencia nacionales y extranjeros dirigidas con los más diversos fines, desde encubrir el atentado a la AMIA, participar de campañas internacionales orquestadas contra gobiernos democráticos en la región o utilizar la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman para hacerla jugar en los sótanos de la política argentina. También resulta promiscuo y muy confuso para la comunidad judeoargentina el intercambio de roles entre la dirigencia comunitaria y la dirigencia política a partir del triunfo electoral del macrismo, con la asunción de ministerios, secretarías o escaños parlamentarios por parte de representantes de esas mismas instituciones durante los años previos. Estas relaciones no han hecho más que dar vía libre o atizar las fantasías conspirativas, permitiendo que hicieran pie no solo en los clásicos grupos neonazis sino en un conjunto político mucho más amplio, que se siente cada vez más tentado a vulnerar la corrección política que había encapsulado el antisemitismo abierto a partir del fin de la última dictadura.

En esta nueva emergencia de un posible fascismo, entonces, la estigmatización de distintos grupos de población podría encontrar también en los judíos uno de sus focos centrales. Produce enorme tristeza que los líderes comunitarios judíos (a través de sus representaciones institucionales en DAIA y AMIA) terminen actuando de modo absolutamente indiferente ante estos riesgos y, en lugar de construir relaciones de solidaridad con los colectivos perseguidos y centrar su acción en el combate y desactivación de esta coyuntura política o en la conformación de un frente antifascista, prefieran jugar a disfrazarse como parte de los sectores dominantes, una actitud que tuvo trágicas consecuencias durante la Segunda Guerra Mundial, pero de la que parecen no haber extraído los aprendizajes necesarios. Ni siquiera los ataques antisemitas contra el secretario de Derechos Humanos de la Nación en Tucumán, Claudio Avruj —quien fuera años antes director ejecutivo de la DAIA— parecen despertar a estas fracciones de su sueño de "pertenecer", sin lograr percibir que si la salida política ante la crisis viene de la mano del proyecto fascista, la expulsión y estigmatización de los funcionarios judíos del gobierno macrista podría resultar una estrategia tristemente exitosa y que los tendrá en el foco del ataque político, incluso a nivel personal.

El riesgo de fascismo en las condiciones presentes regionales y nacionales

Si se acepta que el fascismo, en tanto práctica social, implica un modo de realización de la victoria de los sectores dominantes que busca proyectar en determinados grupos de la población las frustraciones que genera la distribución regresiva de la riqueza; si se acepta también que, en tanto iniciativa política, el fascismo libera la violencia necesaria para quebrar y terminar de destruir los núcleos de organización de los sectores populares; si a ello se suma que el fascismo ha sido una de las estrategias del capital concentrado

transnacional para subordinar aquellos territorios conflictivos para sus intereses sin tener que apelar a una intervención armada que resulta muchísimo más costosa; y si se comienza a prestar atención al conjunto de las siete prácticas desplegadas en el presente capítulo —campañas de delación, utilización de la disputa con las "políticas de género", ataques de distinta envergadura a los movimientos populares, limitación del ejercicio del periodismo, instigación y liberación de las microviolencias, hostigamiento y persecución a la oposición política y crecimiento de las formas de estigmatización de distintos grupos de población, entre las que se incluye un aumento del antisemitismo—, pareciera que la viabilidad de una salida fascista en la región y en nuestro país no parece una hipótesis delirante, aun cuando todavía no pueda confirmarse su desarrollo definitivo —sujeto a correlaciones de fuerzas en disputa en estos mismos momentos— ni, por tanto, sus posibilidades de éxito.

Ello no implica que los fascismos del siglo XXI serían un calco de las experiencias desarrolladas en el siglo XX. Por lo pronto, el régimen de gobierno corporativo no parece tener chances de prosperar en estos contextos neoliberales, más allá de los amagues con respecto a la participación de las fuerzas armadas en la emergencia de Jair Bolsonaro en Brasil. A su vez, el contexto ideológico de fundamentación rescata mucho más algunos de sus elementos originales —muy en especial la antipolítica, el discurso de la inseguridad o la estigmatización de ciertos grupos de población— que otros, menos efectivos en el presente, como el expansionismo nacionalista frente a los vecinos limítrofes, el armamentismo o las expresiones antiimperialistas.

Sigue presente entonces la pregunta fundamental que da origen a este libro: ¿tiene sentido calificar como fascistas o neofascistas estas posibles derivas de la política regional y nacional? El próximo capítulo se dedicará a detectar algunos de los núcleos fundamentales de las experiencias fascistas del siglo XX en la realidad argentina del siglo XXI, en particular en la construcción de un "sentido común fascista", que actúa de modo capilar, y en el rol

de la antipolítica como estrategia constituyente del fascismo y de sus transformaciones en el siglo XXI.

-

21- Si bien la bibliografía es muy amplia, uno de los trabajos más clásicos y lúcidos sobre las condiciones de emergencia del fascismo —que a la vez resume críticamente las discusiones de los distintos autores marxistas entre los años ’20 y ’40— es Nicos Poulantzas, Fascismo y dictadura. La III Internacional frente al fascismo, México: Siglo XXI, 1971.

22- El concepto de realización de la victoria fue desarrollado por Juan Carlos Marín en Cuaderno 8, Colectivo Ediciones/ Ediciones PICASO. Buenos Aires, 2009, págs. 78-79, a partir de reinterpretar los análisis de Clausewitz, Lenin y Gramsci sobre las correlaciones de fuerzas en situaciones de confrontación. Inés Izaguirre lo retoma en Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada, Serie Cuadernos Nº9, 1992, págs. 11 y 12, donde lo define del siguiente modo: “A partir de la derrota, comienza un segundo momento de este proceso dual, el momento de realización de la victoria: la articulación de nuevas relaciones sociales que reemplazan a las anteriores, en las que se reconoce quien es el vencedor, y que transformarán en estable la nueva situación de paz. Es el momento del desarme, aquella condición del derrotado que garantiza por largo tiempo su no recuperación para rebelarse contra el vencedor”.

23- Aun con todas las discusiones que pueden darse al respecto de esta denominación confusa y discutible, se asumirá en este texto la categorización de “populistas” a falta de otra mejor que sea capaz de dar cuenta de la construcción de propuestas políticas regionales que han cuestionado desde distintos lugares el “consenso de

Washington” y apostado por algún nivel de autonomía en el desarrollo económico nacional y regional. Ello homologa experiencias muy distintas como podrían ser los proyectos un poco más radicalizados de Venezuela o Bolivia frente a regímenes más “moderados” como los de Brasil, Argentina, Ecuador o Uruguay.

24- Se trata de Andrés Barreda, Para la crítica de la civilización petrolera, en preparación con aparición prevista para fines de 2019, cuyos originales fueron cedidos gentilmente por su autor para consulta para este proyecto y del cual se ha extraído gran parte de la información sobre la participación y acompañamiento empresario al nazismo que se detalla a continuación.

25- En la Alemania nazi, produjeron el gas Zyklon B, veneno usado en la época para eliminar las pulgas, pero que se reconfiguró durante el genocidio para utilizarlo como agente letal en las cámaras de gas de los campos de exterminio.

26- Anthony C. Sutton, en Wall Street and the Rise of Hitler (New York: Arlington House Publishers, 1976) dice: “Hitler, en cuyo despacho colgaba el retrato de Henry Ford, condecoró a este en 1938 con la Gran Cruz del Águila Alemana. Tenían en común, entre otras cosas, un furibundo antisemitismo. Hitler era un gran admirador del trabajo en cadena implantado por Ford en sus fábricas.”

27- “Las fábricas alemanas de General Motors, el 19 y 20 de septiembre de 1939, se convirtieron enteramente en productoras de equipos bélicos tras la reunión en Berlín de Hitler y Göring con el directivo Mooney de la General Motors. El resultado de tales

acuerdos fue la reconversión de la factoría Opel de Brandenburgo, fundada desde 1935, que pasó a producir las unidades ‘Blitz’, modelo de camión para la Wehrmacht, mientras que la Opel de Rüsselsheim comenzó a trabajar principalmente para la Luftwaffe. Hubo un momento en que General Motors y Ford juntas fabricaban no menos de la mitad de la producción de tanques de guerra en Alemania.” http://www.nodo50.org/tortuga/Sobre-la-complicidad-de-empresas. Antony C. Sutton, op.cit.

28- Barreda continúa: “ITT, dirigida por el filofascista Sosthenes Behn, había adquirido la cuarta parte de las acciones de la fábrica de aviones Focke-Wulf en los años treinta y por tanto estuvo involucrada durante la guerra -al menos indirectamente- en la construcción de cazas que derribaron cientos de aviones aliados (...) Sin los sofisticados equipos de comunicaciones suministrados por ITT en los primeros pasos de la guerra Alemania no habría sido capaz de infligir a sus enemigos las mortales derrotas con lo que se conoció como Blitzkrieg, que necesitaba ataques altamente sincronizados por aire y por tierra. Después de Pearl Harbor ITT suministró a Alemania los sistemas de comunicación más avanzados, en detrimento de los americanos, cuyo código diplomático fue descifrado por los nazis con la ayuda de estos equipos (...) De modo que la ITT no comenzó a dar sus primeros pininos con el asesinato del presidente Allende y de más o menos 60 mil activistas de la izquierda de Chile durante los años setenta.”

29-- Edwin Black, IBM y el Holocausto. La alianza estratégica entre la Alemania nazi y la más poderosa corporación norteamericana, Buenos Aires-México: Atlántida, 2001.

30- Si bien ya existían antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2012 —cuando el ministro de Educación de la Ciudad,

Esteban Bullrich, abrió un 0800 para denunciar la “politización” en las escuelas públicas—, a nivel nacional esto se expresó por primera vez con la decisión de implementar una iniciativa similar acompañada por la campaña “con mis hijos NO” y oponiéndose a la “politización del caso de Santiago Maldonado”, que logró juntar más de 40.000 firmas.

31- Patricia Bullrich, Declaraciones a Puntal AM, Río Cuarto (Córdoba), 1/11/18

https://www.clarin.com/politica/medio-escrache-patricia-bullrich-defendio-policia-luis-chocobar_0_IMZ-na-GV.html

32- Patricia Bullrich, 13/09/2018
https://www.elnueve.com.ar/2018/09/14/bullrich-defendio-la-absolucion-del-carnicero/

33- El Informe de Amnistía Internacional fue coordinado por Mariela Belski y se tituló “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina”, de marzo de 2018, en tanto que el informe de la Universidad de Oxford, aparecido el mismo mes, se titula “Troops Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Socia Media Manipulation”.

34- El término lawfare (traducible como “guerra jurídica”) fue creado hace muy pocos años para dar cuenta del uso del derecho penal o del derecho internacional de modo ilegítimo, como formas de incidir

en disputas de orden político. Sus primeros usos parecen datar de los años ’70, donde autores australianos como John Carlson y Neville Yeomans sostenían que la búsqueda por la verdad había sido sustituida por las guerras jurídicas en tribunales o, apenas iniciado el siglo XXI, en trabajos como los de Charles Dunlap Jr., en los que se sugería que la ley se comienza a utilizar como un “arma de guerra”. En América Latina, el concepto comenzó a ser utilizado durante los últimos años para dar cuenta de la judicialización del conflicto político y la persecución a líderes regionales, como en los casos de Zelaya, Lugo, Lula, Correa o Cristina Kirchner.

35- Para el análisis del antisemitismo argentino véase, entre muchos otros, Gino Germani, “Antisemitismo ideológico y antisemitismo tradicional”, en Juan José Sebrelli (ed.), La cuestión judía en la Argentina, Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1973; Leonardo Senkman, El antisemitismo en la Argentina, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1989; Daniel Lvovich, Nacionalismo y antisemitismo, Buenos Aires: Ediciones B, 2003 o la encuesta sobre antisemitismo realizada en 1992 por Catterberg y Asociados.

36- Agradezco a Marisa Braylan, del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, la buena disposición para la consulta y análisis de los informes de antisemitismo que publica dicho Centro desde el año 2001.

Capítulo 3

La capilaridad del fascismo contemporáneo y el rol de la antipolítica

Habiendo recorrido los debates sobre las distintas definiciones de fascismo, así como algunos de sus posibles indicadores en tanto iniciativas pasibles de ser observadas en la Argentina contemporánea, cabe ahora centrar el análisis en las modalidades de construcción de una capilaridad fascista en la sociedad y los modos por los que las transformaciones en las tecnologías de poder pueden intersectarse con esta emergencia de lógicas fascistas, tratando de encontrar aquellos elementos que pueden repetirse como tales y aquellas novedades que darían cuenta de un nuevo momento en este siglo XXI.

El mayor riesgo del fascismo, en tanto práctica social, es la facilidad con la que puede transformarse en parte del sentido común, por su capacidad de apelar o conectar con distintos elementos de nuestra estructura psíquica, muchos de ellos inconscientes. Esto fue así en el siglo XX y se lo vuelve a encontrar en el siglo XXI, si bien no con las mismas características. Una de las formas clásicas de esta movilización emocional se vincula con formas sociales en las que se reconfiguran procedimientos analogables al mecanismo de defensa psíquico de la proyección (37): redirigir las frustraciones cotidianas —acentuadas en contextos de crisis— hacia grupos sociales que resultan accesibles y vulnerables. Ello implica canalizar la angustia y el resentimiento por las propias vivencias destructivas en formas de agresión defensiva que se dirigen hacia poblaciones que son, a la vez, percibidas como extrañas (apelando a la heterofobia propia de todo grupo humano, a partir del temor y hostilidad hacia lo desconocido) y construidas como peligrosas o enemigas, asignándoles también responsabilidades como causa de nuestro sufrimiento (en formas que los observan como aquellos que “nos quitan el trabajo, utilizan los servicios públicos que nos corresponden, se llevan la escasa inversión estatal que surge de nuestros impuestos, atentan contra nuestra identidad con sus prácticas diferentes”, entre otros ejemplos).

En otros trabajos he calificado estos procesos como modalidades de construcción de una otredad negativa (primer momento necesario de una práctica social genocida), procedimiento simultáneo de

ajenización de una parte de la comunidad (en este caso, migrantes, mujeres, disidentes políticos, homosexuales, defensores del aborto legal, musulmanes, árabes, judíos, entre otros) y de negativización de dichos grupos, sea a través de sistemas de inferiorización (evolucionistas) o de construcción de su peligro para la especie (degenerativas).

Esta capilaridad juega en varios planos, que vale la pena distinguir. De una parte, se va generando a partir del despliegue de una discursividad estigmatizadora tanto en los medios de comunicación como en los propios discursos políticos. Se propondrá rastrear, tan solo a modo de ejemplo, algunas de las modalidades en ambos casos, particularmente en su despliegue contemporáneo. Por otro lado, asume una especificidad peculiar y diferenciada en el siglo XXI, cuando la clásica lógica fascista se intersecta con los modos de la antipolítica construidos en el contexto del neoliberalismo del siglo XXI que, si bien tienen su lógica propia, le otorgan a la reemergencia del fascismo una coloración particular.

Los modos de estigmatización en los medios de comunicación

Ya desde finales de los años ’90, los medios de comunicación argentinos de carácter masivo comenzaron a desplegar modalidades de comunicación microfascistas, articulando formas cada vez más violentas de estigmatización con llamados a rebeliones ciudadanas reaccionarias o a la libre expresión de los prejuicios. Esta avanzada fue muy notoria en el conjunto de medios creados en aquellos años por Daniel Haddad, ya que implicó una profunda modificación del tono y el estilo de un periodismo que, cuanto menos desde el final de la última dictadura, no había desplegado formas de negativización semejantes contra ningún grupo de población en medios que resultaran de llegada masiva. Un

ejemplo muy destacado de estas transformaciones ocurridas al inicio del siglo XXI lo constituyó el ataque a los inmigrantes en La primera de la semana —un semanario del grupo de medios dirigidos por Haddad—, que en su tapa de abril del 2000 y bajo el título “La invasión silenciosa” llevó a cabo una de las publicaciones más agresivas contra la inmigración limítrofe a la Argentina de la que se tenga memoria. La nota aparecida en el semanario fue reproducida en los programas radiales del grupo pero su difusión se expandió a otros espacios, instalando un nuevo modo de tratamiento del fenómeno y llegando incluso a los medios más populares del momento, como Clarín, La Nación o Crónica.

Hasta ese momento, la estigmatización y el racismo abierto habían sido asumidos solo por publicaciones, periodistas o programas marginales (uno de cuyos voceros emblemáticos era la revista de ultraderecha antisemita Cabildo), pero la aparición del Grupo Haddad llevó estas lógicas a un público más masivo y con modos mucho más aggiornados, en medios gráficos, radiales (muy en especial Radio 10, que logró en aquel período niveles de audiencia muy importantes), y luego incluso televisivos, accediendo también a un público más joven y a una estética renovada. Algunos de los periodistas que ya destacaban en aquella época se volvieron muy relevantes en la década siguiente y lograron espacios propios en el medio televisivo y radial, como Eduardo Feinmann o Baby Etchecopar. Otros fueron surgiendo y sumándose al calor de la nueva época.

La insistencia en afirmaciones de sentido común que buscaban desatar microviolencias con la insistencia de frases que desde aquel momento se volvieron lugar común en el país como “los argentinos somos demasiado dóciles” (copiada y reproducida ahora por todos los sectores políticos), el insulto abierto y denigratorio frente al opositor, contra las políticas de género, los grupos caracterizados por su identidad sexual, las movilizaciones en distintos puntos del país, el movimiento piquetero, las organizaciones de desocupados, los grupos sindicales combativos, los inmigrantes limítrofes, los pueblos originarios, los estudiantes que tomaban escuelas o

universidades, entre muchas otras fracciones, se articulaba con un nacionalismo patriotero de consignas y banderas. No solo hay una construcción de negatividad sino también un permanente corrimiento de las fronteras de lo políticamente aceptable en el periodismo, con el uso de la palabra soez, la chicana o la burla como modos permanentes de interpelación. Se plantea ante todos los grupos estigmatizados la posibilidad del ejercicio de la violencia, por lo general justificada desde el combate a la corrupción, en peroratas que buscan una y otra vez movilizar a la audiencia, conminarla a actuar en lugar de ayudarla a pensar, y que son sin duda relevantes a la hora de explicar la aparición de prácticas que eran casi inexistentes en la sociedad argentina, como los linchamientos públicos o la profusión de actos de venganza “en banda” o por mano propia. (38)

Sin llegar a los niveles de violencia verbal o de insulto soez de Feinmann, Etchecopar o el Grupo Haddad, a partir de la segunda década del siglo XXI se fueron sumando a este modo grosero y agresivo de ejercicio de la profesión un grupo de periodistas que provenían de tradiciones más clásicas o progresistas, como los casos de Jorge Lanata, Alfredo Leuco o Luis Majul, para quienes la aparición de “la grieta” kirchnerismo-antikirchnerismo legitimó su transformación y el brusco cambio no solo de sus posiciones políticas sino del tipo de vocabulario utilizado, del estilo periodístico, de las imágenes convocadas, del uso descarado y abierto de la mentira y del nivel desplegado de instigación a la violencia. Un nuevo salto de estos modos de estigmatización apareció hacia el inicio de la segunda década del siglo XXI, cuando también los organismos de derechos humanos y algunas de sus figuras emblemáticas — primero Hebe de Bonafini, luego Estela de Carlotto — se sumaron a la lista de grupos, poblaciones y personas sobre las cuales se abatía la catarata de insultos, burlas, estigmatizaciones y llamados a la violencia. Los sketches del programa televisivo de Lanata PPT (Periodismo para Todos), con sus burlas no solo a figuras políticas y a sindicalistas como Roberto Baradel (un caso tratado en el capítulo previo) sino a la propia Hebe de Bonafini (con todo lo que implica el hecho de burlarse

públicamente de la madre de un desaparecido con modos que exceden cualquier aceptable utilización del humor), constituyen un salto inimaginable una década antes. El propio público de Lanata de fines del siglo XX o los primeros años del siglo XXI no lo hubiese tolerado.

Vale la pena, apenas a modo de ejemplo y solo tomando el último año, observar algunos de estos modos por los que se fue estructurando capilarmente la legitimación del ejercicio de una microviolencia difusa y constituyente de las lógicas del fascismo en el campo del periodismo para poder comprender la estructuración de una “grieta” que fue también alimentada por el campo kirchnerista, en espacios periodísticos como 6-7-8, entre otros, en los que también se construía la estigmatización del adversario político del gobierno de aquel momento, incluso de los grupos peronistas o kirchneristas con cierta autonomía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o, con mucha insistencia, de los grupos de izquierda más radicalizados.

La lógica de la agresión, la burla, la chicana y la estigmatización ganó la partida ya desde el inicio de la segunda década del siglo XXI, sea cual fuere la pertenencia política —hasta ganó a sectores de la izquierda más radicalizada— y fue un elemento central en la profundización de la “grieta”, a la vez que se trasladó a gran parte de los espacios políticos e intelectuales como un tipo de práctica aceptada y legitimada, lo cual obviamente dificultó el diálogo político y profundizó cada vez más las distancias, incluso hacia el interior del campo popular.

Baby Etchecopar ha sido a lo largo del tiempo uno de los casos más extremos, persistentes y efectivos desde su tribuna en Radio 10, en la que se desempeña desde hace años e impacta muy en especial en sectores medios proletarizados, que encuentran en el discurso del conductor un modo de proyectar sus frustraciones cotidianas, particularmente por el modo en el que la discursividad de Baby conecta con microfascismos cotidianos que, aunque preexistentes en la sociedad, nunca habían tenido expresión mediática masiva y,

mucho menos, legitimación. Su constante incitación a los “taxistas o colectiveros” da cuenta de un perfil socioeconómico en el que busca impactar, el de una clase media baja en proceso de proletarización no organizada políticamente y a la que se le propone encerrarse en el propio odio y descargarse en aquel que tiene todavía menos, pero que podría aparecer como aquel que pone en peligro tanto los escasos bienes que se poseen como la propia identidad Veremos, paradójicamente, que en este ejemplo el propio periodista utiliza el término “fascismo” para acusar y estigmatizar a aquellos a quienes llama a agredir, en un vaciamiento y banalización particularmente eficaz de los términos, en donde ya las propias palabras pierden su sentido, un procedimiento prototípico de los regímenes actuales, que se han caracterizado como formas de “posverdad”:

“Para la gente que los piquetes los están volviendo locos, para todos esos vagos hijos de puta, que hay que terminar con esa lacra, la gente que quiere un país mejor, un país de paz, ir a laburar y que no le corten la calle los brotes de la loca… basta de kirchneristas, basta de chorros, basta de piqueteros, basta de hijos de puta, se acabó, muchachos, llegó el momento de la República. ¡Somos más! ¡Somos más! (…) Esto es para los taxistas, para los remiseros, los colectiveros, los que laburan para bancar a estos atorrantes de mierda. ¡Muy buenos días! (…) Taxista, cuando un tipo es kirchnerista, bájelo a patadas en el culo por cómplices de los corruptos. No hay que atenderlos en las farmacias, en los hospitales, porque se robaron la plata de todos esos lugares (…) Los vamos descubriendo, los vamos identificando y los vamos cazando (…) adonde vayan los vamos a ir a buscar, con nombre y apellido (…) Taxista, hay que pelear, hay que liberar la calle, hay que terminar con el fascismo ese de la queja y la queja… me parece que hay una política que tiene un problema: que no es política, es extorsión. Si vos querés, todos los días te quejás de algo, te quejás de tu padre, te quejás de tu madre (…), aguantemos, argentinos, son los últimos coletazos de un proceso de 12 años que se quiso quedar con su vientre, con su casa, con su patrimonio y con sus

hijos. Se terminaron los hijos de puta, los enemigos están en retirada, se están yendo. Ya corrimos a los ingleses, a los españoles y ahora estamos corriendo a los kirchneristas. Ahora sí: el país se libera y arranca a ser una nación. ¡Acompáñeme! Taxista, remisero, camionero, gente de la calle, acompáñeme (…) ejército de taxistas en la calle, ejército de colectiveros, ejército de camioneros. Esa gente con brazo de dos colores, que laburan, que se rompen el culo para que ustedes vayan a cortar la 9 de Julio. Lo hicimos con los ingleses, lo hicimos con los españoles, lo hicimos con los franceses, ¡ahora vamos por los K y a liberar la Argentina!" (39)

Continuando esa estigmatización con nombre y apellido y vinculando también las agresiones a la disputa con el "feminismo", vale este segundo párrafo del mismo periodista, unos meses previos al anterior:

"Este fin de semana murieron dos policías femeninas y no vi a ninguna de las idiotas del colectivo de mujeres ni de las viejas idiotas de los derechos humanos, esas que sacan a pasear a la madre del asesino Huala, esas que andan paseando pañuelos verdes y andan pidiendo por la liberación de la cucaracha Sala, no vi a ninguna de esas oportunistas ir a la puerta del hospital a ver a estas mujeres (…) Las mujeres se dividen en dos grupos: están las quejumbrosas, las idiotas, las inútiles, las imbéciles, que como no tienen un carajo que hacer van a cagar a la catedral, entre ellas Bonafini y Carlotto, y las mujeres que trabajan, que van a la fábrica. (…) las mujeres con todas las letras. Terminémosla con este verso estúpido de hablar con la 'e' y terminémosla con estas idiotas que llenan espacios hablando de los pañuelos verdes y el aborto (…) Estoy indignado por la muerte de estas dos policías. Esperaba que algún cojonudo con berretín de estadista y no de ser elegido el año que viene diga: 'a partir de ahora, el que saca un arma es fusilado; el que mata un policía lo matamos'… 'a partir de ahora, a los motochorros, si los agarramos armados por la calle, los

amasijamos'… pero están preocupados para que siga la ley del aborto, a ver si matamos pibes, matamos fetos, matamos embriones… porque a alguien hay que matar en la Argentina (…) Yo la culpa se la echo a Carlotto, a Bonafini, al juez maricón este viejo, a Verbitsky, a Bonasso, a Cristina, a Máximo, a La Cámpora, al gobierno de Macri que todavía no tuvo los cojones de terminar con la muerte. Al pelado este jefe de gobierno de Buenos Aires que no tuvo cojones de terminar con los piquetes, con las ollas populares, con los Baradeles, con los Delías." (40)

En esta intervención, Etchecopar suma también a los "sindicalistas", muy en especial al gremio docente ("los Baradeles"), que ha sido una de las víctimas principales del proceso de negativización, cuyas lógicas ya fueron desarrolladas en el capítulo previo.

Eduardo Feinmann, al igual que Etchecopar, centra la estigmatización del "enemigo político" en la figura del kirchnerismo, el trotskismo o el "anarco-trosco-kirchnerismo", articulado con una furiosa e insistente deslegitimación de los organismos de derechos humanos, aunque para ello deba también mezclar nombres, instituciones y hechos en conglomerados en los que nada se entiende, salvo la necesidad de legitimar e incrementar el accionar represivo. Pero lo que Feinmann busca construir es una ensalada de insultos en los que se propone esta proyección de la frustración en violencia hacia los "otros", aquellos que serían responsables de nuestra situación actual, lo cual se da por probado a partir de la repetición y los supuestos. Porque "todos sabemos que es así", y de tanto decirlo podemos comenzar a asumir que efectivamente lo es.

Dice Feinmann:

“(...) Ayer, quien pone las cinco bombas en el cementerio de la Recoleta es una pareja de anarquistas; hoy hubo un procedimiento donde detuvieron a trece personas con cualquier cantidad de cosas. ¡Pólvora, azufre, de todo! Nos enteramos que la que puso la bomba ayer se llama Anahí Esperanza Salcedo. (…) Ella es titular y registra liquidaciones de asignación familiar: es planera. Carolina Stanley, ministra, a la terrorista la bancamos todos nosotros con nuestros impuestos. Ministra Stanley, ¿no es hora de ponerse a revisar un poquito más? (…) Basta de joda, basta de mantener vagos planeros. El laburo de esta mujer, que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, era fabricar bombas para generar terror en la Argentina. ¿Cuándo vamos a cortar con estos trosko-anarco-kirchneristas?

El terrorista que puso la bomba a Bonadio se llama Viola, vive en Villa Bosch, es anarquista, está vinculado a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, (la de Hebe), vinculado a Nora Cortiñas (…) El artefacto que arrojó Viola debajo del auto de Bonadio era más sofisticado que los que encontraron en el Cementerio de la Recoleta. ¿Cuándo vamos a parar con el terror en la Argentina? Así arrancaron en los setenta. Estas bombas eran del tipo vietnamitas, como las que utilizaban en los ’70 los guerrilleros de ese momento: Montoneros, ERP. ¿Vieron que gritan ‘vamos a volver’? Bueno, volvieron. Tiraron 14 toneladas de piedras, reventaron una escuela, quisieron volar un hospital (…) Sí, volvieron.” (41)

Este fragmento ilustra estos modos peculiares de organización de la información: confusión de las organizaciones de Madres de Plaza de Mayo, de los nombres de sus dirigentes, vinculaciones e informaciones que no surgen de ninguna fuente confiable y parecen más bien operaciones de los servicios de Inteligencia, extrapolación de los discursos sobre los años ’70 con el presente: bombas, terrorismo, armas, planes sociales, delitos, Madres de Plaza de Mayo, kirchnerismo, trotskismo, anarquismo, derechos humanos, Montoneros, ERP. Esta sucesión de asociaciones busca construir

los términos de referencia del mal en tanto intercambiables, modalidades de estigmatización que generan rápidas equivalencias para desatar una respuesta emocional y violenta ante la aparición de cualquiera de los términos de referencia.

Las declaraciones de funcionarios políticos de distintos espacios

Esta difusión periodística sostenida por más de una década y que logró pasar de un conjunto de medios primero marginales y luego acotados a un plano mucho más amplio y generalizado en todas las emisoras a través de la aparición de “la grieta” y de la generalización de la agresión verbal, la chicana, la información no chequeada y el insulto en un núcleo mucho más amplio comienza, a partir del segundo gobierno de Cristina Kirchner, a permear también el discurso público de funcionarios políticos. En el caso del espacio kirchnerista, uno de los más destacados fue quien se desempeñara durante los últimos años como la figura central del área de Seguridad: Sergio Berni. Este funcionario, que buscó construir su imagen desde la dureza para “combatir la inseguridad”, se sumó a los discursos estigmatizadores, de los cuales valen como ejemplo estas declaraciones del año 2014:

“Sorprendidos están ustedes porque esto ha tomado estado público, porque se trató de la figura de un fiscal de la Nación (en referencia al tiroteo de la custodia del fiscal Stornelli con siete ciudadanos colombianos acusados de integrar una banda que habría intentado cometer un asalto en la autopista Illia). Yo le puedo asegurar que esto es lo que pasa todos los días, ha sido una muestra más que significativa de lo que venimos sosteniendo hace más de tres años: que estamos infectados de delincuentes extranjeros que vienen a la

Argentina a delinquir amparados por la laxitud judicial, y que generan delitos que por su tipificación son excarcelables rápidamente, y cuando recuperan la libertad no van a la iglesia a pedir disculpas sino que salen a la calle nuevamente a delinquir. Esto pasa todos los días". (42)

Un año después, otro funcionario del mismo gobierno (Guillermo Moreno, quien se desempeñó como secretario de Comercio) volvía a la carga, en este caso con una estigmatización de la oposición política de izquierda cuestionada desde un catolicismo que postulaba como constituyente de la identidad argentina, en un debate con la dirigente Myriam Bregman, una de las figuras que más ha sufrido desde aquel momento los modos crecientes de discriminación antisemita, muy en especial en las redes sociales:

"No voy a entrar en un debate con la compañera sobre si un hombre explota a otro hombre. Yo soy peronista, no creo en la lucha de clases, no creo en el marxismo, no creo en el leninismo, no creo en el trotskismo, yo voy a misa todos los domingos. Ideológicamente, estamos confrontando. Claramente, vos tenés una visión del hombre que no es la mía, del ser humano (…) Vos querés lucha de clases, vos querés terminar con la propiedad privada, tenés una visión atea de la vida; yo soy todo lo contrario. Voy a misa, no soy ateo (…) El peronismo dice 'hay una sola clase de hombres, la que trabaja', y hay un tema de distribución. Ahí aparece el modelo de desarrollo peronista que no avanza sobre la propiedad privada (…) Ella va por un camino y yo voy por otro, yo me referencio en el Papa". (43)

Berni y Moreno, entre otros, continuarían con el mismo eje y lo irían radicalizando cada vez más, particularmente porque dicha lógica sufre un salto cualitativo con el triunfo del macrismo, que habilita con mayor fuerza este discurso, muy en especial desde el Ministerio de

Seguridad, con la figura de Patricia Bullrich, pero también a partir de otro conjunto de funcionarios de la alianza macrista. Vale la pena rescatar como ejemplo estas declaraciones de Bullrich del 2017 (precisamente en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio 10), que parecen retomar las estigmatizaciones construidas periodísticamente y profundizar las declaraciones de Berni para diseñar propuestas políticas más estructuradas que transformen la estigmatización en políticas concretas de intervención punitiva:

“Nosotros tenemos que ordenar nuestras relaciones con Paraguay, con Bolivia y con Perú. Y en los lugares en los que hay lucha territorial por el dominio de la droga, el número de homicidios aumenta absolutamente por encima de la media de homicidios que tiene la comunidad. Acá vienen ciudadanos paraguayos que se terminan matando por el control de la droga; vienen ciudadanos peruanos que se terminan matando por el control de la droga; no tanto bolivianos. Además, muchos ciudadanos paraguayos, peruanos y bolivianos se comprometen tanto sea como capitalistas o como mulas o como choferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico, entonces este es un tema que tenemos que trabajar. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación de nuestro país, y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar”. (44)

Lo que vale la pena señalar es que estas afirmaciones no se basan en estudio alguno y contradicen las cifras de organizaciones o investigadores que analizan la presencia de la migración peruana, colombiana, paraguaya o boliviana en la Argentina. El último censo nacional (del año 2010) identifica alrededor de 1,8 millones de extranjeros viviendo en Argentina sobre 40 millones de habitantes, lo cual implica el 4,5% por ciento de la población total. Esto contrasta con cifras cercanas al 20%, que es la imagen que muchos sectores de la población tienen acerca de un peso irreal de los inmigrantes en la población argentina. Por otra parte, si se analizan

los datos del Servicio Penitenciario Nacional, se observa que, para 2017, menos del 6% de la población penitenciaria estaba integrada por extranjeros (45) y que, dada la mayor vulnerabilidad de los mismos ante las fuerzas policiales, esta casi equivalencia de su mínima participación en los delitos con su bajo porcentaje en la población muestra que tanto las declaraciones de Berni como las de Bullrich se basan en meros prejuicios construidos como parte del sentido común.

Estos prejuicios fueron acompañados por reiteradas declaraciones de políticos de la otrora oposición peronista federal, como el caso de Miguel Ángel Pichetto (designado en junio de 2019 como candidato a la vicepresidencia por el macrismo, entre otras cosas por este tipo de declaraciones), quien decía, por ejemplo:

“Vamos camino a la noche más oscura, que es la Argentina narco, de las villas, de la marginación. La Argentina oscura son las villas del conurbano, la prostitución organizada y la utilización de menores” (...) “La cocaína la manejan los peruanos; el lavado, los colombianos; y los paraguayos, la hidrovía, trayendo toneladas de marihuana. La conducción estratégica de la cocaína en la Argentina la tienen los peruanos, no es una estigmatización ni es xenofobia, es meramente descriptivo: el esquema empezó en la villa 31 y sigue en la 1-11-14”. (46)

La ministra de Seguridad llevaría esta estigmatización a niveles del exabrupto, con sus declaraciones a raíz del ataque y asesinato de un diputado de la Nación (Héctor Olivares) y uno de sus asesores (Miguel Yadón) en las inmediaciones del Congreso. Al informar a través de la red social Twitter de la detención de los sospechosos, la ministra escribió: “Todo el clan mafioso de gitanos detenidos (…) ¡El que las hace, las paga!” (47), asignando a una comunidad perseguida —con peso totalmente insignificante en los detenidos por el Servicio Penitenciario Nacional— las acciones de una

persona cuya identidad todavía no estaba clara (apenas su apodo de “El Gitano”). Algo parecido a lo que ocurre con las declaraciones sobre la vinculación de la inmigración limítrofe con la criminalidad. Estas formas de estigmatización se suman a las explosivas declaraciones previas con respecto a los grupos mapuches o los disidentes políticos (kirchneristas, trotskistas, anarquistas).

El propio presidente Mauricio Macri articuló muchas de estas sensaciones en una extraña frase divulgada en la misma red social Twitter y que parecía remitir a las lógicas de la imaginería nazi, apropiándose de dicho vocabulario en los modos de referir a quienes no concuerdan con su gobierno, en un momento de fuerte oposición política como fueron las reacciones políticas durante 2018 ante las medidas de ajuste y la transformación regresiva de los modos de cálculo del haber previsional. Ante la crítica en las redes sociales a un spot de campaña política de su gobierno en la visita a una pizzería que buscaba abrir sus puertas en medio de la crisis, escribía Macri que “El único antídoto ante este veneno social que persigue inocentes es mantenerse unidos. Tenemos que aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás.” (48)

De la lucha por las ideas a la política como “producto”

Junto a estos elementos, y de modo complementario, resulta importante relevar las miradas y construcciones de algunos de los consultores políticos contemporáneos, como modo de analizar las transformaciones en la concepción de la política y los modos en que la emergencia de estas modalidades neofascistas pueden intersectar, ser reconfiguradas o articuladas con estas nuevas lógicas del siglo XXI.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de la consultoría política es el de Jaime Durán Barba (49), quien ha tenido un rol fundamental en el triunfo electoral del macrismo, primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego a nivel nacional. Su modo de reconfigurar la política argentina desde la consultoría estratégica ha implicado el despliegue de campañas que se proponen incidir en el sentido común de modos de lo más diversos, siempre que colaboren con la posibilidad de un triunfo electoral. Si bien toda campaña política busca la articulación de un programa político con identificaciones emocionales y disputa por la conquista del sentido común, en el caso de la consultoría política contemporánea se invierte el orden de los factores, siendo que lo único relevante pasa a ser la conexión con las expectativas sociales e identificaciones, conscientes o inconscientes, aun si para ello es necesario transformar el programa político, plantear consignas autocontradictorias o ir virando las alianzas y posicionamientos de cada candidato en relación con los problemas reales en los que debe intervenir.

De dicha forma, se construye una profunda desresponsabilización de estos operadores (los consultores) por las consecuencias de sus acciones, más allá de que en el caso de Durán Barba postule explícitamente en sus libros que el fascismo y el autoritarismo constituyen los únicos límites a la “neutralidad” de su ejercicio profesional. La explicitación de estos supuestos “límites” deja sin embargo abierta la pregunta de si efectivamente renunciará o se hará cargo de las consecuencias de sus acciones, o continuará avanzando en dicha dirección, como parece ser el resultado de la recurrencia a las políticas punitivas como estrategia para confrontar la crisis electoral del macrismo o la elección de Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente, algo de lo que Durán Barba no solo no ha renegado sino que parece aceptar como una de las pocas salidas políticas viables para buscar retener a un electorado que se le escurre a gran velocidad, como producto de las consecuencias de las medidas económicas implementadas por el gobierno macrista.

Si el objetivo de un consultor político es ganar a cualquier costo una elección, y la profesionalización de la asesoría asume la utilización

del medio necesario para ello, es posible que se logre colaborar en la creación de un monstruo que será difícil de manejar, cuando los odios y las frustraciones —y la consistente, reiterada y profesional manipulación de los mismos— asuman su propio derrotero, mucho más allá del ejercicio del voto en una instancia coyuntural.

Antonio Gramsci ha pensado el sentido común como expresión de cierta “espontaneidad de las masas” y, a la vez, como indicador de la correlación de fuerzas en un momento histórico determinado. (50) Esa concepción de la “espontaneidad” en verdad daba cuenta, para Gramsci, de un proceso que hace aparecer como natural el efecto de una larga construcción social. Este es uno de los orígenes del surgimiento del concepto de “sentido común”. El trabajo de la crítica es precisamente la necesidad de identificar la historicidad de las construcciones plasmadas como “sentido común”, en tanto condición de posibilidad de las disputas por la hegemonía de una u otra visión de la realidad. Percepciones como “los inmigrantes nos roban el trabajo” son fácilmente desarticulables si uno busca información objetiva, ya que al analizar las tasas de ocupación entre población nativa y migrante, el porcentaje y características de los empleos ejercidos por la población migrante y su falta de correlación con la pérdida de empleo en la población nativa, entre otros datos, se observa que la acusación contra los inmigrantes no puede sostenerse. Diferentes estudios de opinión plantean, por ejemplo, que para más de la mitad de la población argentina, la presencia de migrantes en el país superaría el 15%, cuando se observa que no llega ni siquiera a una tercera parte de ese número. (51)

Lo mismo vale para otros prejuicios, como el del control judío de la economía, que tampoco resiste análisis económico ni demostración empírica alguna, ya que los judíos a lo largo de la historia ocuparon lugares porosos de la estructura económica, quizás el más visible en el sistema bancario de algunos países de Europa durante todo el siglo XX, pero jamás fueron parte de los núcleos concentrados de poder en ningún país del mundo hasta el surgimiento del Estado de Israel en 1948 y, en los escasos ejemplos en que habían logrado integrarse marginalmente en algún espacio de poder, por lo general

ello había requerido precisamente renunciar a su condición judía, algo que se continúa en el presente en cualquier sociedad contemporánea, quizás con la excepción, en las últimas décadas, del sector financiero de los EE. UU.

Pero en esta disputa por la construcción hegemónica de representaciones de la realidad, una de las características más persistentes y efectivas del fascismo es que no se propone como una explicación racional y objetivable sino que apela a identificaciones simples y a slogans movilizadores. Las cosas son así “porque todos sabemos que son así”, porque acabamos de ver la noticia de un robo cometido por un inmigrante peruano o paraguayo, o porque tenemos una anécdota para contar acerca de algo que nos acaba de ocurrir en el encuentro con un judío usurero o amarrete.

Cualquier propaganda política —no solo la fascista— se basa en estos procesos de simplificación y en el recurso a formas de emocionalidad (la identificación con un líder, la construcción de un nosotros, la apelación a la patria, entre formas clásicas del pensamiento político), pero el fascismo se caracteriza por su posibilidad de apelar a sentimientos que no solo simplifican la comprensión de la propia realidad sino que otorgan legitimidad a nuestros miedos y a nuestras fobias, e incluso buscan “resolverlos” a partir de “propuestas de acción”. Esta proyección de los odios y resentimientos hacia grupos vulnerables y accesibles en la cotidianeidad se propone quebrar las relaciones de solidaridad entre distintos sectores que sufren las consecuencias de una crisis económica o política para aprovechar dicha fragmentación y lograr reconfigurar los quiebres para redirigirlos hacia aquellos que resultan victimizados o agredidos, en donde cada escalón de sufrimiento busca diferenciarse del escalón más bajo o contiguo, en lugar de articularse para confrontar de modo colectivo y plural frente a las condiciones profundas que explican el deterioro de su situación, por lo general crisis económicas con distribución regresiva de la riqueza.

El fascismo original resultó efectivo en tanto destrucción de toda capacidad crítica y en tanto despliegue de sentimientos que buscaban cuestionar las conquistas del orden civilizatorio: la igualdad, la solidaridad de clase de los sectores populares, la cooperación internacional entre los distintos grupos de población oprimida en el planeta, elementos fundamentales del sentido común planteado por los movimientos revolucionarios, aun cuando obviamente también estos registros conectaran con formas de emocionalidad que buscaban unificar la identidad de trabajadores de distintos orígenes y culturas. En la especificidad fascista, la movilización de recursos emocionales se basa en la apelación a la heterofobia, al prejuicio e incluso al terror hacia quien aparece como distinto, a la envidia hacia el que disfruta de otro bien, a la competencia entre los más miserables por la mera supervivencia.

Vale la pena detenerse en las transformaciones sufridas por la institucionalidad democrática en las últimas décadas para observar algunas de las novedades que pueden incidir y darle su especificidad peculiar a una emergencia fascista contemporánea.

La política se ha ido transformando vertiginosamente en un producto subsumible en estrategias de consultoría, marketing y mercadotecnia, y la “imagen” de los líderes va reemplazando muy velozmente al “programa político”, al punto que dichos programas tienden a desaparecer o se presentan con medidas contradictorias, inconsistentes o meramente frases de ocasión, arrancadas de estudios de focus groups sin el menor interés por la posibilidad concreta de llevarlas a la práctica o la coherencia entre los postulados de campaña y las gestiones de gobierno. Esto es parte del modo postmoderno de ejercicio de la política y no se vincula necesariamente con la posibilidad fascista, pero se verá que puede otorgarle ribetes distintos y específicos en relación con las experiencias fascistas clásicas en la Europa de mediados del siglo XX.

Durán Barba desarrolla en sus trabajos, con cinismo y un dejo burlón, precisamente el carácter obsoleto del programa político en

las campañas electorales contemporáneas, basándose en la transformación que habría sufrido la subjetividad de la mayoría de la población a partir de fines del siglo XX, y con ella la modificación de las lógicas de decisión del voto. El impacto político e increíble éxito de ventas del libro lanzado a fines de abril de 2019 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner –una de las figuras más vinculadas a la construcción de una politización participativa y programática dentro de las opciones políticas argentinas en el presente– se inscribe, paradójicamente, en la misma tendencia, buscando una empatía emocional estructurada en una primera persona subjetivista que da cuenta de los sentimientos íntimos y sufrimientos familiares y personales que le han producido algunas de las decisiones y políticas del gobierno macrista más que una clásica exposición de un programa político para la próxima confrontación electoral.

Las técnicas actuales de las campañas políticas se estructuran en función de estas lógicas de “imagen” y de apelación a las identificaciones emocionales, y aun los representantes de los partidos más radicalizados de la estructura política —la izquierda trotskista, la derecha militarista— comienzan a medir a sus candidatos con estas herramientas, incorporando un modo de concebir la política que pareciera imposible de eludir. La presencia de representantes de partidos, sindicatos o movimientos en ámbitos de la farándula o de espectáculos, la transformación del lenguaje, la organización de campañas más preocupadas por el color, la fotografía o el hashtag adecuado que por la disputa alrededor de la evaluación de una gestión de gobierno o de las políticas a implementar. Es más que común que muchos de los candidatos no puedan ni siquiera formular con claridad tres o cuatro ideas fundamentales de su propuesta política y terminen repitiendo frases huecas y carentes de sentido o significantes “flotantes”, como la búsqueda del “bienestar de los argentinos”, la “justicia”, el “fin de la corrupción”, “un futuro promisorio” o “un cambio”.

Pensar en una crítica moralista a estas transformaciones puede terminar resultando tan inocua y vetusta como las reacciones del

movimiento ludita (52) ante la aparición de las primeras máquinas industriales y la transformación del artesanado, que creían que podrían confrontar la novedad simplemente atacando las máquinas, rompiéndolas e intentando volver al vetusto y fenecido sistema artesanal. No se trata tan solo de quejarse amargamente por aquello que se estaría perdiendo en la lógica de estos cambios sino que resulta más fructífero tratar de analizar las consecuencias en las relaciones sociales, en los modos de construcción y circulación del poder, en el rol de la política, en los lazos sociales, entre muchos otros elementos. Esto es, que ni una aceptación acrítica ni una crítica moralista resultan útiles para comprender los efectos de un fenómeno de transformación de la política que debe ser analizado con el objetivo de dar cuenta de sus efectos y consecuencias en el presente y de sus consecuencias y posibilidades en el futuro.

Más allá del posicionamiento concreto —ético o político— de los consultores de las distintas campañas y de los límites que puedan o quieran establecerse a sí mismos en el uso de la manipulación, es obvio que apelar a la discursividad fascista será siempre una tentación, muy en especial cuando la aplicación de una gestión productora de profundas desigualdades (como en el caso del macrismo) va vaciando de efectividad el resto de los numerosos recursos con los que podría contar. Estos han incluido la apelación a una “revolución de la alegría” expresada en globos amarillos o baile en el momento eleccionario, la construcción de la noción de “vecino” como equivalente general de un lazo social que busca prescindir de sus condicionamientos estructurales (clase, profesión, ingresos), la interpelación a estos “vecinos” en charlas íntimas en los domicilios con un montaje de espontaneidad que sin embargo no deja elemento alguno librado al azar, las campañas de timbreo, la necesidad de “apostar al futuro”, las “lluvias de inversiones”, el “segundo semestre” (una reedición, medio siglo después, del “hay que pasar el invierno”), algunas de las numerosas construcciones de una consultoría política realmente inspirada y con gran capacidad de adaptación, pero que parece encontrar su límite en la profundidad, rapidez y dureza de los cambios estructurales generados por una gestión que ya no puede sostenerse tan solo por el ingenio de las

campañas electorales ante la materialidad profunda de los efectos de sus políticas y del reiterado fracaso de sus promesas.

A diferencia de las estrategias políticas coyunturales explicitadas, la apelación al fascismo implicaría una apuesta que, paradójicamente, supone reponer una dimensión política, pero cuyos efectos no son necesariamente controlables. Las dudas y resistencias que podrían aparecer ante la posibilidad de habilitar las prácticas de odio, discriminación o xenofobia parten de la correcta percepción de que, liberadas en tanto prácticas sociales legitimadas e instigadas por una estrategia política, no sería tan fácil volverlas a su caja una vez concluida la campaña electoral. El fascismo puede ser un recurso especialmente potente a la hora de reunir adhesiones y como estrategia de escape de la posibilidad de instalar la economía en el centro de la campaña electoral, pero sus consecuencias son mucho menos manipulables que las de cualquiera de los recursos tácticos aplicados hasta el momento.

Pese a ello, se han rastreado aquí acercamientos cada vez mayores de distintas figuras políticas a este uso electoral del fascismo, tanto al interior de la alianza de gobierno del macrismo como dentro de los sectores más nacionalistas o reaccionarios del peronismo, en fuerzas provinciales o más pequeñas, e incluso en la creación de nuevos partidos políticos que —fogoneados por el rápido éxito electoral del neofascismo brasileño con la figura de Jair Bolsonaro— buscan reunir y autonomizar a los representantes más radicalizados de la derecha vernácula, desde el voto militar hasta el voto pentecostal, incluyendo paradójicamente la posibilidad de establecer alianzas con cierto ultraliberalismo que se bautiza como “libertario”, con mucha presencia en los sectores más jóvenes y en las redes sociales y que, paradójicamente o no, en la Argentina siempre se encontró asociado con la derecha militarista y legitimadora del genocidio y con la profunda discriminación y desprecio hacia los sectores oprimidos, sean estos indígenas, afrodescendientes o simplemente trabajadores organizados. (53)

El papel de los discursos sobre la corrupción

En la construcción de una antipolítica que se inclina hacia el fascismo resulta central analizar también el rol jugado por otro conjunto de discursos que constituyen parte de la misma lógica: los discursos sobre la corrupción. En América Latina, esta cuestión ha asumido caracteres todavía más relevantes, lo cual resulta fundamental para analizar las estructuras de sentido creadas alrededor de ella, en tanto involucran numerosas cuestiones que puede resultar útil ir separando y analizando.

Por una parte, las avanzadas fascistas se han montado históricamente en la denuncia de la corrupción gubernamental, o incluso estatal y hasta parapolítica, y en la reivindicación del "honestismo" como fórmula de recomposición de una ética supuestamente perdida. Si los políticos son "todos corruptos", entonces se requiere expulsarlos colectivamente de la posibilidad del ejercicio del poder, quebrando los partidos existentes y acudiendo a corporaciones a las que se intenta construir como ejemplos de honestidad, sean las fuerzas armadas, los periodistas, líderes religiosos u otras figuras que son vistas regularmente como ajenas a la política, incluso proviniendo del empresariado, el espectáculo o la arena deportiva. Algo que también han recuperado las iniciativas neoliberales a partir de fines del siglo XX, y con mucha fuerza en la experiencia menemista.

Sin embargo, y más allá de esta lógica inherente a la cosmovisión fascista, en la región latinoamericana (y muy particularmente en Argentina) se ha perdido de vista el efecto que los altos niveles de corrupción realmente existente y generalizada (esto es, no solo producto de una exageración propagandista sino verdaderamente transversal) han producido en los modos de vinculación de grandes masas de población con la política. De tal modo, en muchos casos se ha perdido de vista que las condiciones de posibilidad del fascismo se asientan ya no solo en una construcción imaginaria o en

la exageración de casos puntuales de corrupción sino en la efectiva destrucción de redes sociales, lo que genera el carácter endémico de la corrupción que ha acompañado la actividad política, cuanto menos desde la última dictadura militar.

Incluso con fuertes diferencias con lo ocurrido en la Europa de los años ’20 o ’30, y que diera lugar a la emergencia de los fascismos originales, la vastedad de la participación en acciones de corrupción por parte de los cuadros más simbólicos de la política argentina desde el menemismo hasta la fecha son muy importantes y han tendido a involucrar cifras muy significativas a la hora de evaluar el impacto social y, sobre todo, el modo en que ha permeado capilarmente a todos los estratos sociales. Si bien se trata de un fenómeno regional, el caso argentino ha sido todavía más significativo en su carácter global y ha tenido escándalos en diversas gestiones a lo largo de toda su historia, incluso remontándose muy atrás en el tiempo, tanto en la denuncia del empréstito con la Baring Brothers, el pacto Roca-Runciman, la “Década Infame”, las acusaciones de cohecho durante los gobiernos peronistas y, muy en especial y en un nivel cualitativamente superior, la estatización de la deuda privada durante la última dictadura militar bajo la gestión de Domingo Cavallo, que produjo el inicio del mecanismo de extorsión de la deuda externa. Esta medida, junto con otro conjunto de decisiones de dicho régimen, vuelve difícil separar a los actores militares de las denuncias por corrupción, a lo que se ha sumado (a partir de los juicios desarrollados contra los genocidas) la constatación de la apropiación sistemática de bienes de los secuestrados en los campos de concentración de la dictadura como una más de las numerosas prácticas de corrupción de los distintos miembros de la dictadura militar.

Todo ello —y muy en especial el crecimiento inédito de la deuda externa argentina y su estatización, todo bajo la dictadura— ha generado como consecuencia que la deslegitimación política a partir de las denuncias de corrupción no haya llevado a instalar a los militares como alternativa (un clásico del fascismo que se puede observar, a modo de ejemplo, en el vecino Brasil), sino,

paradójicamente, a legitimar el acceso al poder de los grandes empresarios ya que, en una errónea y poco constatada afirmación, “no tendrían necesidad de robar”, siendo que muchos de ellos se transformaron en grupos económicos relevantes precisamente a partir de las maniobras fraudulentas de la última dictadura, con el caso del Grupo Macri como uno de los más significativos.

Sin embargo, y más allá de estos antecedentes, en la construcción colectiva de las representaciones sobre la corrupción, en el país daría la sensación de que fueron los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem (1989-1995 y 1995-1999) los que implicaron un salto en la concepción del fenómeno por parte de toda una nueva generación política, en una tendencia mucho más internacional que propiamente argentina, ya que se vincula con la transformación de las lógicas de la política a partir del fin de la Guerra Fría y el reemplazo de la puja en clave ideológica por una disputa electoral que, cada vez más, aparece centrada en los atributos individuales de los candidatos, entre los que comienza a destacar el reclamo de la “honestidad”. Es dentro de dicho universo que la corrupción pasó de ser observada en términos de escándalos vinculados con determinados funcionarios a un modo sistemático y general de ejercicio de la política, que legitimaría el alejamiento de “la gente”, alienándose así de los modos de gestionar colectivamente su presente.

Gran parte del periodismo de investigación argentino contemporáneo tuvo uno de sus puntos fundamentales de legitimación, o su momento de mayor difusión pública, en la posibilidad de denunciar y analizar sistemáticamente las distintas modalidades de robo en la administración pública durante la década menemista, que se caracterizó por la vastedad y sistematicidad de las prácticas de corrupción entre sus funcionarios, hasta ser considerada prácticamente como “política de Estado”. Más allá del rol de Jorge Lanata en el diario Página/12, entre las obras que construyeron la visión sobre el tema, se debe destacar uno de los best-seller principales de Horacio Verbitsky, Robo para la corona (54), publicado originalmente en 1991, obra señera en la

inauguración de un periodismo de investigación que buscaba comprender el daño social y la funcionalidad política de la corrupción.

Paradójicamente, esta denuncia de la corrupción en clave de “negociados”, y vinculada a la idea de una “casta política” favorecida por la sistematicidad de su práctica, jugó un rol fundamental en la despolitización y la dificultad para asumir la política como territorio de apropiación, más allá de los objetivos de los propios periodistas, que en muchos casos señalaban permanentemente la participación empresarial. O, en su defecto, estas formas de naturalización de la corrupción también condujeron, otra vez más allá de las intenciones de los periodistas de investigación, a la asunción de que las lógicas de la política requieren de un arsenal de recursos económicos que deben asumir la reproducción del financiamiento espurio, por ejemplo desde la obra pública, como ha sido el caso de cierto pragmatismo presente en varias fuerzas populares de la región en Brasil o Argentina.

En esta confusión se destacaron dos tendencias que terminaron alimentando el uso de la denuncia de la política en tanto “territorio copado por la corrupción”.

La primera de estas tendencias, con fuerte apoyo tanto en las organizaciones de izquierda más radicalizadas como en las del neoliberalismo más extremo, y también en las del “cualunquismo” (55) de los grandes medios de comunicación, se basó en cuestionar los salarios percibidos por legisladores, jueces, ministros o gobernadores. Atacar el salario de un trabajador que está a cargo de la gestión y defensa de los intereses colectivos, en lugar de centrar el eje en las estructuras impositivas de distribución de la renta o en las formas sistemáticas de corrupción de los distintos estratos de la administración pública, constituye un problema significativo a la hora de la construcción de las representaciones colectivas acerca de la acción social. La buena remuneración de un funcionario público es un principio fundamental de la democratización del acceso a la política y a la administración y fue,

desde tiempos muy antiguos, un principio progresista que buscaba fomentar la equidad y la ampliación de la participación política. La insistencia en transformar la gestión pública en una tarea ad honorem o rentada deficientemente no es más que un modo de asumir que solo aquellos sectores acomodados y con capacidad de poder ganar de otro modo su sustento (por ejemplo, quienes viven de rentas, los grandes empresarios, las figuras del espectáculo o del deporte) tendrían la disponibilidad de tiempo y recursos necesaria para asumir las tareas de la administración pública. Por el contrario, quien asume esas tareas no preocupado por la remuneración es posible que se proponga recuperar la inversión no ya con un buen salario sino a través de las ganancias obtenidas por el desvío de fondos desde las arcas públicas hacia sus propios bolsillos que le permite el ejercicio de la función, como ha ocurrido claramente con la gran mayoría de funcionarios del macrismo, desde el propio presidente hasta los ministros y secretarios en áreas cruciales como energía, hacienda, finanzas o transportes, entre otros. Resulta verdaderamente insólito observar a numerosas organizaciones y dirigentes de los partidos de izquierda insistir en este vaciamiento de la función pública, donde la preocupación no pasa por el ejercicio efectivo de la corrupción sino que se confunde esta última con la percepción de un salario digno y significativo por el ejercicio de la función pública.

Con una visión opuesta pero tan o más problemática, en muchos sectores políticos más preocupados por la “Realpolitik” (aunque en muchos casos ligados al campo popular), la connivencia con la corrupción fue asumida como un signo de la política contemporánea y la recaudación a través del manejo de la obra pública estatal —entre otros mecanismos— fue aceptada como una legítima necesidad para construir la “caja” con la que salir a enfrentar las maquinarias electorales “enemigas”. De este modo, sea participando activamente en dichas maniobras o simplemente cerrando ojos y oídos ante las mismas, se tendió a aceptar la corrupción como un componente inevitable de la política, lo cual constituye un elemento importante para comprender la falta de reacción y silencio ante las campañas mediáticas que lograron —cuanto menos en el período

2013-2017— la condena social al kirchnerismo, que le significó la derrota en tres elecciones consecutivas.

Si el fascismo ha logrado históricamente articular el discurso anticorrupción en su construcción de la antipolítica, las dos representaciones descriptas (el denuncialismo de los “salarios de la función pública” y la asunción y aceptación de la necesidad de contar con una “caja de la política”) no han hecho más que profundizar estas tendencias. En ambos casos, aunque con formas distintas, se asume la corrupción como parte inescindible de la política y, por tanto, también se asume una negativización de la misma, sea en la acusación genérica a una “clase política” de la que la izquierda más radicalizada quiere distinguirse desde el “honestismo” del “no cobramos salarios” (que solo puede sostenerse desde una organización que remplaza con otros fondos los salarios no percibidos) o bien en la asunción pragmática de la corrupción como un elemento necesario de la política contemporánea, que lleva a grandes masas de la población a abjurar de la política, como espacio “contaminado” y poco apto para una construcción colectiva, participativa y en búsqueda del bien común y no del beneficio corporativo.

Ya desde fines de los años ’90 —y nuevamente ante cada crisis sociopolítica y económica— la reacción antipolítica se estructura en la consigna “que se vayan todos”. La consigna tuvo la capacidad de aunar sentimientos encontrados, de permitir una confluencia entre una condena neoliberal de la política y otra condena más anarquista o radicalizada. También en los grupos que en su momento se definieron como “situacionistas” y que, en la búsqueda de recomponer la autonomía de distintos movimientos del campo popular —necesaria y potente— prácticamente renegaron de la disputa política por el ámbito de lo público. En la gestión de los intereses colectivos no hay modo de que “se vayan todos”, así como no existe el “afuera” de la sociedad, en donde podríamos constituir las relaciones utópicas que no encontramos en la cotidianeidad de nuestra vida social.

El “que se vayan todos” tendió a homologar proyectos contradictorios. La focalización del enemigo en la “casta política” alienó la comprensión de los procesos más estructurales de la acción social, facilitando un fenómeno impredecible en la política argentina: que un conjunto de representantes de los sectores más concentrados de la economía rentística pudiera llegar al gobierno a través de elecciones democráticas, algo que solo habían logrado hasta aquel momento por asonadas militares, pero que ahora se transforma en un fenómeno regional o internacional. Muchos de los outsiders de la política que se han transformado en presidentes en América en este siglo XXI provienen del mundo de la empresa privada, como los casos de Vicente Fox, Sebastián Piñera, Pedro Kuczinsky, Mauricio Macri y el propio Donald Trump, en todos los casos creando nuevos partidos para ello y constituyendo algunos de los nombres que señalan esta transformación, en la cual el odio y la denuncia de la “casta política” no se traduce en un avance de los sectores postergados, de los anarquistas o de los grupos radicalizados. Por el contrario, al igual que la secularización constituyó una herramienta de legitimación política de la burguesía, el discurso antipolítico ha abierto las puertas para el acceso directo del empresariado a la función pública, algo que hasta aquel momento solo podían hacer a partir de su alianza o cooptación de alguno de los partidos políticos con apoyo popular o con el uso abierto de la violencia en su articulación con las fuerzas armadas y las dictaduras militares.

El fascismo del siglo XXI se monta en esta demonización de la política pero, ante el fracaso en la gestión de la mayoría de estos regímenes empresariales, busca ahora proyectar los resentimientos y frustraciones a través de la habilitación del odio, lo cual requiere construir un enemigo sobre el que descargarlo, un otro negativo que bien puede ser encarnado por los inmigrantes en busca de trabajo, los militantes de determinadas fuerzas políticas, los musulmanes, los gitanos, los “cabecitas negras” de los suburbios del conurbano, los trabajadores organizados o sindicalizados, los piqueteros y manifestantes, los docentes o, apelando a los imaginarios más

antiguos, los judíos, que siempre continúan disponibles para abatir sobre ellos las más disparatadas conspiraciones.

Tanto la participación de fuerzas de izquierda en la demonización de la política como la minimización de los efectos destructivos de la corrupción endémica (al modo del “roban pero hacen” o del “necesitamos la caja para disputar con Clarín”), la asunción de la prebenda como elemento intrínseco al ejercicio de la política contemporánea, son todas tendencias que no hacen más que avivar y profundizar el hartazgo del que se alimenta el fascismo, facilitando el pasaje a la etapa siguiente.

-

37- Todo un trabajo pendiente aún para las ciencias sociales radica en la conceptualización de los modos en que operan en las relaciones sociales formas equiparables (aunque no analogables, ya que se trata de otro nivel de análisis) a los distintos mecanismos de defensa. Janine Puget y René Käes han desarrollado, por ejemplo, el concepto de “pacto denegativo” para pensar formas sociales con rasgos equiparables a mecanismos de negación o renegación. Cabe pensar estas adecuaciones para otro conjunto de mecanismos, en este caso modalidades proyectivas.

38- Me parece importante no ceder en el lenguaje denominando como “justicia por mano propia” a acciones que en modo alguno pueden pensarse como parte de un procedimiento justo o con vínculo alguno con la justicia, como asesinar a una persona que buscó apropiarse de un bien, sea a través de un robo o de un hurto. Estas cuestiones se desarrollarán más a fondo en el capítulo siguiente.

39- Baby Etchecopar, Radio 10 (El ángel del mediodía), 12/09/2018- https://ar.radiocut.fm/audiocut/habla-de-fascismo-es-fascismo-incita-a-la-guerra-civil/

40- Baby Etchecopar, Radio 10, 30/07/2018 https://www.impulsobaires.com.ar/nota/266137/durisima_editorial_de_baby_etchecopar_en_radio_10_a_alguien_hay_que_matar_dijo_a_raiz_de_las_policias_asesinadas/

41- Eduardo Feinmann, Radio La Red (Feinmann 910), 15/11/2018. https://eduardofeinmann.com/2018/11/15/cuando-vamos-a-parar-con-el-terror-en-la-argentina/

42- Sergio Berni, entrevista en Vorterix Rock (Guetap), 28/10/2014

https://radiocut.fm/audiocut/berni-estamos-infectados-de-delincuentes-extranjeros-1/

43- Guillermo Moreno a Myriam Bregman, C5N, 16/05/2015

http://laizquierdadiario.com/VIDEO-En-un-debate-televisivo-Myriam-Bregman-vapuleo-a-Guillermo-Moreno

https://www.youtube.com/watch?v=OBtbpCTDwog

44- Patricia Bullrich, entrevista Radio La Red (Feinmann 910) 24/01/2017

https://radiocut.fm/audiocut/patricia-bullrich-los-peruanos-y-paraguayos-vienen-a-matarse-por-el-control-de-la-droga

45- Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, año 2017, accesible en https://ppn.gov.ar/institucional/noticias/2010-personas-extranjeras-privadas-de-su-libertad

46- Miguel Ángel Pichetto, conferencia en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) sobre “narcocriminalidad”, 20/12/2018

https://www.laizquierdadiario.com/El-mensaje-xenofobo-de-Pichetto-La-Argentina-oscura-son-las-villas-del-conurbano

47- Tuit de la ministra de Seguridad, 10 de mayo de 2019, 12:03pm, con casi 15.000 likes.

48- Mauricio Macri, mensaje en su cuenta personal de Twitter, 28/09/2018, 11:57am.

- https://twitter.com/mauriciomacri/status/1045688949862207489?lang=es

49- Véase como ejemplo de sus reflexiones Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, El arte de ganar. Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas, Buenos Aires: Sudamericana, 2011 y, de los mismos autores, La política en el siglo XXI. Arte, mito o ciencia, Buenos Aires: Pengüin Random House, 2017.

50- Véase Antonio Gramsci, Antología. Buenos Aires: Siglo XXI, 2013.

51- Véanse, entre otros, los análisis del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano o del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

52- El ludismo fue un movimiento creado por artesanos ingleses, a comienzos del siglo XIX, que reaccionó ante la introducción de las máquinas en la industria textil considerando que destruirían la posibilidad del empleo, y por tanto se proponían atacar y destruir las máquinas como modo de impedir dichas transformaciones y resguardar el empleo artesanal.

53- El 27 de marzo de 2019 se realizó el acto de relanzamiento de Valores para mi país, el partido que apunta a la unidad del movimiento “celeste” de cara a las próximas elecciones. El acto estuvo presidido por la exdiputada nacional y fundadora del espacio, Cynthia Hotton, que luego de un paso fugaz por la política ha

logrado articular distintas corrientes del movimiento evangélico. Del acto participaron la candidata del partido Somos Vida, Amalia Granata (elegida como diputada provincial por Santa Fe en 2019); el periodista Mariano Obarrio y el exvicepresidente del Banco Nación, Juan José Gómez Centurión, miembro de los grupos carapintadas y portavoz de distintos sectores militares, quien terminó postulándose para presidente por uno de los espacios políticos creados a partir de esta convocatoria. Otros grupos afines han preferido participar del lanzamiento político del economista José Luis Espert que articula la confluencia de algunas de estas corrientes en una novedosa mezcla de neoliberalismo extremo e incipiente fascismo punitivista.

54- Horacio Verbitsky, Robo para la corona. Los frutos prohibidos del árbol de la corrupción, Buenos Aires: Planeta, 1991.

55- El cualunquismo, en tanto expresión de un modo de concepción de la política, nació hacia 1945 en Italia, alrededor de la revista L ´uomo qualunque, fundada por el comediógrafo Guglielmo Giannini y, entre otros, por el nono Giorgio Macri, que siempre quiso ser artista pero sus convicciones (que no eran bolcheviques, pero tampoco fascistas) encontraron una síntesis en ese elogio al hombre común que trabaja, tiene familia, defiende la propiedad privada, que en épocas de violencia considera la posibilidad de la pena de muerte, ama el deporte, el aire libre, el sol, la ley, el orden y la eficacia policial. Aunque no decididamente fascista, la lógica del “cualunquismo” puede pensarse como central en la articulación contemporánea de la construcción antipolítica neoliberal y la reemergencia neofascista en el siglo XXI.

Capítulo 4

La transformación de los modos de identidad contemporánea y sus efectos en las relaciones sociales

Hay una cuestión difícil de trabajar pero que, sin embargo, juega de modos profundos en la habilitación y consolidación de posibles salidas fascistas en la Argentina contemporánea: las transformaciones en los modos de construcción y percepción de las identidades. Numerosas cuestiones han cambiado en este plano en el siglo XXI, pero pocas de ellas han recibido un tratamiento crítico, pese a que tienen numerosos lazos con la oportunidad de reemergencia de los fascismos.

Algunos de estos cambios han ocurrido como consecuencia de transformaciones políticas y económicas de importancia (el fin de la Guerra Fría y el giro de un mundo bipolar a uno interimperialista con las disputas entre EE. UU., China y Rusia, el auge del neoliberalismo como paradigma de época tanto en lo político como en lo moral, el aumento rápido y profundo de las condiciones de desigualdad, el crecimiento sostenido de "sobrantes" de población a los que no se asigna función ni siquiera como ejército de reserva (56)). Otras tienen que ver con cambios más vinculados a la cultura (la puesta en cuestión de la estructura familiar, el desvanecimiento de los modelos clásicos estructurados desde el rol profesional y su reemplazo por culturas de consumo, la transformación de las relaciones de pareja y de los vínculos paterno-filiales).

Esta serie de cambios han tenido fuertes efectos, por una parte, en los modos de construcción de identidad y, a partir de allí, en los tipos de relación posibles con los otros. Han generado profundos quiebres, una de cuyas derivas fundamentales han sido las transformaciones en los modos de ejercicio de la criminalidad mal llamada "común" o "popular", esto es, la violencia contra la propiedad o contra las personas ejercida por parte de la propia población y, muy particularmente, en los modos en que estas prácticas tienden a erosionar, debilitar o transformar los lazos sociales basados en la solidaridad o la cooperación entre pares.

La articulación de estas problemáticas se expresa en distintos temas. Por una parte puede observarse el abandono de formas identitarias universalizantes (los trabajadores, los padres o madres,

los niños, los jubilados) por formas cada vez más corporativas o articuladas con hábitos de consumo (vegetarianos o veganos, seguidores de un grupo musical, usuarios de los productos de cierta empresa) y, vinculado a ello, cierto aumento del fundamentalismo en la conformación de nuevas identidades que comienzan a luchar legítimamente por sus derechos (pueblos indígenas, mujeres feministas, ecologistas, quienes luchan por el reconocimiento de identidades sexuales no hegemónicas, entre otros), pero que en muchos casos van tendiendo a transformarse en defensas a ultranza de identidades cerradas, corporativas. Este proceso también comienza a ocurrir en el campo religioso (tanto en los tres monoteísmos como, también, en culturas politeístas), en donde las miradas universalistas van siendo reemplazadas por modalidades cada vez más autorreferentes y discriminatorias. En todos los casos, puede pensarse esta deriva en tanto búsquedas de una seguridad ausente en un mundo observado como cada vez más riesgoso, impredecible y cambiante, y donde los valores que daban sentido y explicación a la vida han comenzado a ponerse en cuestión. Refugiarse en identidades esenciales y construidas de un modo cada vez más fundamentalista puede estar buscando seguridades que ya no se encuentran en los modos clásicos de construcción de identidad. Esto puede jugar un rol importante en la percepción de una inseguridad existencial, que se suele articular muchas veces con los discursos sobre la “inseguridad” de la vía pública o de la vida en el propio hogar, modalidades de proyección de cuestiones de mayor profundidad.

Por otra parte, puede observarse el aumento del impacto de formas de adicción, tanto en las drogas como con respecto al alcohol. En los sectores medios y acomodados, resulta significativo el crecimiento en el uso de opiáceos, cocaína o medicamentos tranquilizadores (ansiolíticos, antidepresivos), con o sin prescripción médica y para tratar no solo cuadros clínicos sino cualquier asomo de ansiedad o depresión. En los sectores más excluidos del sistema ha crecido significativamente el paco, como una “droga para pobres” con altos niveles de destrucción vertiginosa del equilibro bio-psico-social y con profundos efectos en la disrupción de las relaciones

sociales en sus territorios. Y en todos los sectores sociales resultan significativos los aumentos en el consumo de alcohol.

Vinculado con todo ello, no pueden ignorarse las vinculaciones de las redes de criminalidad y narcocriminalidad con las fuerzas de seguridad y los aparatos políticos locales o nacionales, y su incidencia en el manejo de distintas “sensaciones” de inseguridad, que se corresponden con una creciente capacidad de modular y controlar los niveles de criminalidad (y por lo tanto, también las sensaciones de inseguridad) reguladas por estas redes articuladas desde el comercio de estupefacientes, formas de criminalidad que cobran mayor intensidad en la afectación de las poblaciones más humildes y vulnerables, que ocupan los territorios de disputa de la mayoría de estas bandas. A su vez, esta nueva criminalidad opera con niveles de violencia que difieren cualitativamente de la situación existente hasta fines de los años ochentas. (57)

Sin embargo, lo paradójico es que este conjunto de cambios en diversos órdenes de la vida solo suelen figurar en los discursos de la derecha (y muy en especial de las nuevas derechas), tanto en su clamor por recuperar las “identidades perdidas” (que son vistas de un modo esencialista y nostálgico, intentando volver a un “mundo perdido” a partir de la profusión de las “nuevas identidades”) como en su deriva punitivista, que propone el ataque letal a los “causantes de la inseguridad”.

En el campo progresista, revolucionario o en los organismos de derechos humanos, estos temas apenas aparecen como cuestionamientos fragmentados a los viejos órdenes tradicionales en los modos de construcción de identidad o en tanto necesidad de contener el desborde creciente del aparato punitivo y su afectación a los sectores populares, pero no se suele ir mucho más allá en la comprensión de los fenómenos de cambio.

Es innegable la necesidad de confrontar social y políticamente con el creciente aumento internacional, regional y local de la punitividad y capacidad de lesión de las fuerzas de seguridad, con niveles alarmantes de prisionización, de utilización del ajusticiamiento por

parte de las fuerzas de seguridad (por ejemplo, con el aumento inusitado del “gatillo fácil” o los “escuadrones de la muerte”), con el endurecimiento insensato de penas a delitos comunes, con la pérdida de toda proporcionalidad en las modificaciones recurrentes a los códigos penales o con las propuestas de baja de la edad de imputabilidad y, más en general, con la violación general de derechos de las poblaciones más humildes y la destrucción creciente de las condiciones de encierro del sistema penitenciario. El trabajo de numerosas organizaciones alrededor de estos temas (entre las que cabe destacar al CELS, la CORREPI, la Garganta Poderosa, entre tantas otras en todo el país, así como también numerosos grupos de investigación sobre la temática en las universidades públicas de todo el territorio nacional) es destacable y fundamental como parte de la confrontación con las violencias de Estado y como acción imprescindible del campo popular.

Sin embargo, los discursos que circulan socialmente sobre estas transformaciones y sus vinculaciones con lo que se ha dado en llamar “criminalidad común” (incluso entendida y construida muchas veces como eje de la “inseguridad”) han tendido a hamacarse entre dos polos (“punitivismo” o “garantismo”) que, más allá de sus objetivos, tienden a una simplificación. El posicionamiento ético y político de estos dos discursos es polar, con lo cual que ambos terminen simplificando no implica que simplifiquen igual ni que resulten equivalentes. No es homologable en modo alguno la estigmatización de la población de los barrios populares como “delincuente”, el recorte de la visión de la “inseguridad” solo a las prácticas de la “criminalidad común” y las propuestas que solo ofrecen violencia como respuesta al compararlos con discursos y prácticas que, ante la alarma por el ejercicio desbocado de la violencia punitiva, se preocupan por la defensa de las víctimas directas de la misma.

Pero, más allá de estas diferencias ético-políticas, ninguno de ambos discursos está logrando capturar la complejidad de las vinculaciones entre sistema productivo, modelos de identidad, modelos de familia y comunidad, características de la criminalidad y

los efectos de todo ello en las transformaciones de la subjetividad que pueden estar alimentando el crecimiento del fascismo.

Las lógicas “punitivistas” ya fueron ilustradas en el capítulo previo con declaraciones de las figuras políticas que estuvieron a cargo del área de Seguridad en la última década, desde Sergio Berni hasta Patricia Bullrich, acompañados de otros políticos de relieve y con antecedentes reiterados en las campañas electorales previas, muy en especial en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Carlos Ruckauf, Daniel Scioli, Francisco de Narváez, Sergio Massa, la actual gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de seguridad Cristian Ritondo.

El eje de estos planteos, que suelen ser similares independientemente de la fuerza política que los encarna (aunque tienden a ser cada vez más y más extremos), postula apenas la constatación de un “crecimiento de la inseguridad” que se suele vincular a la mayor magnitud y capacidad de acción de las “organizaciones criminales”, muy en especial aquellas articuladas con el narcotráfico. Sin embargo, al no tomarse en cuenta en el análisis las condiciones objetivas y subjetivas de surgimiento de estas prácticas, sus vinculaciones con los cambios en el orden productivo ni los profundos y crecientes vínculos de estas organizaciones con las fuerzas de seguridad y el aparato político territorial, la única respuesta reiterada una y otra vez pasa a ser oponer a dicho crecimiento la necesidad de combatirlas con “mayor firmeza”, entendiendo por lo general dicha firmeza como una creciente autonomización de las fuerzas de seguridad con respecto al poder político institucionalizado, relajando o eliminando los sistemas de control y tendiendo a culpar recurrentemente a los “garantistas” (entre los cuales se suele incluir a jueces, fiscales y organismos defensores de los derechos humanos) como los responsables de impedir una firme y necesaria represión del delito.

Con expresiones como “dejar trabajar” o “dejar las manos libres” a las fuerzas represivas, estas políticas no suelen lograr avance alguno en el control de los índices de criminalidad, más allá de

continuar incrementando la violencia en toda la sociedad. Este discurso no solo es patrimonio de numerosos sectores políticos transversales —puede encontrárselo claramente en el macrismo, pero también en numerosos sectores del peronismo y de otras fuerzas políticas— sino que también es eje de campaña de un periodismo que comprende la cuestión de la inseguridad a partir de una díada con la “voluntad de represión”, por mucho que ninguna de las lógicas punitivistas haya logrado bajar los índices de criminalidad ni su nivel de violencia, que parecieran encontrarse en un lento y persistente crecimiento.

Estos llamados al aumento de la violencia represiva como respuesta ante el “aumento de la inseguridad” suelen ser acompañados por importantes sectores de la población hasta el momento en que se produce, casi inevitablemente, el asesinato de “inocentes” (58) por parte de unas fuerzas de seguridad cada vez más autonomizadas (59) y autorizadas a utilizar con menos resguardos la fuerza (el último caso ha sido la masacre en la localidad de San Miguel del Monte, a fines de mayo de 2019). Estos hechos de violencia policial desbocada afectan, por lo general, a sectores medios proletarizados o a trabajadores y población de los barrios populares, que en algunos casos reaccionan de modo organizado con marchas y reclamos masivos, y tienden a generar en este caso cierta condena social de las fuerzas de seguridad y un silenciamiento temporario del reclamo punitivo, al verse confrontado con los efectos letales de la represión. Sin embargo, dicho reclamo represivo suele reactivarse unos meses después, ante la difusión de algún hecho luctuoso de inseguridad (por lo general, algún secuestro extorsivo que culmina con la muerte del secuestrado, una salidera bancaria que genera víctimas fatales, el asalto a mano armada a algún hogar o comercio televisado en vivo, o cualquier otro hecho de criminalidad fuertemente amplificado por los medios de comunicación). Y así es como todo vuelve a comenzar.

Este ida y vuelta entre el aumento del punitivismo, la autonomización y/o aumento del uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, la producción de algún hecho de violencia

policial que restringe por un tiempo el reclamo y su reinicio unos meses después, constituye un ciclo que se remonta, cuanto menos, a finales de los años ’80 (60) y se ha reiterado sin pausa desde aquel momento.

Pero la complejidad no termina tampoco de ser capturada por parte de quienes se agrupan alrededor de la “defensa de derechos” de los agredidos por la violencia estatal. Desde estas miradas, se suele insistir muchas veces en el planteo de que el aumento de la criminalidad se trataría de una “sensación” (61) subjetiva, que sería apenas el efecto de una “criminología mediática” (62) o que se trata de una consecuencia de las transformaciones económicas o del desempleo masivo, sin que ello permita pensar, en la mayoría de los casos, en transformaciones efectivas en los modos de afectación de los lazos de solidaridad por parte de cambios significativos de los modos de la criminalidad, más allá del motivo de los mismos. Al centrar el análisis en las críticas al punitivismo postulado por las fuerzas reaccionarias y en los efectos del gatillo fácil policial o del sistema penitenciario, se puede terminar clausurando la discusión sobre la efectiva transformación de las identidades y de las formas de criminalidad y sus modos de incidencia en las relaciones sociales, dificultándose paradójicamente una confrontación más exitosa con las estrategias punitivas.

Las tendencias más comunes en la confrontación con la mirada punitivista, como ha señalado Alejandra Otamendi en varios de sus trabajos críticos (63), es postular de modo casi condescendiente la existencia de un “populismo penal” o de una “demagogia punitiva”, planteando o bien que los mismos se construyen desde arriba hacia abajo (esto es, por medio de políticos cínicos que buscan atemorizar a la población para disciplinarla) o bien de abajo hacia arriba (donde un público ansioso y atizado por los medios de comunicación presiona a los políticos para lograr aumentar la represión). (64) De este modo, se termina ignorando el análisis de la posible existencia de transformaciones en los modos de la criminalidad y la posible legitimidad de un reclamo popular en relación con ello, no comprendida ni como populista ni como demagógica.

Asimismo, trabajos como los de Gabriel Kessler (65) sugieren que estas lógicas de análisis y estigmatización de una “demagogia punitiva” popular tienden a asumir que las grandes mayorías serían partidarias de las salidas más represivas cuando, por el contrario, los trabajos etnográficos distinguen miradas mucho más complejas sobre la cuestión, concluyendo que los apoyos al punitivismo surgen más bien ante la imposibilidad de la estructura política de ofrecer otras alternativas, o frente a la negación lisa y llana del problema y la necesidad de su abordaje.

Es muy distinto plantear que el fenómeno que busca enfrentar el punitivismo no existe (esto es, que se trata de algo imaginario, de una sensación, de una construcción mediática, de una manipulación política, de un efecto de medidas económicas) que asumir que la problemática es real y animarse a plantear salidas distintas que no solo se concentren en denunciar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad o por el sistema penitenciario, o incluso las injusticias de las medidas económicas, sino que intenten asumir la necesidad de llevar a cabo acciones que puedan confrontar la problemática en su conjunto. La acción de los organismos de derechos humanos y de los cuadros políticos “progresistas” se ha centrado a lo largo de estas décadas en identificar, denunciar y combatir los abusos de las fuerzas de seguridad y de las agencias penitenciarias, o la creciente desigualdad. Ello es una parte muy necesaria del problema, muy en especial en un contexto de aumento feroz de la capacidad represiva y de la distribución regresiva del ingreso, pero de ninguna manera puede ser la única.

Las lógicas del delito han sufrido transformaciones efectivas a partir de la década del ’90, que han tendido a afianzarse durante todo el transcurso del siglo XXI. Aun cuando los datos oficiales cuentan con importantes subregistros —muy en especial, de lo que ocurre en los sectores populares, que no suelen presentar denuncias ante el aparato estatal, entre otras cosas por su profunda desconfianza en el mismo—, tanto en el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) de la Secretaría de Seguridad de la Nación como, con mucho mayor detalle, en encuestas de victimización como las

ENES-PISAC (66), entre otras, se puede observar un aumento sostenido de la criminalidad sufrida en la vía pública y en el hogar desde 1991, sin picos importantes pero siempre en ascenso más allá de oscilaciones ocasionales en ciertos años. Esto implica que no se trata de picos producto de una situación económica puntual (la crisis de 1989, la de 2001, las producidas por el macrismo en 2015 o 2018) sino de la estabilización de un nuevo nivel de criminalidad con nuevas formas de violencia que implica un aumento significativo del riesgo de sufrir un delito en el hogar o en la vía pública, y que marca una diferencia muy significativa en relación con lo vivido por las generaciones previas y, a la vez, un aumento también significativo en los niveles de violencia implementados para la comisión de dichos delitos. Y que estos niveles no bajan significativamente en circunstancias de recomposición de la distribución del ingreso.

Cuanto menos hasta el presente, pareciera que estos cambios no se corresponden con aumentos importantes en las tasas de homicidio intencional en Argentina, algo que sí es visible en otras realidades cercanas como las de Brasil, Colombia, Venezuela, México o América Central, seguramente por el peso mayor de las redes de narcotráfico, que serán analizadas a continuación. En el caso argentino, los niveles de violencia incrementados no parecen aún remitir centralmente al asesinato sino más bien a lesiones graves o leves, o a distintas modalidades de criminalidad con un uso intensivo de la violencia, lo cual de todos modos resulta disruptivo para las comunidades que las sufren, situación que las encuestas de victimización encuentran más persistente en los sectores populares, justamente uno de los ejes de donde provienen los reclamos por la “inseguridad”.

Lo que parecieran revelar estos reiterados reclamos sociales es la resistencia a naturalizar este nuevo mapa de incremento de la criminalidad, la dificultad de importantes capas de la población para acostumbrarse a convivir con niveles de violencia superiores a los experimentados por la generación previa y que, en un proceso lento pero persistente, tienden a llevar los índices más y más arriba. Lo sugerente de las investigaciones existentes al respecto es que

identifican que las reacciones sociales, si bien muestran altos niveles de preocupación por la inseguridad, no tienden a ratificar en primera instancia salidas ultrapunitivas como la pena de muerte o la baja de la edad de imputabilidad. Por el contrario, pareciera existir mayor apoyo social a formas de prevención general, como el incremento de la presencia de fuerzas de seguridad en la vía pública, estrategias de articulación vecinal, mayor iluminación de los lugares públicos, formas de acción cooperativa y solidaria, modalidades de justicia reparatoria, reforzamiento de los lazos comunitarios o de las estructuras familiares, políticas sociales o culturales en los barrios, entre otras. Las miradas “agnósticas” sobre cualquier forma de prevención, sin embargo, han tendido a dejar como única alternativa las formas más punitivas.

Si no se asume el problema ni tampoco la posibilidad de formas de acción que no impliquen una transformación global del sistema productivo, lo que no aparece en el horizonte cercano, pareciera que la única alternativa que se ofrece a la población ante la creciente demanda de seguridad es el punitivismo, la seguridad privada, el propio control territorial de bandas criminales como las del narcotráfico o las respuestas individuales o en banda, desde la actuación por mano propia en el ajusticiamiento de delincuentes hasta distintas formas de linchamiento. El desafío sería pensar si resulta suficiente la visión que analiza estas reacciones sociales como parte de un “populismo penal” o “demagogia punitiva” de población manipulada, o si no sería más acertado intentar comprender que se trata de una respuesta más o menos desesperada de grupos sociales que no encuentran escucha a sus reclamos, más allá de una salida punitivista y violenta o de la denegación lisa y llana del problema. Quizás en estos reclamos no escuchados y en esta confusión sobre el rol de la criminalidad en las relaciones sociales radique uno de los cimientos más fuertes en la construcción de una salida fascista o neofascista en la Argentina. Pero para ello se requiere repensar qué consecuencias tiene esta criminalidad en los modos de transformar las relaciones sociales, pudiendo abordar no solo la denuncia del rol estatal y de las fuerzas de seguridad sino también los efectos en los sectores populares del

aumento de sus niveles de victimización y de la estructuración de otro tipo de lazos sociales en los propios territorios.

Delito común y protesta social: diferencias en los modos de construcción de lazos sociales

Un problema importante en las últimas décadas, en relación con la cuestión punitiva y el análisis de la inseguridad, proviene de una confusión previa en la transformación de las concepciones con respecto al rol de la norma. En una lógica reacción ante la profusión de regímenes represivos en la región —encarnados en las distintas dictaduras articuladas como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional—, se tendió a asumir cada vez más la producción y existencia de normas solo desde su sentido represivo, esto es, como expresión de un poder autoritario que tiende a violar derechos ciudadanos o directamente en tanto producción de los aparatos ideológicos del Estado, como parte de la imposición de la hegemonía de los sectores dominantes, una simplificación bastante problemática.

La comprensión y análisis de las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos vividas en la segunda mitad del siglo XX desde una concepción eminentemente liberal le otorgó mayor fuerza a esta perspectiva, a partir de la cual el Estado sería el violador fundamental de derechos y la norma una de las herramientas por las cuales se efectiviza dicha violación (la otra sería el funcionamiento clandestino), quedando cada vez más difusa la articulación de los procesos de producción de normas con correlaciones de fuerza cambiantes y vinculadas con los modos diversos y contradictorios de ejercicio de la dominación. Desde esta mirada liberal democratista y a la vez “denuncialista” del Estado, todo aquel que transgrede la norma es concebido en su carácter de víctima del aparato estatal e incluso, desde las visiones más radicalizadas, de

potencial sujeto contrahegemónico, sin demasiado análisis del tipo de acción que desarrolla, del carácter de la norma violada y de las consecuencias de estos elementos en el lazo social del conjunto de la comunidad. Paradójicamente, estas visiones no han logrado incorporar las propias conquistas del campo popular en la utilización de la propia norma penal estatal, como en el caso de la posibilidad concreta de juzgar y condenar a los responsables de un genocidio, sostener la prisión efectiva y común de algunos de ellos y, muy en particular, el reconocimiento de los tribunales sobre la ilegitimidad de la represión, su carácter genocida y la relegitimación de la voz de los sobrevivientes, así como la recuperación de las organizaciones militantes y del rol solidario y cooperativo de las mismas en la construcción de lazos sociales.

Es cierto que el ámbito del Estado, a través de sus distintas agencias, configuran y cristalizan un aparato normativo que define qué constituye un delito y qué no. Es decir, hay una selectividad de la ley que produce una primera diferenciación entre las prácticas que son consideradas delito y las que no lo son, y cómo se debe actuar frente a cada una de ellas. Ahora bien, este nivel resulta insuficiente para comprender la afectación social que aquellas prácticas pueden implicar: constatar que el Estado es quien legitima, a través del aparato normativo y del sistema judicial, qué constituye un delito no significa, automáticamente, que no exista afectación social en cada una de las prácticas definidas como delito, ni que no exista una disputa y correlaciones de fuerza cambiantes en las determinaciones de qué constituye delito ni, menos que menos, que todas las normas construidas a lo largo de la historia de un Estado favorezcan a los sectores dominantes o a su imposición de hegemonía, o que todos los condenados por el aparato estatal sean ajenos a él, como lo muestra el caso de la condena a los genocidas.

En las ideas retomadas de Michel Foucault sobre la construcción estatal de los “ilegalismos” solo se observa una parte del fenómeno: el carácter productivo del poder en tanto capacidad de normalización. Pero se olvida o se deja de lado que, en la construcción normativa —tanto tradicional como institucionalizada—

se juega también, entre otras cosas, no solo la posibilidad de penar conductas fundamentales de los poderes hegemónicos como el genocidio sino también la capacidad fundamental de imponer límites al uso descarnado de la fuerza. Numerosas conquistas populares se han transformado en normas legales, fueron codificadas como parte de “la ley”. Triunfos que han costado luchas e incluso la entrega de la vida en esas luchas, desde el derecho a la huelga hasta la jornada de ocho horas, el aguinaldo, las vacaciones, la recaudación impositiva a los grandes ingresos, distintas modalidades de distribución de la renta de la tierra, entre muchos otros. Esto es: que el Estado es un espacio de disputa y también lo es la producción normativa, que no puede ser pensada de modos simplificadores, apenas como expresión de la voluntad de los sectores dominantes, porque de hecho no lo es.

El Estado puede convertir en delito el hurto, el robo a mano armada, el homicidio, la protesta social, la huelga, el corte de calles, la discriminación o el genocidio. Si algo han tenido de bueno las rebeliones contra la estructura estatal, ha sido la posibilidad de identificar estos modos de construcción, que nos permiten comprender que una acción no es necesariamente dañina para la comunidad por haber sido construida como delito por la norma estatal. Por ejemplo, la gravísima sanción de leyes antiterroristas que califican como “terrorismo” las acciones que buscan forzar la transformación de una medida de gobierno de una autoridad nacional o internacional es el intento de criminalizar una acción potente, solidaria y cooperativa como la protesta social. Esta identificación permite comprender que esta norma específica —la sanción de una ley antiterrorista— debe ser combatida y derogada por el campo popular. Ello no implica que dicho análisis sea automáticamente aplicable a cualquier norma, incluso a cualquier norma penal. Muchas normas no solo no debieran ser derogadas sino que las luchas del campo popular podrían lograr una estructura normativa más firme, por ejemplo en la necesidad de recaudar más impuestos de los sectores económicos más concentrados o transnacionalizados o, incluso en el caso de procesos revolucionarios, la posibilidad normativa de expropiar determinados

medios de producción. No habría que olvidar que el neoliberalismo más extremo (ahora organizado políticamente en partidos “libertarios”, que han comenzado a surgir en este proceso eleccionario) brega por una normatividad cada vez más acotada y reducida como modo de dejar las relaciones sociales “en manos del Mercado”, conduciendo a una mera correlación de fuerzas descarnada en la que siempre se impondrá el más fuerte o el más cruel, destruida la capacidad de mediación de la ley.

Así como una acción no resulta dañina para el lazo social por el mero hecho de haber sido convertida en delito por el Estado, tampoco es útil ni legítimo caer en la simplificación inversa de creer que una acción, por constituir parte de la persecución estatal, es en sí misma positiva. El hurto, el robo a mano armada, las lesiones, el homicidio o, incluso, la discriminación o el genocidio, constituyen distintos modos de afectar negativamente el lazo social comunitario, las posibilidades de cooperación entre pares. No aceptar un punitivismo exacerbado frente a alguna de estas prácticas o proponerse modalidades más reparatorias de justicia no puede llevar a desconocer los modos de vulneración que generan cada una de ellas en las relaciones sociales ni, mucho menos, puede llevar a despreciar los reclamos colectivos en relación con estas afectaciones ni la necesidad de establecer modalidades para hacer responsables a sus autores y obligarlos a intentar reparar el daño.

Que la policía o el sistema penal persiga por igual la protesta o la “criminalidad común” no transforma las dos prácticas en equivalentes, por más que la defensa de los agredidos por la represión deba encararse en ambos casos con la misma firmeza. La acción del campo popular, sin embargo, no se puede reducir simplemente a defender a quienes sufren el abuso policial ni a identificar el carácter destructivo del sistema penitenciario, por muy importante que sean dichas iniciativas. Son acciones necesarias, sin duda alguna, pero no resultan suficientes.

El piquetero o el militante político que actúa en las calles colectivamente expresa una práctica política consciente, organizada,

cooperativa, que busca conseguir derechos a partir de una acción concertada y común, que busca el interés colectivo. Puede oponerse eventualmente a los intereses de otras fracciones de población —por ejemplo, aquellos que ven interrumpido o dificultado el acceso a su ámbito de trabajo o a recorridos necesarios vinculados a la vida cotidiana—, pero dicho nivel de afectación es mínimo en relación con la construcción colectiva del reclamo y la necesidad de visibilización del mismo. Lo mismo ocurre con el huelguista, por ejemplo, en el caso del transporte o la docencia, y la posible afectación en la vida de otros sujetos sociales. Incluso en muchas modalidades de protesta se busca contemplar estos modos de afectación y estructurar el reclamo de modo tal de articularse con otras fracciones vía el trabajo de explicitación o vía modalidades que buscan minimizar las consecuencias a terceros, como en la apertura de molinetes incorporada como forma de lucha por parte de los trabajadores del sistema ferroviario o del transporte subterráneo en estos últimos años.

Por el contrario, el ejercicio de la “criminalidad común”, el secuestro extorsivo o redes de criminalización mucho más dañinas a nivel colectivo como el narcotráfico, dan cuenta de acciones individuales o en banda que, más allá de sus significativas diferencias entre una y otra, tienden a buscar la apropiación inmediata de un bien o un lucro basado en actividades ilícitas, en todos los casos a partir del ejercicio de la violencia sobre otros, que por lo general son pares. A diferencia del piquete, esta “delincuencia” no suele buscar lazos de cooperación dentro de la comunidad sino que produce distintos tipos de quiebres en los afectados por sus acciones, más allá de que en muchos casos sea la única salida que encuentran a una situación creciente de exclusión, maltrato y abandono.

La incapacidad de identificación de estas diferencias entre figuras muy distintas (la protesta social o la “criminalidad común”, que solo tienen en común ser perseguidas por el aparato punitivo estatal) ha llevado a numerosas organizaciones del campo popular —y a muchos organismos de derechos humanos— a alienarse del sentir popular, que tiene fuertes dificultades para lograr la misma

identificación de intereses con un piquetero, un militante o un huelguista que con aquel que, de modo reiterado y cada vez más violento, se opone a sus propios intereses objetivos, no solo individuales sino fundamentalmente de clase. Así como la protesta colectiviza cooperativamente un reclamo, la “delincuencia común” afecta y ataca a sus pares y tiende al quiebre de las relaciones horizontales y solidarias entre un conjunto de población sometida a la exclusión. Existe una profunda contradicción entre enfrentar la exclusión o la miseria colectivamente y en forma solidaria frente a hacerlo de modo individual y en una lucha de pobres contra pobres, en la cual aquel que es capaz de ejercer una violencia mayor le usurpa al resto el escaso producto de sus extenuantes jornadas de trabajo, además de que en muchos casos dicha acción viene acompañada de lesiones, maltratos, humillaciones y una violencia cada vez más gratuita y más penetrante.

Entender el origen social de la violencia de esta “criminalidad común”, las estigmatizaciones de las que deriva y las terribles condiciones en las que debe llevarse a cabo una opción de vida (que muchas veces dificulta incluso imaginar otras alternativas) no es equivalente a ignorar las consecuencias concretas de sus prácticas en el tejido social. De hecho, es importante observar otras opciones que también aparecen en el mismo territorio, desde la incorporación a los escalones más bajos de las fuerzas de seguridad hasta los roles jugados —de modos muy distintos— por las iglesias evangélicas pentecostales o católicas, con fuerte presencia en la construcción de distintas modalidades de acción frente a la carencia permanente, algunas solidarias, otras individualistas. Comprender las distintas respuestas ante una situación de exclusión resulta fundamental para poder analizarlas políticamente y evaluar sus consecuencias.

La falta de identificación entre prácticas tan diferentes como la protesta o la “delincuencia común” también ha conducido a que su igualación en tanto “delitos” lleve a sectores importantes de la población —muy en especial a sectores medios, pero también a muchas fracciones de la clase trabajadora— a unificar ambas

prácticas en tanto “ilegales”, transfiriendo la comprensible condena de la violencia de la criminalidad a una condena equivalente ante la protesta social. De este modo se le hace el juego a las formas de criminalización de la protesta y de estigmatización esencialista de colectivos sociales, a partir de la idea de que se trataría de fracciones que “viven de los demás” o “se aprovechan de las riquezas colectivas”, estigmatizaciones cada vez más presentes en los medios de comunicación o en los argumentos de las fuerzas políticas más reaccionarias y, sin duda, claves fundamentales para comprender la emergencia de propuestas fascistas que proponen la represión indiscriminada de ambas como modo de “hacer cumplir la ley”.

El viejo concepto de lumpenproletariado y sus derivas actuales

El marxismo clásico tenía mucha mayor claridad con respecto a estas diferencias, aun cuando la realidad del siglo XIX era bien distinta a la del siglo XXI e incluso cuando podía caer en ciertos modos de estereotipificación o racismo, bastante hegemónicos en la época. Sin embargo, uno de los elementos de mayor lucidez del propio Marx es que jamás confundió las distintas fracciones del proletariado o del campo popular y de la pequeña burguesía profesionalizada con aquellas fracciones a las que calificó como “lumpenproletariado”, en tanto sectores degradados que, pese a encontrarse en una situación desfavorecida y resultar los grupos más golpeados del sistema, logran ser utilizados por la burguesía como su fuerza de choque. En una obra clásica como El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Marx describía estos grupos, articulados con la ofensiva reaccionaria de Luis Bonaparte y con amparo y nexos con las fuerzas de seguridad, como:

“roues arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, esclavos huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos; en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème; con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de diciembre. ‘Sociedad de Beneficencia’, en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora.” (67)

Es claro que en pleno siglo XXI resulta difícil adherir a la prosa degenerativa que parece surgir de las adjetivaciones del texto de Marx, pero ello no debe llevar a descartar la agudeza de distinguir que este agrupamiento ha constituido, a lo largo de la historia —como pueden hacerlo en el presente las barras bravas de los clubes de fútbol, las “patotas” barriales o los distintos grupos de criminalidad articulados de modos más o menos difusos con el narcotráfico y las fuerzas de seguridad—, la fuerza de choque de los sectores reaccionarios, utilizada para atacar a las organizaciones sindicales, a los grupos políticos contestatarios y a todo intento de articulación social del campo popular, muy en especial a nivel territorial.

No comprender la diferencia entre el ejercicio represivo contra la protesta social frente a la posibilidad por parte del Estado de limitar el funcionamiento de bandas criminales que afectan al conjunto de la población constituye un grave error político. La unificación de ambos reclamos como una misma denuncia del accionar punitivo de las fuerzas de seguridad implica desconocer un legítimo reclamo de los sectores populares que, al encontrarse una y otra vez sin respuesta ante la violencia que sufren cotidianamente, pueden en algún momento optar por la única solución que se les ofrece: el

aumento de la capacidad punitiva letal a través de las fuerzas de seguridad. O, peor todavía, pueden incluso asumir la autoregulación de la violencia a través de linchamientos o ajusticiamientos por mano propia o en banda (alternativa central en el fascismo). O incluso pueden terminar otorgando su apoyo a las organizaciones del narcotráfico como los gestores de un “nuevo orden”, una de cuyas primeras medidas es el combate y desarticulación de la “criminalidad común” en el interior del territorio que controlan, por lo general aplicando la pena de muerte a sus responsables, asesinándolos en el mismo momento de la comisión de un delito común o ante la denuncia de algún miembro del barrio.

En el presente no solo se confunden la criminalización de la protesta con la represión al delito común desde la denuncia ante al accionar policial sino que se ha producido lo que podríamos calificar como un conjunto de “romantizaciones” del “pibe chorro” o la marginalidad (lo que en Colombia o México también ocurrió con los “narcocorridos”, entre otras experiencias), presente muy en especial en la literatura, en el cine o en las series televisivas, que busca transformar el nihilismo de estas respuestas individualistas y lúmpenes ante la exclusión en una especie de “cultura política popular”, a partir de un intento de asunción del estigma como emblema. Esta romantización, como todas, no está exenta tampoco de estigmatizaciones, en series como El Marginal, prototípica de un modo de poner en juego las fantasías pesadillescas de ciertos sectores medios acomodados sobre la vida en la cárcel o en los barrios populares, bastante alejada de las condiciones reales en las que se desarrolla.

A contramano de estas tendencias más propias del siglo XXI, las distintas propuestas revolucionarias durante el siglo XX fueron tan o más punitivistas con respecto a la “criminalidad común” como los Estados capitalistas contemporáneos a ellas, tanto en las lejanas Unión Soviética o China como en la más cercana Cuba. Ello no necesariamente constituye una propuesta de solución ni debe ser asumida como la única posible, pero muestra cuanto menos la existencia de un problema en esta confusión contemporánea entre política contestataria y “criminalidad común” o participación en

estructuras mafiosas, por lo general muy articuladas con las fuerzas de seguridad.

Sin adherir en modo alguno a las salidas punitivas, es claro que la mera denuncia de la punitividad estatal no resulta suficiente como respuesta ante la transformación de la intensidad y las modalidades de la “criminalidad común”, así como tampoco resulta suficiente suponer que una transformación económica estructural sería la única solución, no solo porque la misma no aparece como inminente sino porque no desapareció automáticamente de las sociedades que llevaron a cabo procesos revolucionarios. Asimismo, las variaciones en la distribución del ingreso no se corresponden de modo directo con las tasas de delitos, ni en una comparación diacrónica en la misma sociedad, ni en una comparación entre distintos grupos dentro de un mismo sector social, ni en comparaciones entre sociedades distintas, en donde a niveles más o menos equivalentes de desigualdad en la distribución del ingreso en América Central o el sudeste asiático no se corresponden niveles equivalentes de “criminalidad común”, varias veces más alta y más violenta en América Latina y mucho más grave en América Central que en América del Sur, con la excepción de Brasil, uno de los casos de mayor gravedad. Tampoco se encuentran correspondencias de formas de criminalidad entre distintos grupos de inmigrantes que conviven en barrios populares con las mismas características y los mismos ingresos pero con culturas, sistemas religiosos o esquemas familiares distintos. Vale la pena, por ejemplo y entre muchos otros materiales, evaluar el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD (68) para el período 2013-2014, que constata que en la primera década del siglo XXI, el aumento del delito común fue de la mano de la baja de la desigualdad y de la pobreza en gran parte de América Latina, esto es, que las políticas distributivas no son suficientes ni resultan la única variable para comprender las lógicas de la “criminalidad común”.

Se trata de un problema eminentemente complejo y, aunque no constituye el eje de este trabajo, es indispensable tomarlo en cuenta para comprender uno de los campos de mayor consolidación de las

nuevas propuestas fascistas, que han hecho de la denuncia del aumento de la criminalidad y sus consecuencias en las sensaciones subjetivas de inseguridad uno de los ejes fundamentales de sus propuestas, aquel que le permite conectar afectiva y políticamente con grandes capas de población —muy en especial en los sectores populares— ante una cuestión que suele ser ignorada o minimizada por aquellos sectores políticos que no aceptan el discurso punitivo.

La llegada del narcotráfico y la transformación de las redes sociales en los territorios populares

Estos cambios en las lógicas de la criminalidad común vienen acompañados de un crecimiento, también lento pero igualmente persistente, de la influencia del narcotráfico en determinados territorios, siendo más notorio en las ciudades de Rosario, Córdoba o el conurbano bonaerense pero que va construyendo corredores que atraviesan numerosas ciudades y pueblos, como por ejemplo en todo el eje Córdoba–Santa Fe, que conecta el ingreso de sustancias ilegales desde el norte del país con su salida por los puertos del litoral.

Al igual que con los modos de concepción de la “criminalidad común”, aquí se dan cita cuestiones distintas que se suelen superponer, o donde una termina anulando a la otra.

De una parte, resulta innegable distinguir el papel de la “lucha contra las drogas” en tanto estrategia del Departamento de Estado para remilitarizar la región. (69) Sin embargo, el hecho de que se utilice como estrategia de reconfiguración del aparato represivo, y que las propias agencias criminales tengan vinculaciones con los propios organismos de control o las agencias norteamericanas, incluso los distintos, complejos y entreverados vínculos con grupos de narcocriminalidad de otros países con mayor envergadura —como

Colombia, México o ahora Venezuela, o América Central —, no puede llevar a ignorar las profundas transformaciones generadas por la llegada al país de estas nuevas organizaciones y sus efectos en las relaciones sociales.

Entre sus consecuencias fundamentales, cabe tomar en cuenta:

1) Las transformaciones en la organización territorial, a partir del surgimiento de estructuras con capacidad de disputar al Estado el monopolio de la violencia en determinados lugares, sea a través de su articulación con las fuerzas de seguridad o con el poder político local, o por la creación de redes de relaciones que en primera instancia atacan a las formas de organización existentes en cada territorio para permitir la emergencia de nuevos sistemas de status, poder, administración de recursos y tomas de decisiones.

2) La vinculación de la criminalidad común con la adicción al consumo de distintos tipos de drogas, tanto en los barrios populares como en el interior de las instituciones penitenciarias y la consiguiente transformación de las relaciones sociales en dichos ámbitos.

3) La creciente diversificación criminal a la que da lugar la estructura necesaria para el control y distribución del tráfico de drogas, que luego se expande a otro conjunto de delitos, en muchos casos en connivencia con las fuerzas de seguridad, como secuestros extorsivos, trata de personas, tráfico de órganos, robo de gasolina y minerales, robo y tráfico de automotores, entre otras actividades. (70)

La investigación y el análisis de estas transformaciones es muy incipiente y no se la suele tomar en cuenta a la hora del análisis político. En muchos lugares del país, el ataque a las distintas organizaciones del campo popular —descripto en el capítulo 2— ya no solo proviene del aparato estatal sino, en muchos casos, de estas propias redes de criminalidad, que necesitan desarticular espacios como las bibliotecas populares, los comedores, las

organizaciones piqueteras u organizaciones de lucha como la Garganta Poderosa o la CTEP, entre otras. Estos ataques buscan facilitar la reestructuración de relaciones sociales en su territorio, con base en un ordenamiento que tenga como eje las actividades vinculadas al narcotráfico, que reclutan a su población en muchos casos en los mismos sectores que las otras fuerzas pero que proponen modos verticales y violentos de organización, a la vez que ofrecen una alternativa laboral a poblaciones que se encuentran postergadas hace décadas o expulsadas del mercado formal e informal de trabajo en las sucesivas crisis económico-políticas.

Por otra parte, la rápida difusión del paco en los sectores más empobrecidos de los cordones industriales genera modalidades de dependencia y sistemas de necesidades que no eran parte de las problemáticas de cada barrio y que tienen su correlato en modalidades más frecuentes y más violentas de criminalidad como estrategia para afrontar las necesidades que impone el consumo, muy superiores y mucho más urgentes que la propia alimentación, vivienda o salud. (71) A su vez, la presencia de cuadros orgánicos de los distintos estratos del negocio del narcotráfico en las cárceles y la generalización del consumo de drogas en las mismas también altera las lógicas de relación social, de status y de poder dentro de los espacios penitenciarios, como ilustran algunos trabajos contemporáneos sobre el tema. (72)

El discurso fascista se articula bien con estos problemas, por más que sea de un modo falso y engañoso. Explicitar la problemática —tanto del aumento de la criminalidad como del rol del narcotráfico— le permite legitimar el crecimiento y consolidación de una estructura punitiva en las fuerzas de seguridad que se utilizará para combatir la protesta social, las huelgas, las movilizaciones populares y, más en general, toda organización del campo popular, pero que encuentra su legitimación en la necesidad de enfrentar lo que se caracteriza como “nuevas amenazas”.

En la denuncia de la inexistencia de tales “amenazas” anidan varios problemas simultáneos: la denegación de problemas efectivamente

existentes y percibidos como graves por los sectores populares, la ya mentada indistinción creciente entre las lógicas de la criminalidad y las de la protesta (que incluso comienza a permear a los sectores más reaccionarios de la opinión pública, que estigmatizan ambas conductas de modo equivalente) y la asunción de un supuesto "populismo penal" o "demagogia punitiva" que, en verdad, podría también comprenderse como una reacción desesperada ante transformaciones que solo el discurso represivo o fascista parece registrar.

La creación de estas "nuevas amenazas" para rearticular una estructura represiva regional con eje en el Departamento de Estado de los Estados Unidos a partir del fin de la Guerra Fría es, sin dudas, una tendencia central de la política internacional contemporánea. Sin embargo, la oposición a ella no puede hacerse desde la denegación y ceguera ante la efectiva transformación de las lógicas de la criminalidad sino intentando distinguir los elementos objetivos de la transformación —los cambios en las lógicas de la criminalidad y el rol del narcotráfico en la región, por ejemplo— de las amenazas inexistentes que se articulan en el discurso hegemónico —como en el caso de la cuestión del "terrorismo", que también integra el discurso acerca de estas "nuevas amenazas" aun cuando no existe como tal en la región y no es planteada como táctica por ninguna organización en todo el subcontinente.

Asimismo sería relevante poder poner en cuestión el tipo de respuestas planteadas ante estas "nuevas amenazas", proponiendo modos de intervención no represivos que puedan asumir la presencia de determinadas transformaciones a nivel objetivo como condición de posibilidad de modos de abordaje que no centren la respuesta únicamente en la magnitud punitiva.

La construcción normativa, las funciones de la autoridad y algunos problemas en las nuevas

concepciones de lo social

Es claro que, pese a la necesidad de señalar estas cuestiones, no nos encontramos aún con la posibilidad de plantear salidas alternativas en este plano específico, que deberán ser construidas colectivamente a partir de la asunción de las transformaciones de las relaciones sociales en el presente y la necesidad de confrontar con las propuestas punitivas. Con organizaciones que puedan comprender y asumir el dinamismo de lo social y con una universidad pública crítica e investigadores dispuestos a ser parte del campo popular y a comprometerse con sus problemáticas. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que la escasa atención al tema y la respuesta denegatoria —esto es, un modo de discurso político que se basa en actuar como si los cambios no existieran— juega un importante papel en el crecimiento de las salidas fascistas, en tanto resultan las únicas que conectan con una percepción subjetiva de transformaciones que no son inventadas ni producto de ninguna ofensiva mediática sino que expresan cambios efectivos de las relaciones sociales.

Apenas con la intención de sumar mayor profundidad, vale la pena centrarse en una cuestión apenas esbozada previamente, que aparece como problemática en el contexto discursivo actual y en la disputa frente al régimen patriarcal: las transformaciones en los modos de concepción del rol de la norma y de las distintas funciones de la autoridad. Muchas confusiones a propósito de estos temas pueden tener también su papel en las crecientes dificultades para lograr avances en la disputa contra estas reemergencias del fascismo por la conquista del sentido común.

Trabajos hoy ya clásicos como los de Jean Piaget y Lev Vigotsky para la psicología, o Norbert Elias (73) en miradas más sociohistóricas, se han encargado de distinguir la complejidad y riqueza en el proceso de surgimiento de normas dentro de toda

comunidad y su doble carácter, en tanto articuladoras de posibles procesos de solidaridad y expresión de sistemas de dominación.

Piaget distingue entre los modos heterónomos y autónomos de construcción de la norma (esto es, aquellas que surgen de una imposición externa frente a las que se construyen por medio del consenso entre pares) y el complejo y rico proceso que se va dando en la evolución humana entre un nacimiento y una infancia que se desarrollan en contextos de necesaria y profunda heteronomía, y la gradual conquista de niveles de autonomía, que surgen de la reciprocidad entre pares, entre sujetos y grupos que se piensan a sí mismos como parte de una comunidad, como miembros de un espacio compartido que requiere establecer e ir transformando las normas necesarias para la vida social. Vigotsky ha insistido en la utilidad de la creación externa de normas por parte de la autoridad en determinados contextos (por ejemplo, en la infancia y adolescencia en relación con el rol de padres, madres, o en el espacio escolar con respecto al rol del maestro) como modos de establecer patrones de conducta, aun cuando sea para poder desafiarlos más adelante. Y esto se conecta con lo que se ha señalado en capítulos previos con respecto al ataque del fascismo a estas figuras de socialización secundaria como el maestro de educación inicial o primaria.

En este sentido, si bien el núcleo familiar —como primer espacio de socialización— y las institucionalizaciones posteriores como los distintos cultos religiosos, la escuela o incluso la justicia constituyen el basamento de los órdenes jerárquicos, no es posible olvidar que cualquier confrontación posterior con los mismos requiere su existencia como posibilidad de configuración objetiva y subjetiva de una comunidad de pares a partir de la internalización de representaciones del mundo y de conjuntos de reglas que guían la acción en función de garantizar formas de cooperación.

Norbert Elias desarrolla en El proceso de la civilización cómo estos patrones han atravesado la historia de la especie —con mucho detalle dedicado a su desarrollo durante la modernidad—,

generando modos de contención de la violencia y organizando esquemas de relaciones sociales que han tenido la capacidad de construir mediaciones cada vez más complejas en sistemas de modales, modos de comportamiento aceptados o prohibidos, modulaciones del conflicto, simbolizaciones. Estos desarrollos, a la vez que se han articulado con los sistemas de poder hegemónicos, también han permitido formas más avanzadas de cooperación entre grandes grupos humanos. En este sentido, el Iluminismo jugó un rol relevante al estructurar estos sistemas normativos con la concepción de la igualdad natural de los seres humanos y, por lo tanto, su carácter de pares en un sentido universalista, algo que hoy se encuentra muy devaluado tanto en la acción política como en el campo intelectual, con las modas de los corporativismos, las microhistorias o las poscolonialidades. También el psicoanálisis tuvo siempre muy claro el rol productivo y progresista de la construcción de normas, muy en particular en el conjunto de la obra de Sigmund Freud.

La reacción antiiluminista del siglo XX —tanto aquella articulada con los fascismos como muchos intentos de respuesta a los estragos causados por los mismos— ha tendido a construir visiones de lo social que, cada vez más, observan la norma y la autoridad tan solo como modalidades de imposición del poder hegemónico y van olvidando, minimizando y hasta incluso combatiendo su rol en la construcción de lazos sociales y en la posibilidad de existencia de una comunidad de pares.

Sea porque se busca recuperar un ejercicio autocrático y estamental del poder (en el caso de la reemergencia conservadora o fascista) o porque se propone confrontar con las normas modernas en un sentido contestatario o radicalizado, el carácter civilizatorio y la conquista de derechos que surgieron y se consolidaron en determinados sistemas normativos en muchos casos occidentales (las constituciones republicanas, los sistemas de derechos, incluso las normativas internacionales, regionales o nacionales en clave de “derechos humanos”) van tendiendo a ser explícitamente desechados en modos de simplificación alarmantes que se

proponen no solo radicalizar y transformar posiciones —algo siempre necesario— sino en muchos casos tirar por la borda la construcción histórica realizada durante los últimos siglos en el hemisferio occidental por ser parte de una herencia eurocéntrica que puede ser concebida en su calificación (y descalificación) de "colonial". La riqueza del primer pensamiento de autores como Aníbal Quijano o Enrique Dussel, que estructuraban la crítica a la colonialidad del poder desde la propia herencia contestataria moderna —desde el marxismo hasta la filosofía levinasiana—, tiende a ser vulgarizada cada vez más en denuncias reiterativas de cualquier postura moderna o escrita por autores occidentales como parte constituyente de una "colonialidad" que pareciera que solo puede (¡y debe!) ser denunciada y combatida.

De este modo, se comienza a asumir en ciertos núcleos progresistas una condena a ultranza de toda producción occidental y la simultánea legitimidad incuestionada de cualquier construcción que se asuma o se postule como "poscolonial", "decolonial" u "originaria", basada en una especie de benignidad intrínseca de cualquier forma subordinada o surgida "en los márgenes", tan solo por el hecho de haber sido derrotada u oprimida por algún sistema colonial en algún momento de la historia de los últimos siglos. Como si la dominación, el maltrato, el abuso, la explotación no hubiesen existido en los pueblos americanos, africanos, de Oceanía, en diferentes culturas y grupos humanos a lo largo del tiempo y del espacio o no pueda seguir existiendo incluso hoy en territorios colonizados, y no solo en los producidos por el colonizador. Y asumiendo a su vez una verdad totalmente contrafáctica: que el sufrimiento, de por sí, nos haría mejores.

Estas tendencias —tanto la reacción conservadora como la crítica poscolonial— van tendiendo a una concepción cada vez más esencialista de las identidades que, a la vez, fractura la universalidad de la posibilidad de reciprocidad, promoviendo solo vinculaciones corporativas basadas en supuestos lazos originarios con la tierra o la sangre.

Las “nuevas derechas” estructuran el sentido y su propia identidad también en esta clave, denunciando la discriminación a los “habitantes originarios” de los territorios occidentales (en modalidades como la denuncia de un “genocidio contra los blancos” (74) en el mundo contemporáneo) y buscando constituir dichos grupos —sean los WASP (White Anglo Saxon Protestants) en EE. UU., los blancos cristianos en Europa, los bóers en Sudáfrica, u otros grupos dominantes o colonizadores en otros lugares del planeta— como los “nuevos discriminados” del siglo XXI, que debieran reclamar sus derechos en esta lógica vinculada con “la sangre y la tierra”, con la “antigüedad” en el territorio, planteada del mismo modo por algunos de los nacionalismos poscoloniales latinoamericanos o africanos con respecto de los propios grupos colonizados.

En su articulación reaccionaria, estos planteos se estructuran con nuevas modalidades racistas en clave islamofóbica, antiindígena o antiafricana. De este modo, la disputa aparece binarizada entre modos esenciales de identidad, cada uno de los cuales plantea la defensa a ultranza de sus tradiciones y modalidades y la imposibilidad e incompatibilidad de las mismas con las de otros pueblos. Esto se da en un contexto de movilidad de poblaciones que no puede sino generar entrecruzamientos que no se saldan en tanto hibridaciones o convivencias, ya que implicarían la “contaminación” con otras lógicas y la pérdida de las propias tradiciones, sean estas sajonas, cristianas, árabes, mapuches, hindúes o zulúes. El basamento para el conflicto racista queda entonces abierto y desde los discursos con mayor capacidad de difusión no se hace más que profundizar las diferencias, sea en una clave o en la contraria.

Este resurgimiento del racismo, hegemónico o contrahegemónico, comienza a instalar una lectura de lo social que prescinde cada vez más de la clave internacionalista moderna de una comunidad común cuyas diferencias pasaban por la ubicación frente a los medios de producción (sea en las distintas estrategias reformistas de la conciliación como en el modelo marxista de la lucha de clases) para reconfigurar la comprensión del mundo en base a modos

esencialistas de construcción de identidades con base en imaginerías como lo “occidental”, lo “árabe”, lo “indígena” o lo “africano”. Modalidades estereotipadas de asunción de una legitimidad indiscutida por parte de cada uno de los grupos, que se conciben a sí mismos como posibles víctimas en el contacto con culturas otras (en un caso por “coloniales” u “opresoras” en sí mismas, en el otro por “inferiores” o “degeneradas” o por “inasimilables”), que tiende a quebrar la potencia del enriquecimiento mutuo y a cosificar identidades que en ningún territorio existían previamente como tales (esto es, puras e incontaminadas), sino que a su vez han sido producto de innumerables contactos, hibridaciones y mestizajes.

El internacionalismo moderno se basaba en que el obrero francés, inglés, alemán, pero también argentino, mexicano o sudafricano, tenían intereses en común más allá de su color de piel, su idioma, su religión o su cultura. Dicho universalismo también se basaba en la posibilidad de garantizar al conjunto de la población ciertas “seguridades” mínimas como la vivienda, la salud, la educación o el alimento, bases de la estructura de contención del Estado benefactor y de la asunción de todos los habitantes de un mismo territorio como “ciudadanos” igualados en sus derechos. La confrontación se basaba en un posicionamiento —dinámico y no esencial— con respecto a las fuerzas productivas y la ubicación objetiva en este conjunto de relaciones de opresión. Ello no quiere decir que la situación no haya cambiado en este siglo XXI, que las disputas alrededor de los modos de construir el género, las identidades sexuales o los problemas ecológicos, entre muchos otros, no deban jugar un rol en la reformulación de nuestros modos de construcción de identidades y en las disputas por la hegemonía.

Sin embargo, esta deriva poscolonial radicalizada entiende a todo europeo o habitante del hemisferio norte o a todo hombre heterosexual como penetrado por la estructura colonialista y patriarcal (y, por tanto, como un enemigo o un ser a “convertir” a los nuevos principios) en tanto asume las formas organizativas de toda comunidad originaria (en especial americana, africana o de

Oceanía) como superiores en sí mismas, más allá de los modos de estructuración diversos de sus núcleos familiares, de sus posicionamientos ante la estructura productiva y de la incompatibilidad con los funcionamientos normativos, sociales y de la estructura productiva de la mayoría de los territorios en los que se encuentran viviendo, que tienen formas capitalistas y no parece que sean desafiados estructuralmente por ninguno de estos planteos. De este modo, el nuevo fascismo y el discurso poscolonial aparecen como dos caras de una misma comprensión de la realidad humana. Y, pese a batallar uno contra el otro, ratifican un modo de comprensión de las identidades.

La reemergencia de distintos modos de racismo en los inicios de este siglo XXI puede leerse quizás en esta clave, con la deslegitimación de los conceptos en boga para la comprensión del mundo en el siglo XX (clase social, revolución, izquierda, derecha) y su reemplazo por nuevas fórmulas de construcción de la identidad, basadas en elementos esencialistas como “características tradicionales” de los pueblos.

Luigi Zoja ha rastreado algunas de estas consecuencias en las mutaciones de las formas de organización social, en su caso con el análisis de los profundos cambios en la estructura del núcleo familiar a partir de la transformación de la concepción de la figura del padre desde la propia Revolución Industrial y de los modos por los cuales la emergencia de dicho rol paterno resulta central para comprender las limitaciones en los modos de ejercicio de la violencia intraespecie. (75)

Zoja llama la atención sobre el abandono y desjerarquización de la función paterna, que habría surgido como una forma de compromiso en el cuidado de las crías de la especie y de la pareja y que supuso una novedad en el proceso de la evolución, que requirió contener la violencia masculina y que dio lugar a la creación del “núcleo familiar”, a la sedentarización del hombre y a la monogamia. Este olvido, abandono o desjerarquización de la función paterna ha tendido a reactivar formas de violencia masculina individual o en

banda que prescinden de estas construcciones normativas que llevaron milenios y se imponen por el mero ejercicio de una agresión directa más descarnada.

Los análisis que releva Zoja de la criminología contemporánea en cuanto a las transformaciones de la estructura familiar de aquellas poblaciones que integran las redes de criminalidad, o la mano de obra de los grupos de narcotráfico o de las “pandillas” o maras resultan cuanto menos elementos que deben tomarse en cuenta en cualquier análisis serio de estas transformaciones sociales, por mucho que puedan poner en cuestión ciertas posiciones políticamente correctas del progresismo actual en relación con la crítica de los núcleos familiares clásicos, en tanto unidad emblemática del poder colonial y en la postulación de la falta de relevancia de estos roles (paterno o materno) en el proceso de socialización primaria, postulación que se hace desde un apriorismo que no busca chequear histórica, sociológica ni psicológicamente sus afirmaciones.

Paradójicamente, las fratrías de varones que han transformado los modos de ejercicio de la violencia contra las mujeres y contra otros varones en estas últimas décadas, y que tan bien analizan trabajos como los de Rita Segato (76), no se han gestado en las familias nucleares clásicas de la modernidad colonialista o victoriana (esto es, en el modelo patriarcal clásico) sino, cuanto menos tomando en cuenta los recientes trabajos etnográficos sobre el origen y la historia familiar de los miembros de dichos grupos, como consecuencia de la destrucción de estos núcleos familiares clásicos, destrucción que fue por lo general un resultado de las transformaciones económicas y políticas de la revolución industrial, y más tarde del neoliberalismo.

Estas transformaciones han tendido a generalizar estructuras de familia que se basan en la inexistencia de figuras paternas (por el asesinato del padre o, mucho más común, por el abandono del hogar y la tremenda dificultad de las madres para asumir ambos roles, en contextos de carencias económicas y culturales). A su vez,

esta ausencia paterna se articula con la destrucción simultánea de las normas comunitarias y/o de las familias ampliadas que podrían haber reemplazado la figura paterna como de la simultánea ausencia o desvanecimiento de una normativa estatal o la desjerarquización de formas de socialización secundaria como la escuela, en territorios atravesados por las redes de una nueva criminalidad (muy vinculada al narcotráfico pero también presente en otros negocios ilegales) que buscan, entrenan y contratan a estas nuevas figuras masculinas (“machos” en el sentido más primitivo del término). Este nuevo hombre “macho” (ya no padre) se estructura precisamente desde la renegación de un posible rol paterno, el quiebre de responsabilidad ante un núcleo familiar y la no asunción de una obligación con respecto a sus descendientes, a los que se abandona sin siquiera tomar conciencia de su existencia. Así, se asumen como miembros de fratrías que reivindican la recuperación del ejercicio de una violencia directa basada en el “aguante”, la superioridad física y la naturalización de la relación con la muerte, tanto la propia como la de los otros, quebrando milenios de construcción de una creciente afectivización del hombre en tanto padre y en tanto facilitador de la inserción de sus crías en el mundo social.

Todas estas cuestiones resultan especialmente urticantes para un pensamiento progresista políticamente correcto que tiende a asumir un conjunto de “verdades” (el mal intrínseco de cualquier construcción occidental moderna, el carácter intrínsecamente contestatario de cualquier forma de organización de los grupos históricamente oprimidos, la estigmatización de los núcleos familiares clásicos o de la función paterna y su vinculación con la construcción de autoridad) que se imponen sin reflexión, esto es, que su asunción deriva de su “superioridad moral” previa y del apriorismo, sin proponerse chequear el carácter objetivo de estas asunciones, la historia de análisis de sus funciones psíquicas o sus consecuencias en las relaciones sociales.

Cualquier teoría política radical de la modernidad (todas articuladas de algún modo con la hegemonía del pensamiento marxista) tenía

entre sus presupuestos que las redes sociales de poder y opresión atraviesan tanto a los opresores como a los oprimidos y que, por tanto, no se deriva de la pertenencia a ningún colectivo preexistente la mayor o menor potencia de las formas de organización sino del análisis crítico de las mismas en relación con sus vinculaciones con las fuerzas productivas y los modos de producción. No es posible, obviamente, creer que los cambios ocurridos en el último siglo no requieran actualizar estas miradas marxistas para incluir nuevas contradicciones y problemas, sin duda alguna los cambios producidos en el ambiente o la posible confrontación con las injusticias de un orden patriarcal.

Pero, sin embargo, el reemplazo acrítico de las formas modernas de concepción de la identidad (liberales, socialdemócratas o marxistas) por estas modalidades posmodernas que no se basan en un análisis de sus planteos aprioristas implican un retroceso de cualquier posibilidad revolucionaria o de cualquier cambio verdaderamente radical de la estructura productiva y juegan un rol fundamental en su articulación y coincidencia de diagnóstico con modalidades neoconservadoras o neofascistas de construcción de la identidad, como se puede observar en la participación política en estos nuevos movimientos, no solo de los sectores de mayor edad sino de contingentes muy importantes de jóvenes varones blancos que encuentran en este nuevo fascismo la única respuesta ante una identidad que no encuentra modelos con los que construirse o reconstruirse. Arrinconados y estigmatizados, atacados por portar características de las que no pueden ni quieren renegar (el ser hombres heterosexuales, el ser blancos, el ser occidentales), la opción por el fascismo se les aparece en muchos casos como la única salida política viable que no los lleve a la renegación y que les permita asumir un modelo posible de identidad, bien que sumamente peligroso para la continuidad de cualquier lazo de cooperación entre pares.

En estas transformaciones de tipo objetivo y subjetivo radican gran parte de los fundamentos más profundos de la reemergencia de prácticas sociales fascistas en el contexto internacional, regional y

nacional contemporáneo, más allá de su variable nivel de profundidad o de las formas que pueda asumir en cada caso. Animarse a realizar preguntas políticamente incorrectas, obligarse a chequear las visiones apriorísticas con estudios en profundidad (económicos, sociológicos, etnográficos) pero, sobre todo, recuperar las experiencias de lucha antifascista, resulta hoy una necesidad fundamental para cualquier construcción política contrahegemónica. Ello constituye el eje central de las conclusiones del presente trabajo.

▪

56- Esta última cuestión, la de la creación de contingentes de población “sobrante” para el sistema productivo, fue tratada muy tempranamente en obras como las de Zygmunt Bauman, Trabajo, consumismo y nuevos pobres, Barcelona: Gedisa, 1999.

57- Ubicar estos cambios a fines de los años ’80, además de que resulta el momento en que lo constatan los diferentes registros, se vincula con la comprensión de las transformaciones de fondo en las relaciones sociales impuestas por el genocidio en la Argentina de los ’70 y, vinculado a ellas, las transformaciones económicas y sociopolíticas generadas a partir de la crisis del gobierno de Raúl Alfonsín, la hiperinflación de 1988 y 1989, las rebeliones carapintadas y la profundización y rigidización de una fracción muy significativa de la población (millones de habitantes de los grandes conurbanos) que quedan definitivamente excluidos no solo del mercado formal de trabajo sino de cualquier inclusión posterior en el mismo, así como de los bienes básicos necesarios para la reproducción. Estas fracciones serán el espacio de crecimiento y reclutamiento tanto de la “criminalidad común” como del narcotráfico, pero también darán lugar al surgimiento de las organizaciones de desocupados, piqueteros e infinidad de grupos políticos territoriales. Cada vez con más fuerza, también se

articularán con políticas asistencialistas y clientelares que, aunque preexistentes, cobran otras formas y envergadura a partir de este momento.

58- Quizás sea redundante aclarar, pero necesito hacerlo, que solo se reproduce en este párrafo la lógica que se construye como parte del sentido común en relación con la evaluación del uso de la violencia letal de las fuerzas de seguridad, caracterización que no comparto en modo alguno, más allá de que afecte tanto a quienes efectivamente llevaron a cabo acciones criminales como a los que son conceptualizados como “inocentes” por haber sido confundidos con los “supuestos delincuentes”. La vida siempre debe ser prioritaria por sobre la propiedad. La alteración del carácter prominente de la vida como bien a resguardar, que comienza a aparecer cada vez más en el imaginario neoliberal, implicaría el quiebre de construcciones de las distintas culturas humanas a lo largo de milenios en donde solo el honor había logrado en algunos casos erigirse como bien supremo por sobre la vida, lo cual ahora comienza a ser aplicado para la propiedad privada, que en los discursos más punitivistas pareciera transformarse en el nuevo bien supremo a resguardar, a costa de cualquier otro bien, como la vida o la integridad.

59- Existe un fuerte debate acerca de la efectiva autonomización de las fuerzas de seguridad que vale la pena consultar, por ejemplo, en Nicolás Dallorso, “La compleja relación entre el poder político y las fuerzas de seguridad: desafíos para el análisis de la emergencia del plan Unidad Cinturón Sur de la Ciudad de Buenos Aires” en Hologramática, UNLZ, Año VII, número 17, V2, 2012, páginas 97-121. Cabría repensar esta discusión a partir de las políticas desplegadas por el Ministerio de Seguridad en la gestión de Patricia Bullrich, que dan un nuevo giro al debate.

60- Si bien se han desarrollado en la nota 2 algunos ejes de las transformaciones ocurridas durante la década del ’80 en varios de los temas tratados en este capítulo, en el ciclo específico de “autonomización y represión–asesinato de ‘inocentes’–condena social” podría tomarse como caso emblemático la masacre ocurrida en la localidad de Ingeniero Budge, en mayo de 1987, en la cual el asesinato de tres jóvenes del barrio por parte de agentes de la Policía Bonaerense desató una de las primeras movilizaciones masivas en relación con estos temas y logró la condena de los responsables policiales.

61- Si bien repetida numerosas veces durante los primeros años del kirchnerismo, la frase “la inseguridad es una sensación” se hizo famosa por la declaración de Aníbal Fernández en ese sentido, en el año 2008. Pese a haberse arrepentido numerosas veces de la misma, la frase quedó instalada en el imaginario social como una descalificación que, paradójicamente, da cuenta de una mirada bastante común de distintos sectores políticos y académicos: que no existen variaciones importantes en las tasas de inseguridad y que solo se trataría de una cuestión subjetiva, instigada por los medios de comunicación o distintos sectores políticos. De hecho, la distinción entre niveles objetivos y subjetivos de existencia de cualquier fenómeno social —y la inseguridad lo es— resulta totalmente legítima y, de hecho, existen numerosos trabajos que distinguen ambos niveles y los analizan en profundidad, como los de Gabriel Kessler o Alejandra Otamendi, entre muchos otros. Véase, a modo de ejemplo, Gabriel Kessler, El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito, Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.

62- El concepto de criminología mediática fue desarrollado por Eugenio Raúl Zaffaroni y luego se instaló con mucha facilidad en el campo mediático, académico y político. Uno de sus desarrollos puede encontrarse en Eugenio R. Zaffaroni, Estado y seguridad

pública. Algunas consideraciones básicas, Cuadernos de Seguridad, número 14, Buenos Aires: Ministerio de Seguridad, 2011

63- Véase, a modo de ejemplo, Alejandra Otamendi, "¿Demandas de seguridad o demandas de 'mano dura'? El 'consenso punitivo' en cuestión en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 2000-2010" en Hologramática, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Año XI, número 21, VII, páginas 155-174.

64- Estos modos de análisis del "populismo penal" pueden encontrarse muy bien desarrollados en Máximo Sozzo (comp.), Postneoliberalismo y criminalidad en América del Sur, Buenos Aires: CLACSO, 2016.

65- Véase Gabriel Kessler y Matías Bruno, "Inseguridad y vulnerabilidad al delito" en Juan Ignacio Piovani y Agustín Salvia (coords.), La Argentina en el siglo XXI. Cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual, Buenos Aires: Siglo XXI, 2018.

66- ENES es la sigla de Encuesta Nacional sobre la Estructura Social realizada por PISAC, Programa Nacional de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, dirigido por Juan Ignacio Piovani, programa dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en articulación con el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC) y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

67- Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Pekín: Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1978, página 75.

68- PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano, 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina, Nueva York: PNUD, 2013.

69- Puede consultarse un enriquecedor y bien contemporáneo análisis al respecto en Juan Gabriel Tokatlian, Marcelo Fabián Saín y Germán Montenegro, De militares a policías. La “guerra contra las drogas” y la militarización de Argentina, Buenos Aires: Capital Intelectual, 2018.

70- Uno de los trabajos más sistemáticos y enriquecedores sobre el tema, que analiza entre otras cuestiones estas formas de “diversificación criminal”, es el de Marcelo Bergman, Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, Buenos Aires: FCE, 2016.

71- Esto ha sido detectado por distintos grupos que trabajan con la población afectada por el consumo de paco, como es el caso de la Federación de Centros Barriales del Hogar de Cristo, entre otras organizaciones dedicadas a la cuestión, pero por lo general son poco escuchadas y la problemática no ha sido asumida como relevante ni por las agencias estatales ni por los espacios de militancia política contestataria o los organismos de derechos humanos.

72- En un ámbito que requiere mucho más trabajo, resulta especialmente agudo el análisis de Mario Arnoldo Alanis en su tesis de doctorado “Cárcel y sociedad en Catamarca. Relaciones sociales e intercambios dentro y fuera de una prisión”, tesis de doctorado en Ciencias Sociales, UBA, entregada personalmente por el autor, en la que a través de un trabajo etnográfico realizado en la cárcel de Catamarca registra estas transformaciones a lo largo de las últimas dos décadas.

73- Para Piaget véase, entre muchos otros, El criterio moral en el niño, Barcelona: Martínez Roca, 1984. Para Vigotsky, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Buenos Aires: Crítica, 2009. Para Elias, su clásico El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México: Fondo de Cultura Económica, 1989.

74- Véase, para un análisis de esta nueva discursividad de la derecha en tanto defensa identitaria de la occidentalidad, la documentada crítica y análisis de Dirk Moses en “White Genocide and the Ethics of Public Analysis” en Journal of Genocide Research, 2019, vol. 21, número 2, páginas 201-213.

75- Véase Luigi Zoja, El gesto de Héctor. Prehistoria, historia y actualidad de la figura del padre, Barcelona: Taurus, Penguin Random House, 2018.

76- Véase, entre otros, Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, Buenos Aires: Prometeo y Universidad Nacional

de Quilmes, 2003 y, muy en especial, La guerra contra las mujeres, Madrid: Traficantes de sueños, 2016.

Capítulo 5

Enfrentándose al huevo de la serpiente

Se ha desarrollado a lo largo del libro que si se observa el fascismo en tanto estructura política corporativa o emergencia de un partido único, la realidad argentina contemporánea no parece dirigirse hacia dicho destino y que no tendría potencia ni interés la utilización del término. También que, si el eje de la comprensión del fascismo pasa por su estructura ideológica, hay elementos que han comenzado a reemerger de modos significativos, como lógicas nacionales que se articulan con procesos regionales e internacionales, y que podríamos calificar tanto como “nuevas derechas” o “neofascismo”, para distinguir aquello en común y sus diferencias.

Pero lo más importante del planteo desarrollado en las páginas previas es intentar iluminar el sentido del fascismo en tanto práctica social, esto es, la posibilidad de movilización activa de grandes colectivos y su participación —también activa— en la estigmatización, hostigamiento y persecución de grupos de la población (identificados a partir de su origen nacional, su diversidad étnica, lingüística, cultural, socioeconómica, política, religiosa, de género o identidad sexual, etc.) como modo de proyectar frustraciones presentes. Es esto a lo que hemos llamado, aprovechando el mito argentino, la “construcción del enano fascista”, y lo que resulta más potente y más contemporáneo, a mi juicio, para pensar los riesgos de la situación política presente en nuestro país. Aun cuando no exista un riesgo de salida corporativa ni de creación de un partido único o de amenaza a cierta institucionalidad republicana, aun cuando los imaginarios y construcciones ideológicas tengan puntos en común y diferencias con los utilizados en el siglo XX en Europa, las lógicas profundas y estructurales del fascismo en tanto práctica social se comienzan a dar cita como una posibilidad cierta en América Latina y en Argentina.

El fascismo como modalidad específica de ataque a las organizaciones populares, el papel del racismo y una estrategia de movilización activa diferenciada de la paralización dictatorial son prácticas que van cobrando fuerza y ganando capas importantes de la población como figuras de la estructura política, sea de los viejos partidos como el peronismo (Miguel Ángel Pichetto, Sergio Berni,

Guillermo Moreno, incluso parte de las fuerzas que colaboran con Sergio Massa), el radicalismo (Mario Negri, Oscar Aguad, Gerardo Morales), partidos nuevos como el PRO (con viejas figuras de la política como Patricia Bullrich, pero también nuevas apariciones como Esteban Bullrich, Alfredo Olmedo o María Eugenia Vidal) o en incorporaciones políticas provenientes de una nueva derecha tanto nacionalista como ultraliberal, como en los casos de los partidos encabezados por Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert, o en la legitimación política de Alberto Asseff dentro de las filas de la alianza Juntos por el Cambio, el nuevo nombre del macrismo.

Esto es, que no se trata meramente de la emergencia de algún partido (aunque comiencen a emerger algunos más propiamente vinculados a iniciativas fascistas, como el nuevo partido NOS de Gómez Centurión y Hotton) sino de un atravesamiento bastante general de la estructura política, todavía en disputa pero asomando con mayor o menor fuerza en todo el espinel, muy especialmente notorio en los giros producidos en las alianzas del macrismo a partir de la conformación de fórmulas, listas y consignas para las elecciones de 2019.

Asimismo, se han identificado un conjunto de prácticas fascistas que comienzan a cobrar fuerza en la realidad argentina contemporánea: campañas de delación, campañas de oposición a las “políticas de género”, ataques de distinta envergadura a los movimientos populares, instigación a las microviolencias, limitaciones al ejercicio del periodismo, concentración mediática, hostigamiento y persecución a la oposición política, persecución y hostigamiento a distintos colectivos (migrantes, desocupados, indigentes, entre otros), emergencia de prácticas antisemitas.

Se ha planteado también el crecimiento de cierta capilaridad fascista, con fuertes construcciones en la transformación del espacio periodístico, el crecimiento de la agresión, el insulto y el llamado a rebeliones reaccionarias y la legitimación de estos planteos por parte de distintas figuras del arco político.

Y también se han analizado las transformaciones en los modos de construcción de las identidades y las relaciones sociales en este siglo XXI, y cómo estos cambios podrían tener numerosos puntos de intersección con un nuevo fascismo que, sin embargo y pese a sus diferencias, podría jugar un rol equiparable al que desarrolló en las experiencias europeas de mediados del siglo XX.

Si tiene algún sentido observar los puntos en común entre estas lógicas políticas y aquellas que dieron origen a las experiencias fascistas europeas es para pensar tanto en sus consecuencias como en los modos de confrontar con ellas. Para poder recordar y tomar en cuenta que el fascismo constituye un modo de “realización de la victoria” de los sectores dominantes, cuyo objetivo es el de barrer por un par de generaciones la capacidad organizativa de los sectores populares y facilitar una profundización en la distribución regresiva de la riqueza y de la dominación descarnada de los sectores de poder. Y que no opera confrontando el capital transnacional y globalizado sino absolutamente articulado con él, tanto en sus experiencias pasadas como, con mucha mayor claridad, en esta reemergencia presente.

Con muchas idas y vueltas y con bastantes dificultades para observar las características y consecuencias de los fascismos del siglo XX, el campo popular comprendió en aquel momento la necesidad de articular experiencias políticas distintas en lo que se dieron en llamar en su momento frentes antifascistas, alianza de distintos grupos socialdemócratas, partidos reformistas y todo el arco de los movimientos revolucionarios. Quizás el ejemplo más emocionante de aquella lucha lo constituyó el proyecto internacionalista y plural de los republicanos españoles y sus Brigadas Internacionales (un proyecto que, lamentablemente, no pudo sostener la unidad ante el avance del fascismo, y terminó estragado por los conflictos y persecuciones entre anarquistas, comunistas y socialistas).

Este momento de peligro reclama una nueva unidad antifascista, un nuevo frente que pueda dar cuenta de la variedad política del campo

popular en el siglo XXI, que no necesariamente reúne las mismas identidades que en el siglo XX pero que también integra heterogeneidades y movimientos muy distintos.

Tan necesario como comprender los ejes en los que se asienta el fascismo para poder brindar respuestas desde el campo popular es lograr la articulación de colectivos que se encuentran hoy desperdigados, que se puedan reunir en este acuerdo político (que no implica acuerdo electoral sino algo mucho más profundo que puede convivir con propuestas electorales diferentes) los más diversos populismos y reformismos, todo el amplio campo de las izquierdas, pero también los nuevos movimientos, desde el feminismo de las mareas verdes argentinas al ecologismo de las luchas ambientalistas frente a las mineras o el pool sojero, desde el "situacionismo" o el "basismo" asambleario hasta quienes plantean la disputa dentro de la estructura estatal e incluso a través de los partidos políticos históricos, desde los sindicatos hasta los movimientos de desocupados, desde gran parte del arco kirchnerista hasta los remanentes de un radicalismo alfonsinista y democrático. Para frenar una emergencia fascista que se estructura de modo transversal se requiere crear otro tipo de transversalidad, una grieta distinta a la del kirchnerismo-antikirchnerismo que pueda estructurarse como dique de contención de la salida fascista, que le quiebre la posibilidad de disputar el sentido común de nuestras bases, de introducirse insidiosamente en las propias organizaciones del campo popular o en los partidos y movimientos políticos históricos o novedosos, que construya limitaciones a su crecimiento territorial e ideológico, que pueda intentar comprender y hacerse cargo de las transformaciones de las relaciones sociales, pero en un sentido antifascista.

Los organismos de derechos humanos pueden y deben tener un rol central en esta tarea, así como lo tuvieron en otras luchas a partir del fin de la dictadura. Es parte de su propia historia y de su sentido. La lucha contra la impunidad permitió articular infinidad de sectores sociales en aquellos años de consolidación del neoliberalismo, y fueron los pañuelos blancos de las Madres los que sirvieron de guía

para unir, en la segunda mitad de los años ’90, conjuntos amplios con reivindicaciones que articulaban a las víctimas diversas del ajuste. La conformación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en 1996 dio cuenta de una enriquecedora posibilidad de encuentro para trabajadores formales e informales, ocupados y desocupados, estudiantes y profesores, obreros industriales y de servicios, clubes de barrio y grupos artísticos y culturales. Un conjunto amplísimo de organizaciones, que no necesariamente coincidían en la evaluación concreta de cada elemento de la realidad política, que no necesariamente votaban lo mismo en las distintas elecciones, pero que lograron articularse en la lucha para derrotar la impunidad de los genocidas y consiguieron dicho triunfo con la emergencia del nuevo siglo.

Han pasado ya más de veinte años de la conformación de aquel conglomerado, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estalló una década después, en tiempos del kirchnerismo, y se dividió en dos o más fracciones. Haber quebrado la impunidad tuvo como inesperada contrapartida volver a fragmentar los reclamos, los énfasis, los alineamientos. El propio movimiento de derechos humanos quedó atravesado por la “grieta” y las acciones conjuntas se hicieron más y más difíciles. El 24 de marzo quedó como una fecha emblemática y masiva (con dos marchas, pero siempre con el pueblo en las plazas) pero los reclamos tendieron a fracturarse y a hacerse cada vez menos comunes, más allá del fuerte acuerdo para sostener el juicio y castigo a los genocidas, y que reapareció en circunstancias como el intento de aplicación de la “ley del 2 x 1” a los genocidas, o la desaparición de Santiago Maldonado. Un consenso social que ni el propio macrismo logró quebrar en estos cuatro años, por mucho que ya haya salido a la palestra Elisa Carrió en un intento por avanzar en políticas de “reconciliación” e impunidad, una muestra de lo que podría venirse si le permitimos una segunda experiencia de gobierno a un conglomerado político que se ha ido reconfigurando en estos años, escondiendo sus caras más liberales y otorgando más y más espacio a sus fracciones seudofascistas.

Hoy es otra la situación y son otros los desafíos. La lucha contra la impunidad no ha terminado pero ya han pasado 36 años del fin de la dictadura y el macrismo parece en retirada. Nuevas generaciones se han sumado a la lucha política con sus propias reivindicaciones. Nuevos ajustes se han implementado sobre la sociedad argentina. Nuevos quiebres se han generado en las relaciones sociales y no todos ellos son herederos directos del genocidio, aunque en muchos casos solo fueron posibles a partir de él.

Pero hoy emergen también nuevos fantasmas, ya no los dictatoriales, pero no necesariamente son menos peligrosos. Tal como he intentado desarrollar a lo largo de todo el libro, este intento de construcción de un “enano fascista” en cada uno de nosotros va montando ladrillo sobre ladrillo. El odio comienza a ganar sectores importantes de la población. La falta de percepción de los efectos de los nuevos quiebres en las relaciones sociales no hace más que acentuar sus efectos. Muchas de nuestras respuestas se vuelven impotentes. Las organizaciones que luchan en los territorios, en muchos casos no logran ser escuchadas o se encuentran arrasadas por la coyuntura y con dificultades para observar la situación de conjunto. La mayoría de nosotros sigue pensando con la cabeza del siglo XX cuando vamos entrando a la tercera década del siglo XXI.

Es así que el “enano fascista” asoma la cabeza y daría la sensación de que seguimos pensando que es débil, que es marginal, que es incluso risible. Desde la universidad, muchos encuentran su tranquilidad solazándose en ejercicios académicos que demuestran que no se trata de lo mismo que el mundo vivió en el siglo XX y, ello demostrado, pueden continuar con su vida como si nada grave ocurriera. Jamás en las ciencias sociales se trata de lo mismo, pero eso no nos resuelve nada. La historia no se desarrolla nunca dos veces de modos iguales, pero eso no nos quita la obligación ética y política de poder aprovechar el pasado para actuar en el presente.

Si creemos que para conformar un frente antifascista necesitamos constatar que ha llegado una persona de bigotes que alza el brazo y grita en alemán, si necesitamos que cree un partido único que se

identifique con una cruz esvástica, poco habremos entendido acerca de la complejidad de las relaciones sociales y de la variabilidad de sus formas a través del tiempo. Es llamativo que sea un humorista como Diego Capusotto quien pueda tener, a través de la sátira, un registro más profundo de los riesgos argentinos contemporáneos, con personificaciones presentes hace ya bastantes años en la figura de Micky Vainilla, representante de un fascismo “cool, para divertirse”, que paradójicamente va avanzando en muy distintos espacios.

El fascismo comienza a despertar de modo significativo en distintos puntos del globo y, por primera vez en su historia, comienza a calar con fuerza en importantes capas populares de América Latina. Enfrentarlo colectivamente ahora, cuando todavía resulta posible, es una necesidad para la compleja, multifacética y enriquecedora militancia de la Argentina.

No podría desear nada con más fuerza que estar completamente equivocado. Pero, por si no lo estuviera, es que comparto estas reflexiones.

Agradecimientos

Este libro surge a partir del diálogo, la colaboración, los debates, la preocupación común y la ayuda de infinidad de militantes, colegas y compañeres.

Entre elles, y sabiendo que me olvidaré de muches, necesito mencionar a les miembres del Centro de Estudios sobre Genocidio de UNTREF y del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Este libro es deudor del diálogo con ustedes: del acompañamiento en el relevamiento y la búsqueda de información de Ludmila Schneider, las permanentes advertencias (teóricas, militantes y hasta afectivas) de Malena Silveyra e Iván Fina, las criticas incisivas de Jorge Wozniak (muy en especial en relación con los modos de concebir el fascismo y los trabajos historiográficos sobre el mismo y sobre las “nuevas derechas”), así como los señalamientos y la entrega de cada uno de les miembres, entre quienes cabe mencionar especialmente a Natalia Crocco, Marcelo Ferreira, Matías Figal, Anita Jemio, Lucrecia Molinari, Barbie Ohanian, María Belén Olmos, Adrián Rojze, Cecilia Samanes, Perla Sneh, Adriana Taboada, Florencia Urosevich y Lior Zylberman. También a les estudiantes y graduades de mis seminarios de grado y posgrado, muy en especial en este caso en las universidades nacionales de Buenos Aires, Cuyo y Santiago del Estero. Y a Daniel Gonella, Luis María Amaya, el “Pichy” Paccot y les amigues de Villa Carlos Paz, por la hospitalidad y la posibilidad de pensar colectivamente acerca de muchas de estas cuestiones en el momento en que las estaba macerando.

En este caso, debo también agradecer las sugerencias de investigadores de temas específicos que fui necesitando a la hora de darle consistencia a mis intuiciones, muy en especial la ayuda siempre generosa de Gabriel Kessler ante cada una de mis consultas y los valiosos aportes de Alejandra Otamendi y Santiago Galar acerca de las transformaciones en los modos de la criminalidad y las formas de construcción de discursos de la "inseguridad". También, en relación con el mismo tema, los generosos aportes de Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), de la UNTREF, así como los informes que elabora dicho Centro, que me han sido de mucha utilidad para comprender mejor algunos fenómenos que aquí se analizan, en especial en el capítulo 4. También agradezco las sugerencias de Andrea Ximena Holgado en relación con los medios de comunicación y la antipolítica. A mi querido hermano de la vida, el "Cata" Mario Arnoldo Alanis, de quien aprendí seguramente más dirigiendo su tesis de doctorado sobre las relaciones sociales en la cárcel de Catamarca de lo que él pueda haber aprendido de su amigo y director. A mi hermano mexicano, Andrés Barreda Marín, por la paciencia y la generosidad para compartir sus propias reflexiones sobre la historia del fascismo y sus vínculos con las empresas norteamericanas, así como los reiterados diálogos en el DF sobre los análisis marxistas del fascismo, la realidad actual mexicana y la posibilidad de acercarme a compartir mis experiencias con los colectivos de lucha de todo México, vivencias fundamentales que hicieron posible la emergencia de este libro. A Dora Lucy Arias, Lili Uribe Tirado Mejía y las decenas de compañeres colombianes con los que pudimos debatir en Bogotá acerca de estas realidades y a quienes espero poder seguir encontrando en cada lucha, allí, aquí o en todos lados.

A Gianni Tognoni y Simona Fraudatario, del Tribunal Permanente de los Pueblos, por el compromiso y la entrega en las luchas. A Helen Jarvis (de Camboya) y Adam Müller (de Canadá), por ayudarme a pensar y a pensar sobre el pensar. A Norma Fernández, por el proyecto de una Universidad de los Movimientos Sociales.

A Ana Clara Camarotti, Alejandro Capriati y Ana Laura Azparrén Almeira, del Área de Salud del Instituto de Investigación Gino Germani de la UBA, por los enriquecedores diálogos en las oficinas del CEG, en las reuniones con Pablo Vidal y Fabiola Carcar, de la Federación de Centros Barriales del Hogar de Cristo, quienes me acercaron a problemáticas territoriales y de salud fundamentales para comprender algunas de las cuestiones que aquí se tratan, muy en especial en el capítulo 4.

A José Pablo Feinmann, por las charlas de los domingos.

Agradezco, como siempre, el acompañamiento permanente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en mis investigaciones desde hace dos décadas: a Aníbal Jozami, Martín Kaufmann, Pablo Jacovkis, Raúl Sánchez Antelo, Carlos Mundt y Hamurabi Noufouri. El constante apoyo técnico y el compromiso permanente de Facundo Giménez, Eduardo Saraiva Pintos y Claudia Massuh. Del mismo modo, el apoyo brindado desde hace más de una década por el CONICET, a partir de mi ingreso a la CIC en 2008. Y el acompañamiento de la Universidad de Buenos Aires, a través del financiamiento de proyectos UBACYT y del Programa de Voluntariado Universitario y de la creación del Observatorio de Crímenes de Estado en la Facultad de Ciencias Sociales. Momentos difíciles para ser investigador y trabajar en la Universidad pública, pero justamente por ello debemos hacerlo con mayor compromiso que nunca, luchando por instituciones que pretenden arrancarnos o vaciar y que debemos sostener como parte del acervo del campo popular argentino.

Destaco especialmente el entusiasmo de José Natanson y de Creusa Muñoz, de Capital Intelectual, quienes fueron los verdaderos ideólogos de este libro —a partir de lo que era solo un primer artículo para Le Monde— e insistieron en la necesidad e importancia del mismo, logrando que pudiera encontrar el tiempo y la voluntad para encararlo y llevarlo a puerto.

Como siempre, agradezco el apoyo constante de mi hermana Liliana Feierstein, de mis padres Tito y Susana, y el de amigos del alma

como la “Turca” Andrea Benites Dumont, Agustín Comotto, el “Pampa” Damián Montero, María Paula Guzzetti, Guillermo Levy y Santiago Kreimer.

A mis hijos, Ezequiel y Tamara, porque es parte de mi compromiso en estas luchas intentar evitarles la convivencia imposible con el fascismo.

A Virginia Feinmann, porque juntos aprendemos a crecer y porque amo la belleza de dormir y despertar a tu lado.